

PATRICIA L. GONZÁLEZ RODRÍGUEZ

# La policía de investigaciones en el sistema acusatorio mexicano



7

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO  
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS  
INSTITUTO DE FORMACIÓN PROFESIONAL  
DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA  
DEL DISTRITO FEDERAL

LA POLICÍA DE INVESTIGACIONES EN EL SISTEMA  
ACUSATORIO MEXICANO

COLECCIÓN JUICIOS ORALES COORDINADA POR  
JORGE WITKER Y CARLOS NATARÉN

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS  
SERIE: JUICIOS ORALES, Núm. 7

---

Coordinadora editorial: Elvia Lucía Flores Ávalos  
Asistente editorial: Karla Beatriz Templos Núñez  
Edición: Rosa María González Olivares  
Diseño y formación tipográfica en InDesign CS5.5: Javier Mendoza Villegas

PATRICIA LUCILA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ

# LA POLICÍA DE INVESTIGACIONES EN EL SISTEMA ACUSATORIO MEXICANO



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO  
INSTITUTO DE FORMACIÓN PROFESIONAL  
DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA  
DEL DISTRITO FEDERAL  
MÉXICO, 2013

Esta obra fue dictaminada por sus pares académicos y aprobada  
para su publicación por la Comisión Editorial del Instituto  
de Investigaciones Jurídicas

Primera edición: 30 de septiembre de 2013

DR © 2013. Universidad Nacional Autónoma de México

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS

Circuito Maestro Mario de la Cueva s/n  
Ciudad de la Investigación en Humanidades  
Ciudad Universitaria, 04510 México, D. F.

INSTITUTO DE FORMACIÓN PROFESIONAL  
DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA  
DEL DISTRITO FEDERAL

4a. y 5a. Cerrada de Avenida Jardín s/n  
Colonia Ampliación Cosmopolita  
Delegación Azcapotzalco, 02920 México, D. F.

Impreso y hecho en México

ISBN

## CONTENIDO

Presentación .....	VII
Héctor FIX-FIERRO	
Introducción .....	IX
CAPÍTULO PRIMERO. La policía en el sistema penal inquisitivo .....	1
CAPÍTULO SEGUNDO. El sistema acusatorio y la transformación de la función policial .....	23
I. La corresponsabilidad de la policía en la investigación del delito .....	31
II. Las facultades de la policía de investigaciones consignadas en la legislación secundaria que incorpora el sistema penal acusatorio .....	34
III. Facultades y obligaciones de los cuerpos de seguridad pública en general .....	38
CAPÍTULO TERCERO. Principios penales del sistema acusatorio y la actividad policial .....	49
CAPÍTULO CUARTO. La policía de investigaciones en el juicio oral .....	67
CAPÍTULO QUINTO. La prueba y la policía en el modelo acusatorio .....	77
CAPÍTULO SEXTO. Protocolos de investigación y actas policiales .....	93
Actuaciones procesales de la policía de investigaciones .....	93

1. Actas de policía relacionadas con la denuncia de hechos y la escena del crimen . . . . .	96
2. Actas de policía que registran el control y la preservación de la escena del crimen . . . . .	97
CAPÍTULO SÉPTIMO. El modelo de gestión policial en el sistema acusatorio . . . . .	121
I. La gestión policial: límites y posibilidades en la reforma . . . . .	123
II. La gestión policial: sus límites y posibilidades . . . .	126
CAPÍTULO OCTAVO. Código de Ética en la re-significación de la función policial . . . . .	135
CAPÍTULO NOVENO. El proceso de certificación de la policía de investigaciones . . . . .	147
CAPÍTULO DÉCIMO. El sistema de evaluación institucional y ciudadano de la policía. . . . .	153
Anexos . . . . .	157
Fuentes . . . . .	175

*La policía de investigaciones en el sistema acusatorio mexicano*, editado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y el Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, se terminó de imprimir el 30 de septiembre de 2013 en los talleres Desarrollo Gráfico Editorial S. A. de C. V. Municipio Libre 175-A, col. Portales, delegación Benito Juárez, 03300 México, D. F. Se utilizó tipo *Times New Roman* 9, 10 y 11 puntos. En esta edición se empleó papel cultural 57 x 87 de 37 kilos para los interiores y couché de 154 kilos para los forros; consta de 1000 ejemplares (impresión *offset*).



## PRESENTACIÓN

La reforma constitucional de 2008 en materia penal plantea grandes desafíos de carácter técnico, humano y de reingeniería institucional, lo cual exige nuestra atención teórica-reflexiva.

En efecto, la transición que experimentan los sistemas penales mexicanos (local y federal) sugieren la realización de estudios empíricos y comparados que iluminen el proceso de cambio que hoy presenciamos desde los estados hacia la Federación.

La seguridad pública la prevención, la persecución y la procuración de justicia, se armonizan a los parámetros constitucionales con horizontes temporales, precisos a culminar en 2016. Así, la publicidad, la contradicción, la continuidad y la inmediación, junto a la metodología de audiencias orales y posibles expedientes electrónicos, deberán asimilarse en el nuevo sistema penal para la democracia en desarrollo.

En consecuencia dichas dinámicas culturales e institucionales están en curso, detonadas por entidades federativas pioneras, las que en grados distintos de diseños legislativos e implementación se acoplan a principios de transparencia, publicidad y rendición de cuentas que rigen las políticas públicas actuales.

A cubrir y desarrollar tópicos diversos bajo el prisma del derecho comparado que integra el universo de la reforma constitucional y legal en materia penal, y a registrar experiencias internacionales y locales comparadas. Esta colección monográfica de Juicios Orales está destinada a cubrir y desarrollar tópicos bajo el prisma del derecho comparado que integra el universo de la reforma constitucional y legal en materia penal, y a registrar experiencias

## VIII

## PRESENTACIÓN

internacionales y locales comparadas; misma que se ofrece a estudiosos académicos y operadores de este nuevo sistema de justicia y reingeniería institucional penal en gestación.

Este nuevo esfuerzo editorial de nuestro Instituto está coordinado por los doctores Carlos Natarén y Jorge Witker, miembros de nuestra comunidad académica, responsables de la calidad y continuidad de esta colección.

Héctor FIX-FIERRO

## INTRODUCCIÓN

Actualmente organizaciones internacionales, politólogos, economistas y académicos de nuestro país que se preocupan por la gobernabilidad proponen el paradigma de la gobernanza y del buen gobierno como el marco adecuado para la gobernación de la sociedad mundial y de los Estados, y para la buena gestión en las administraciones públicas. Hay tres aspectos principales que definen estos conceptos: la rendición de cuentas (obligación que tienen los altos cargos y empleados públicos de rendir cuentas por la gestión realizada), la integridad y la transparencia. Esta nueva forma de gobernanación es adecuada especialmente para contener la corrupción.

Un análisis de la realidad y de las perspectivas de futuro, incluidas las posibilidades de permanencia, de supervivencia del sistema penal acusatorio en México, lleva a plantear la eficacia de las policías y ubicar el análisis en el paradigma de la gobernanza y el buen gobierno. La praxis diaria de los integrantes de la institución policial en el país, con su dinámica tensión entre sus carencias y sus retos, debe ser objeto de estudio académico, pero sobre todo de una investigación de naturaleza empírica precisa.

Es muy importante enfatizar que en rigor lo que la sociedad espera de la policía principalmente es lo siguiente: *a)* la seguridad de que los delitos que se cometan sean investigados técnica y científicamente; *b)* que los criminales sean identificados y presentados a los fiscales para llevarlos a un juicio justo ante los tribunales, con las pruebas suficientes para ser sancionados; *c)* la certeza de que no existirá impunidad para los crímenes, y *d)* que la policía con su actividad profesional logre disuadir la acción de los delincuentes.

Algunos estados de la República han desarrollado intensos procesos de reforma en el sistema de justicia penal, vinculados a los procesos de transición a la democracia; en esta actividad adoptaron principios y reglas que protegen las garantías básicas del debido proceso penal y en esa transformación destacan procedimientos orales, públicos y contradictorios acompañados para su eficacia de mecanismos que pretenden flexibilizar o desburocratizar las tareas del Ministerio Público. Este órgano de persecución penal tiene ahora facultades destinadas a gestionar adecuadamente sus cargas de trabajo, a través de los denominados mecanismos de solución de controversias que incorporó la reforma comentada en el artículo 17 constitucional.

En otras entidades federativas existen ya perspectivas de reforma procesal de esta índole. Sin embargo, a todos queda claro que uno de los factores de éxito de los citados procesos ha sido el grado en que agentes del Ministerio Público, policías, jueces, magistrados y defensores públicos o privados se han ajustado al nuevo perfil que requiere el proceso penal acusatorio y el grado en que transitan el camino de un entorno escrito inquisitivo a otro auténticamente acusatorio oral y contradictorio.

Como lo observamos en las reformas instrumentadas en los estados de la República, las transformaciones que en menor medida se presentaron son aquellas relacionadas con los sistemas de organización y funcionamiento de las instituciones policiales, que aún reflejan el marco procesal y la práctica vigente de los policías en un entorno producto de la cultura inquisitiva que data de la época colonial. Las actitudes, destrezas y habilidades de estos servidores públicos permanecen estáticas en esta cultura, tanto las formas de comunicarse como las actividades de investigación conectadas a las tareas del Ministerio Público, los juzgados y las partes en el proceso penal, que solo reflejan el formalismo ineficaz del sistema.

El nuevo paradigma procesal privilegia al juicio, desformaliza y agiliza la investigación, que ahora se desarrolla en corresponsabilidad: el Ministerio Público y la institución policial. Concede a la policía más campo de acción durante esta etapa, bajo el con-

## INTRODUCCIÓN

XI

trol funcional del Ministerio Público que dirige la investigación y asegura la legalidad de las diligencias y los medios de prueba.

Iniciadas las etapas de investigación formalizada y la de audiencia intermedia ante el juez de control o de garantías, le incumbe al fiscal defender su postura frente a un contrincante con igualdad de oportunidad procesal. Esta circunstancia coloca a la parte acusadora en compromiso ineludible de profesionalismo, objetividad e imparcialidad durante el proceso penal acusatorio, que exige también el respaldo técnico y científico de la institución policial durante la investigación y persecución penal de los delitos. Las nuevas técnicas, métodos y procedimientos de los miembros del Ministerio Público guardan profundas implicaciones en las actividades que habrán de realizar los agentes de la policía de investigaciones. En otros países la experiencia demuestra que sin una adecuada adaptación y preparación previa por parte de esta institución clave, difícilmente puede alcanzar los efectos positivos que legislativamente plantea la reforma constitucional de 2008.

En consecuencia, el objetivo primordial de esta obra es aportar elementos —enunciativos— de orientación con el objetivo estratégico de impulsar cambios estructurales, organizativos y de administración en la policía de investigaciones. Describir lineamientos indispensables que paralelamente resuelvan los temas de la capacitación y entrenamiento de los policías, a efecto de que la institución policial asuma sus funciones cabalmente en el nuevo sistema acusatorio. Ante la inminente tarea de instrumentación de la reforma procesal a nivel federal, previamente se deben revisar los aspectos institucionales relacionados con prácticas actuales de realización de las averiguaciones previas, incluyendo la forma de utilización y dirección funcional de la policía ministerial y los peritos forenses; la efectividad de las labores y la calidad de los medios de prueba; la medición de la efectividad de los policías en las etapas del procedimiento penal de corte inquisitivo; las estructuras organizacionales, los sistemas de control de gestión y presupuestario, frente a las actuales necesidades del sistema acusatorio.

Los aludidos aspectos institucionales vigentes en las policías de investigaciones del país pueden confrontarse al nuevo perfil institucional exigido por la reforma constitucional de 2008, a efecto de establecer el contenido general de un modelo policial que funcione con eficiencia, eficacia e integridad en el sistema acusatorio mexicano. A partir de junio de 2008 —fecha de publicación de la reforma procesal—, el desarrollo e implementación del sistema acusatorio ha provocado en todo el país una amplia y diversa cantidad de versiones concretas sobre su aplicación. Uno de los puntos críticos y de mayor trascendencia, que ha sido relegado parcialmente, es el relativo a la transformación de la institución policial y sus métodos de investigación criminal.

Importantes avances en materia legislativa adquirió la policía desde la fecha citada y como existe la tendencia de creer que la promulgación legislativa es ya el cambio, la obra delinea en primer término, la coherencia que durante y después de la implementación debe existir en la relación entre ley, acto y cultura institucional de la policía de investigaciones.

Con esta orientación, la obra explica el grado de intervención que en el modelo acusatorio debe alcanzar la institución policial, tanto en el diseño como en la aplicación de políticas criminales de persecución penal, de acuerdo con la facultad de responsabilidad asignada por el artículo 21 constitucional. Con predominio hacia el valor fundamental de la cultura policial en la determinación de prioridades, metodologías y técnicas de investigación forense, para el eficaz tratamiento de los delitos menores y aquellos de connotación y alarma pública por su contenido de violencia.

Ese contexto permite construir los capítulos primero y segundo, en los que se describen las escasas facultades de la policía en el sistema penal de corte inquisitivo y la dispersión de sus criterios de trabajo que provocan corrupción e impunidad, frente a las facultades autónomas y delegadas que ahora posee la policía para la investigación y persecución del delito en el contorno del sistema acusatorio, que sin duda obliga a la creación de un control

## INTRODUCCIÓN

XIII

sobre la calidad de las evidencias y elementos de prueba obtenidos, a través de la elaboración de protocolos de investigación y actas policiales, cuya muestra aparece en los anexos de esta obra.

En los capítulos tercero, cuarto y quinto se delinean algunas directrices que permiten instaurar un modelo de policía de investigación fundado en la misión y ética pública, en los principios del sistema acusatorio y en aquellos otros que son propios del juicio oral. De esta manera, el contenido del capítulo sexto propone un esquema de actividad policial de carácter profesional, dotado de un claro dominio de las ciencias forense y jurídica, que revestida del principio de legalidad dará certeza y confianza en la producción de la prueba en el juicio oral.

El capítulo séptimo plantea: ¿cómo resolver el desafío de construir un modelo de gestión policial que lleve a una reconversión cultural en los integrantes de la policía de investigaciones? Esto se puede lograr con objetivos estratégicos que promuevan liderazgos racionales modernos, una sólida identidad, claridad en los roles del policía en el sistema acusatorio y en la generación de alianzas metodológicas con el Ministerio Público, que potencien sus capacidades en la investigación y persecución del delito.

La obra aborda en los capítulos octavo, noveno y décimo cómo el modelo de investigación en el sistema acusatorio, para un funcionamiento apropiado, requiere de la observancia de un código de ética policial, los procesos de certificación de la policía y un sistema de evaluación a partir de indicadores de resultado y del desempeño de sus miembros, con amplia apertura a la participación ciudadana y al control democrático.

En general, todo el desarrollo de la obra hace énfasis de la necesidad urgente de vencer la cultura inquisitiva y dar paso a la lógica de la investigación con método y técnicas eficaces, que solo es posible instrumentar desde una auténtica policía de investigación, profesional, científica y técnica, sustentada en una deontología que cubra en su conjunto la actividad policial.

## CAPÍTULO PRIMERO

### LA POLICÍA EN EL SISTEMA PENAL INQUISITIVO

Partiremos en este apartado de una descripción breve de las funciones que la policía de investigación viene desarrollando en el sistema penal de corte inquisitivo para describir lo opuesto de sus funciones en un sistema acusatorio y adversarial.

El contraste entre ambos sistemas en la función policial cambiará la perspectiva que se tiene del trabajo complejo de nuestra policía mexicana en la investigación penal. ¿Habrà algo que modifique la rutina, las técnicas y el método anquilosado de la función policial? El contraste de estos aspectos entre uno y otro sistema penal, conducen a explicarnos por qué sucede que los ciudadanos siempre cuestionan los resultados de la policía investigativa. ¿Cómo esperar que estos personajes rechazados por la comunidad se conviertan en personas respetadas? ¿Qué pueden hacer para poseer la confianza de los ciudadanos en los resultados de sus investigaciones penales? ¿Por qué cuando obtienen resultados la ponderación sobre su trabajo investigativo generalmente es injusta?

Una consecuencia directa de todo el esfuerzo de la policía de investigaciones que no se reconoce por los ciudadanos, está asociada a la falla en las estructuras y funciones de la institución policial donde no existe la supervisión de la actividad diaria de la policía de investigación. Esto con claridad lo advirtió el Centro de Investigación y Docencia Económicas al llevar a cabo un estudio que tuvo como finalidad evaluar la procuración de justicia del estado de Chihuahua, después del proceso de implementación en 2010. En ese estudio se destacó del sistema inquisitivo la debilidad institucional que calificó como “un problema crucial... eran causa y consecuencia de carencias estructurales del siste-



ma, en materias tales como sistemas de información, de supervisión, de análisis de la información, de estándares o protocolos institucionales para realizar las tareas cotidianas y de controles administrativos”.<sup>1</sup>

Por otro lado, en el sistema inquisitivo vigente en México, esa debilidad institucional únicamente proyecta, en deterioro de la policía, la actividad singular y aislada de personajes policiales “prototipo de comandantes o jefes policiales”, que se convierten en funcionarios “respetables y admirados” cuando los medios de comunicación llegan, en casos de excepción, a darles el mérito por ciertos resultados generalmente producto del azar en una concreta investigación criminal.

La institución policial no tiene planes ni programas permanentes de comunicación social. En estos la divulgación de los resultados concretos sobre temas de criminalidad y manejo de estadísticas debe ser una política pública indispensable y de primer orden. La explicación de las causas o motivos, por los que en forma permanente se presenta la depuración de la policía, se convierte en otro tema de interés prioritario en la divulgación de resultados.

Los ciudadanos debemos saber cuántos y cuáles policías causaron baja de la institución por omisión, negligencia o corrupción. Un programa de seguimiento de todos los policías despedidos en las estructuras policiales podría ayudar en esto. Conocer qué actividad lícita desempeña, después de haber abandonado la policía por no superar los exámenes de control de confianza, proporciona tranquilidad ciudadana y fortalece los actos de transparencia de la institución policial.

Por otro lado, en las tareas cotidianas, las escasas facultades de la policía son una característica notoria y recurrente en la mayoría de la legislación de los estados, y más o menos amplia, en el procedimiento penal de corte inquisitivo que incorpora el

<sup>1</sup> Caballero, José Antonio *et al.*, *La Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua, gestión 2004-2010*, México, CIDE, División de Estudios Jurídicos.

Código Federal de Procedimientos Penales y que recientemente pretendió su ampliación en la Ley de la Policía Federal. De esto es oportuno presentar algunas reflexiones necesariamente breves sobre el significado y las implicaciones que tuvieron y continúan proyectando esas facultades de la policía en materia de investigación penal, basadas en un modelo procesal que ha colapsado.

En el artículo 3o. del Código Federal de Procedimientos Penales<sup>2</sup> se establecen las atribuciones de la policía de investigaciones en materia federal: “Actuarán bajo la conducción y el mando del Ministerio Público en la investigación de los delitos, en términos de lo dispuesto por el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

El texto descrito destaca la falta de adecuación de las normas procesales en el nivel federal a la reforma constitucional, que elimina la dependencia orgánica y en cambio, regula una corresponsabilidad entre Ministerio Público y policía, lo que significa que por el estatus constitucional que adquiere la policía en las facultades de investigación del delito, está obligada a definir su propia doctrina funcional, respecto a las acciones a realizar, con el objeto de llevar a cabo su nuevo rol en las diferentes etapas del procedimiento penal acusatorio.

Las facultades conferidas por el citado código procesal penal a la policía de investigaciones deben ejercerse bajo el concepto de corresponsabilidad. Para cumplir con la misión normativa de rango constitucional, la policía está obligada a definir su propia ideología policial, coherente con los principios que regulen el procedimiento penal acusatorio; a crear una organización y administración moderna, adecuada para el cumplimiento de la nueva concepción de la investigación del delito bajo la óptica de la corresponsabilidad institucional.

De este modo la policía no se subordina al Ministerio Público administrativa o institucionalmente, y su personal actuará en coordinación o colaboración, quizá a través de unidades orgáni-

<sup>2</sup> Código Federal de Procedimientos Penales, *Diario Oficial de la Federación*, 30 de agosto de 1934 (última reforma del 14 de junio de 2012).

cas, en el desarrollo de las actividades de investigación criminal que el sistema de gestión administrativa le asigne. Este será el único vínculo de subordinación de la policía con el Ministerio Público: las diligencias que se realicen en la investigación de un delito; la subordinación funcional de la policía hacia el Ministerio Público comprende acatar las instrucciones de dirección y conducción jurídica de esta institución respecto a las actividades investigativas.

En este marco de relación, propio del proceso de investigación penal en curso, bajo la dirección y mando de los agentes del Ministerio Público, la policía de investigaciones lleva a cabo las facultades descritas en el artículo 3o. del citado código procesal:

I. Recibir las denuncias sobre hechos que puedan ser constitutivos de delito, sólo cuando debido a las circunstancias del caso aquéllas no puedan ser formuladas directamente ante el Ministerio Público, al que las Policías deberán informar de inmediato, así como de las diligencias practicadas y dejarán de actuar cuando él lo determine;

II. Practicar las diligencias necesarias que permitan el esclarecimiento de los delitos y la identidad de los probables responsables, en cumplimiento de los mandatos del Ministerio Público;

III. Practicar detenciones en los casos de flagrancia en los términos de ley y poner a disposición de las autoridades ministeriales competentes a las personas detenidas o los bienes que se hayan asegurado o estén bajo su custodia, con estricto cumplimiento de los plazos constitucional y legalmente establecidos;

IV. Participar, en auxilio del Ministerio Público, en la investigación y persecución de los delitos, en la detención de personas o en el aseguramiento de bienes relacionados con la investigación de los delitos, cumpliendo sin excepción los requisitos previstos en los ordenamientos constitucionales y legales aplicables;

V. Registrar de inmediato la detención, como garantía del inculpado, en términos de las disposiciones aplicables, así como remitir sin demora y por cualquier medio la información al Ministerio Público. En dicho registro deberá anotarse la resolución que se emita con relación a su situación jurídica.

El registro deberá ser cancelado de oficio y sin mayor trámite cuando se resuelva la libertad del detenido o cuando en la averiguación previa no se hayan reunido los elementos necesarios para ejercitar la acción penal, cuando se haya determinado su inocencia o cuando se actualicen las hipótesis previstas en el artículo 165 Bis de este código;

VI. Preservar el lugar de los hechos y la integridad de los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como los instrumentos, objetos o productos del delito. Las unidades de la Policía facultadas para el procesamiento del lugar de los hechos deberán fijar, señalar, levantar, embalar y entregar la evidencia física al Ministerio Público, conforme a las instrucciones de éste y en términos de las disposiciones aplicables;

VII. Solicitar al Ministerio Público, que requiera a las autoridades competentes, informes y documentos para fines de la investigación;

VIII. Garantizar que se asiente constancia de cada una de sus actuaciones, así como llevar un control y seguimiento de éstas. Durante el curso de la investigación deberán elaborar informes sobre el desarrollo de la misma, y rendirlos al Ministerio Público, sin perjuicio de los informes que éste le requiera;

IX. Emitir los informes, partes policiales y demás documentos que se generen, con los requisitos de fondo y forma que establezcan las disposiciones aplicables, para tal efecto se podrán apoyar en los conocimientos científicos y técnicos que resulten necesarios;

X. Proporcionar atención a víctimas, ofendidos o testigos del delito, para tal efecto deberá:

a) Prestar protección y auxilio inmediato, de conformidad con las disposiciones legales aplicables;

b) Informar a la víctima u ofendido sobre los derechos que en su favor establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

c) Garantizar que reciban atención médica y psicológica cuando sea necesaria;

d) Adoptar las medidas que se consideren necesarias tendientes a evitar que se ponga en peligro su integridad física y psicológica, en el ámbito de su competencia;

e) Recibir y preservar todos los indicios y elementos de prueba que la víctima u ofendido aporten para la comprobación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del imputado, informando de inmediato al Ministerio Público a cargo del asunto para que éste acuerde lo conducente, y

f) Otorgar las facilidades que las Leyes establezcan para identificar al imputado, sin riesgo para ellos, en especial en los casos de delitos contra la libertad, el normal desarrollo psicosexual o el libre desarrollo de la personalidad.

XI. Dar cumplimiento a las órdenes de aprehensión y demás mandatos ministeriales y jurisdiccionales;

XII. Entrevistar a las personas que pudieran aportar algún dato o elemento para la investigación en caso de flagrancia o por mandato del Ministerio Público;

XIII. Hacer constar el estado de las personas, cosas y lugares, mediante inspecciones, planos, fotografías, video filmaciones, y demás operaciones que requiera la investigación, sin perjuicio de la intervención que corresponda a los servicios periciales. Las constancias, junto con las fotografías, video filmaciones y demás elementos que las soporten deberán remitirse al Ministerio Público para agregarse a la averiguación previa, y

XIV. Las demás que le confieran este Código y demás disposiciones aplicables.

El desarrollo de las facultades descritas en el Código Federal de Procedimientos Penales, al ajustar sus normas a la reforma constitucional del 19 de junio de 2008 que incorporó el sistema acusatorio, predominantemente oral, tendrán que entenderse solo para el cumplimiento de las funciones relacionadas con las actividades de investigación del delito. El policía designado al caso específico para el cumplimiento de los fines del proceso penal, acatará las instrucciones que le haga el agente del Ministerio Público.

Estas nuevas reglas de subordinación funcional al Ministerio Público, imponen la necesidad de una reingeniería en la metodología de gestión de la policía. En el caso federal, de la denominada Agencia Federal de Investigaciones, y en el nivel estatal, las policías ministeriales y estatales de prevención del delito. El

modelo de gestión debe contener los indicadores de desempeño y de resultados de la institución, de forma que pueda hacerse un seguimiento real del flujo de las actividades investigativas a cargo de cada policía o de las diversas acciones investigativas que describa el Código Federal de Procedimientos Penales que incorpore el sistema acusatorio. Así es como se puede llevar un control efectivo del cumplimiento de las instrucciones de los agentes del Ministerio Público hacia la policía y de la efectividad en su ejecución.

Impone el sistema acusatorio también, realizar ordinariamente reuniones de coordinación en las que el Ministerio Público y la policía, como objetivo estratégico, construyan un sistema de evaluación de resultados en las diferentes investigaciones de delitos y en este sentido puedan delinear una alianza estratégica entre ambas instituciones, que permita mejorar los mecanismos de investigación y la comunicación oportuna en cada caso concreto en el que participan en corresponsabilidad investigando la consumación o tentativa y la autoría o participación, de quienes han realizado el o los delitos. En estos diálogos deben llegar a un consenso de colaboración, en especial cuando se establezcan los procesos obligatorios respecto de la atención que proporcionan a las víctimas o sobrevivientes de la violencia, con la finalidad de evitar la duplicidad de funciones, que actualmente impera en las estructuras del Ministerio Público y la policía federal.

Como lo explicaré, la actividad policial en el procedimiento penal mexicano, enclavado en un sistema de corte inquisitivo, presenta graves fallas. Siempre es bueno mantener una actitud crítica, reflexiva y constante que conduzca a la ineludible aproximación del quehacer cotidiano de la policía de investigaciones y de sus principales actores en términos de los resultados que producen. En el contexto nacional, con motivo de la reforma constitucional de 2008, se están llevando a cabo importantes discusiones sobre las posibilidades de mejora en la función policial.

Algunas veces los debates quedan solamente en el discurso oficial y en otras, se trasladan a reformas legislativas o adminis-

trativas con el propósito de adaptar la institución policial al sistema acusatorio. Lo importante es no perder nunca la capacidad de preguntarse sobre cómo crear una nueva reingeniería, que permita el adecuado funcionamiento de la policía de investigaciones, o incluso todavía más, respecto de la pertinencia, idoneidad y necesidad de la instalación de una policía nacional de orden técnico y científica, que conduzca y aplique metodologías en las investigaciones de delitos de alto impacto social por la violencia que involucran y de aquellos casos asociados al crimen organizado.

Veamos cómo el escenario que plantea la reforma constitucional aludida, dentro del procedimiento penal acusatorio para la policía, requiere de un modelo de gestión policial que pueda salvaguardar las garantías penales sustantivas, que cobran sentido y se hacen realidad, porque tienen un contexto procesal adecuado, el cual asegura en niveles aceptables las pautas de comportamiento ético-policial, que hacen viable su protección, con un enfoque de dualidad simultáneo.

En la nueva reingeniería policial debe existir una debida coordinación y delimitación de responsabilidades entre el Ministerio Público y la policía, con el objeto de determinar la forma en que será fiscalizada la actuación de ambas instituciones; sobre todo bajo el enfoque de las garantías procesales, como quedaron recogidas en las reformas de junio de 2008, y en base a las cuales la policía de investigaciones tiene obligación de actuar y salvaguardar. Estas garantías son útiles para construir la reingeniería que marque en el país la pauta de un modelo policial cuyo objetivo es conocer la verdad real de los hechos, pero siempre controlada, de conformidad con los estándares del procedimiento penal acusatorio.

Ese valor de la verdad legitima la función de la policía técnica y científica en la investigación de los delitos. Pero además, abre la puerta a la rendición de cuentas de cada policía en los casos concretos y facilita la creación de mecanismos que los ciudadanos tendrán para solicitar a las autoridades de ambas instituciones —Ministerio Público y policía— la investigación en las

fallas dolosas o imprudenciales de sus miembros y la aplicación de las correspondientes sanciones.

Al respecto Ferrajoli indica: “el objetivo justificador del proceso penal se identifica con la garantía de las libertades de los ciudadanos, a través de la garantía de la verdad —una verdad no caída del cielo, sino obtenida mediante pruebas y refutaciones— frente al uso y al error”. De forma que, con base en esta afirmación autorizada, consideramos que el valor de la verdad se proyecta entonces de manera directa, sobre las diversas actividades de la policía que está obligada a obtener evidencias y elementos de prueba suficientes durante las diversas etapas del procedimiento penal acusatorio, que conduzcan al esclarecimiento de los hechos, así como a develar la identidad de los autores o partícipes de estos.

En este contexto, la policía de investigaciones requiere de un sistema de gestión y evaluación que permita medir y evaluar el desempeño profesional de cada policía. Situación que no ocurre en las instituciones policiales que funcionan bajo la filosofía del sistema inquisitivo. Esta constituye una de las fallas más graves que presenta la policía actual, en la que prevalece la opacidad y el disimulo en el cumplimiento de la función investigativa.

Por otra parte, debe tenerse presente que en el sistema inquisitivo la policía está ubicada en el subsistema de prevención; en la procuración de justicia por lo tanto, el primer elemento característico del modelo inquisitivo radica en que las funciones de investigar, acusar y juzgar se concentran en una misma autoridad.

Esta concentración trae consigo diversos problemas en el derecho de acceso a la justicia. El primero se relaciona con la victimización institucional que produce la policía en el contacto primario con las víctimas; las amplias facultades discrecionales respecto a los procesos de atención a las víctimas sobrevivientes son debido a la ausencia de estructuras o unidades orgánicas del Ministerio Público que estén dedicadas a su protección; el desinterés de los agentes del Ministerio Público en el tratamiento adecuado que deben recibir. Actitudes que quizá emergen por una dosis enorme



de insensibilidad, en algunos casos originados por las cargas de trabajo no solo jurídico, sino de orden administrativo en esa institución, en la que se maquilan cientos de expedientes diariamente, a través de un sistema escriturista anquilosado.

Otro problema que se visualiza con bastante notoriedad es la ausencia de contrapesos en el sistema judicial y las áreas de procuración de justicia e instituciones policiales que, como lo mencionan Duce y Pérez Perdomo, citados por el maestro Carbonell, provocan que se reduzca “la posibilidad de que la autoridad, al desempeñar sus distintos roles, actúe de manera imparcial y objetiva”.<sup>3</sup> Con mayor razón ocurre en el actuar cotidiano de la policía, por lo tanto, se cancela la probabilidad de que asuma un rol más participativo, con facultades autónomas en la investigación criminal.

Es cierto que la concentración en las funciones de investigar, acusar y juzgar provoca en la mayoría de los asuntos que las conclusiones a las que llegue el agente del Ministerio Público, el juez o magistrado, y principalmente la policía de investigaciones, es que ratifiquen en gran parte lo inicialmente realizado, a través de la técnica del expediente escrito. Invariablemente, el acusado será culpable o inocente a partir de las diligencias practicadas por la policía en la averiguación previa. Incluso, este sistema de simulación de investigaciones aparece respaldado en el sistema de corte inquisitivo por tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las que da preeminencia a la confesión del inculpado, así como a las primeras diligencias realizadas durante la investigación, en las que no existe ningún control judicial. Como podemos constatar, el principio de contradicción esencial en cualquier procedimiento penal acusatorio, no existe en un sistema de justicia de corte inquisitivo.

Como una de las graves fallas de este modelo de justicia mexicana, que todavía sigue vigente en gran parte del territorio nacional, se presenta la aparente separación de funciones entre el

<sup>3</sup> Carbonell, Miguel, *Los juicios orales en México*, 3a. ed., México, Porrúa, 2011, p. 116.

Ministerio Público y el juez, que conforme lo establece el artículo 21 constitucional, hace funciones de investigar y acusar; por su parte, el juez, a través de su decisión, determina condenar o absolver a una persona que fue sometida al proceso penal de corte inquisitivo. Sin embargo, la realidad es que la legislación procesal en este tipo de asuntos proporciona en sus diferentes etapas una enorme participación del Ministerio Público para que asuma decisiones respecto a la existencia o inexistencia del delito, pudiendo anticipar la terminación del procedimiento penal; por lo que resulta claro que a través de sus diversas resoluciones también lleva a cabo funciones que deben ser materia exclusiva del juez, pero además no conforme con estas, invade la esfera de actuación policial cuando plagia facultades de la policía durante la investigación de los delitos.

De tal manera que el Ministerio Público desempeña funciones procesales distintas: como órgano que impulsa el ejercicio de la acción penal y garantiza la persecución penal, como investigador policial y otra, indirectamente, como juez. Esta tríada de actuaciones caen en el extremo de la ineludible ruptura del principio de igualdad procesal y lleva consigo una alta probabilidad de riesgo hacia la violación del principio de inocencia.

Probablemente este contexto de fallas estructurales y funcionales del modelo penal inquisitivo y el desarrollo e implementación del sistema acusatorio en México, ha provocado en todas sus dimensiones —legislativa, administrativa, informática, de gestión, capacitación, infraestructura— una amplia y diversa cantidad de opiniones específicas en torno a su instrumentación y aplicación. Uno de los puntos críticos y de mayor trascendencia lo constituye la transformación de la institución policial y de sus métodos de investigación criminal, porque alcancen niveles de eficacia, eficiencia y economía, a través de la creación de un sistema de administración y organización policial que permita la evaluación, transparencia y rendición de cuentas.

De este modo, es necesario cambiar el estatus que la policía detenta en el procedimiento penal de corte inquisitivo que está

reducido a una institución pública entre muchas otras, que presta auxilio al Ministerio Público, obedeciendo y respondiendo jurídicamente las órdenes de procuradores y agentes del Ministerio Público en turno y lo que menos importa es su profesionalización en la investigación criminal. En nuestros días, a partir de la reforma constitucional de 2008, se confiere a la policía como institución, en el marco del sistema acusatorio, el estatus de sujeto procesal interviniente, encarnado en policías que personalmente asumen tareas de investigación, bajo las potestades que el código procesal asigne al cargo de policía investigador. Por otro lado, las funciones de acusar y juzgar quedaron claramente separadas entre sí y son cada una responsabilidad de instituciones distintas: Ferrajoli, citado por el maestro Carbonell, apunta al respecto que “La separación de juez y acusación es el más importante de todos los elementos constitutivos del modelo teórico acusatorio, como presupuesto estructural y lógico de todos los demás”.<sup>4</sup>

Debemos recordar que todavía en México la policía de investigación, a nivel federal y en algunos estados, habrá de ajustar sus actividades de investigación al esquema del modelo acusatorio, que funciona bajo los principios de oralidad, publicidad y transparencia, dejando atrás las prácticas añejas del sistema inquisitivo, que en nuestro país se caracteriza por ser escrito, cerrado y con un enorme nivel de opacidad. Este componente negativo se profundiza aún más en las instituciones policiales encargadas de auxiliar al Ministerio Público en la investigación del delito.

Con este modelo procesal de corte inquisitivo, la policía dedica gran parte de su esfuerzo institucional a la integración de expedientes de averiguación previa y participa en la reproducción automatizada de actuaciones que aparecen en dicho expediente, con datos escritos a través de un “parte informativo” o “reporte policial”. En el mejor de los casos, entrevista a la víctima o sus testigos para repetir en su “parte informativo” lo expuesto por ellos. El juez decide entonces la inocencia o culpabilidad del acusado a partir de la lectura y estudio de esta clase de actuación-

<sup>4</sup> *Ibidem*, p. 119.

nes procesales repetitivas y sin verificación alguna. Incluso, en ocasiones, la policía llega a obtener evidencias o prueba material, cuya información determinante en un caso, ante la ausencia de mecanismos de control y de gestión policial, se pierden en las oficinas de estos servidores públicos o se omite su existencia.

Casi todos los medios de prueba que integran la averiguación previa en el modelo inquisitivo se documentaron en un expediente por el agente del Ministerio Público; en algunos casos la información es producto de violencia policial o manipulación de las investigaciones. El juez no estuvo presente durante su recepción.

La realidad mexicana pone de manifiesto que un alto porcentaje de los jueces emiten sus decisiones en base a información derivada de un trabajo policial poco pulcro, simulado y alterado por las necesidades del poder político o económico en turno. Los jueces deciden los casos a través de la delegación de facultades a secretarios del tribunal o personas que auxilian como oficiales de documentación. Sin la presencia o el control del juez, los policías obtienen elementos de prueba que distorsionan lo ocurrido en el pasado. Los jueces no escuchan directamente a las víctimas, testigos o a los acusados; por lo general se mantienen protegidos en una burbuja de cristal impenetrable para el ciudadano y edifican el más reprochable monumento a la soberbia intelectual. Esto suele verse en el quehacer cotidiano del sistema judicial, tanto en las entidades federativas como en el sistema procesal vigente a nivel federal, en los que está ausente la transparencia y rendición de cuentas de estas instituciones de justicia.

Otro problema que refleja el sistema inquisitivo mexicano aparece con bastante nitidez en la cantidad excesiva de expedientes que debe atender un policía en su actividad cotidiana y la complejidad de algunas investigaciones. Esta detección de las fallas del procedimiento penal de corte inquisitivo no tiene por qué restar validez a la crítica, al contrario, la pone en su verdadera dimensión. Una crítica que construye cuando reconoce que con semejante carga de trabajo asignada y distribuida, sin organización alguna, el policía al día siguiente abandona el asunto, deja

de realizar acciones de seguimiento debido a la tensión que le genera la llegada de otros casos nuevos, los que corren la misma suerte que los anteriores, llega a la mayoría el abandono, sin que se vuelvan a retomar las investigaciones en cada uno de ellos. Situación que con claridad refleja la ausencia de controles internos a través de un moderno sistema de gestión administrativo.

Hemos revisado algunos problemas y fallas que presenta la actividad policial en el modelo inquisitivo; hemos visto como todos estos casos conduce al automatismo policial, a esa situación estacionaria en la que cada policía de investigación, en forma de ritual, entrega al agente del Ministerio Público un oficio de mero trámite en el que informa algunas “actividades” que supuestamente llevó a cabo en cumplimiento a las instrucciones de investigación del delito, sin aportar dato alguno en torno al esclarecimiento del hecho.

La inactividad de la policía en esta situación deriva de un problema estructural en el cual permanece sumergida en la impenetrable opacidad del sistema inquisitivo. Además de otros problemas insuperables, este modelo presenta fallas endémicas, como insuficiencia de personal asociada a la ausencia de un sistema de gestión policial y falta de sistemas de seguimiento de casos, supervisión y evaluación; así cuando se exige informe y rendición de cuentas por la ausencia de investigación no pasa absolutamente nada. No hay responsabilidad ni sanción que sea impuesta, salvo casos excepcionales.

Como era de esperarse, la institución policial en el modelo inquisitivo funciona de manera totalmente diferente a la esperada por los ciudadanos. Sus mecanismos de control interno son verdaderas simulaciones a la revisión de sus tareas y responsabilidades, o en el último de los casos no existen. De tal forma que en las facultades que desarrolla en el procedimiento penal acusatorio, como resultado de sus tareas, prevalecen informes policiales sin contenido sustancial en materia de prueba.

En cambio, en el modelo acusatorio no hay expediente de averiguación previa, la acumulación de elementos de prueba e in-

formación en el registro de la carpeta de investigación no tiene valor para determinar la culpabilidad o inocencia de un acusado. Pero un adecuado sistema de administración de prueba concentra la información; una vez que se analiza y procesa, se convierte en un producto informativo de calidad que se lleva a un juicio oral, donde adquiere carácter de prueba al desahogarse ante el juez.

Los modernos y oportunos registros de información son importantes para el agente del Ministerio Público o fiscal, porque sus proposiciones fácticas de la teoría del caso serán producto del análisis de esta información que como medio de prueba producirá la convicción de un juez de garantía o control, quien, en su caso, iniciará el proceso penal acusatorio o frente a un juez que decidirá el juicio oral.

En la realidad resultan insuperables las descritas fallas de las instituciones policiales producto del sistema de corte inquisitivo. La ausencia de metodologías para la investigación de los delitos, la falta de controles de la función policial, provoca en nuestro país que los miembros de la institución policial sean objeto de cuestionamientos constantes, reiterados e insistentes, en torno a la justicia penal y la seguridad ciudadana. Siempre los señalamientos se dirigen a resaltar la ineficacia y los fracasos en las investigaciones.

Las preguntas recurrentes en el tema de la actividad policial y la falta de resultados por parte de los ciudadanos son las siguientes: ¿Por qué la policía no detiene a los “responsables” de delitos de extrema gravedad? ¿Cuándo la policía detiene a los “probables responsables”? ¿Por qué generalmente son liberados por el juez? ¿La policía tiene capacitación y adiestramiento para llevar a cabo investigaciones criminales? ¿Qué responsabilidad enfrentan por omisiones o negligencias en la investigación penal? ¿Por qué no se resuelven los problemas estructurales y funcionales de la institución policial? ¿Son suficientes los códigos procesales de corte acusatorio para mejorar la función policial en México? Las respuestas a estas interrogantes son el objeto de análisis del texto que el lector tiene ahora a su disposición.

El pensamiento generalizado de que todos los policías en el país son corruptos, que todos tienen nexos con la delincuencia o que todos viven del chantaje y manipulación, resulta totalmente absurdo. Abona a la pésima imagen ciudadana que se ha formado de la policía, con razones de sobra o sin razón alguna. Lo cierto es que, sin pretender justificar la actividad policial en el modelo inquisitivo, los ciudadanos deben saber que las graves fallas de la policía radican principalmente en la estructura y funcionamiento del propio sistema. En todo el territorio nacional existen policías profesionales, que día a día ponen en riesgo su vida para llevar a un juicio justo a cientos de imputados que dañan la vida, la integridad física y el patrimonio de las personas.

Habría que preguntarnos con seriedad y profesionalismo: ¿Qué pasaría si realmente la mayoría de los policías están asociados con la delincuencia? ¿Cómo podríamos sobrevivir? Nuestra vida sería un caos. Lo inesperado, algo que se antoja escasamente probable, es que muchos policías tienen honor y coraje por su profesión. La resignación ciudadana frente a la actuación indebida de algunos policías no tiene por qué dejar de ser creativa. Paradójicamente, dejar actuar a la policía con facultades autónomas o delegadas no ha sido la consecuencia de su fracaso, por el contrario, será producto del profesionalismo y la vocación ética en el servicio público, y solo si puede evaluarse y medirse el resultado de cada investigación criminal a través de indicadores de desempeño. Hay que darle otro significado, otro giro a la vida de los policías de investigaciones, a través de la capacitación y entrenamiento en un modelo de justicia que se caracteriza por la transparencia y rendición de cuentas.

No debe olvidarse que el día a día, los policías lo enfrentan con grandes desafíos y escasos incentivos institucionales. Su labor la desempeñan guiados o fortalecidos por motivaciones personales y profesionales. La historia rutinaria de la policía en un sistema penal de corte inquisitivo está presente todavía en nuestro país. Las añejas estructuras policiales continúan gravando el erario público y provocando espacios de corrupción; es la opor-

tunidad histórica de avanzar hacia el progreso de las instituciones de justicia que mejoren la calidad de vida de la población en nuestro país. Un estudio realizado por la Oficina Anticorrupción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la República Argentina, citado por Malem Seña, distingue entre

...factores organizativos como la ausencia de controles, de transparencia, de visibilidad o de discrecionalidad y factores individuales, como la socialización de las normas de la organización, los patrones de comportamientos, la capacidad profesional, los intereses particulares, los valores éticos.<sup>5</sup>

Evidentemente en el sistema penal mexicano de corte inquisitivo no existen, y muchos menos en la institución policial.

Cada época, cada sexenio estatal o federal, la historia de la policía se recicla sin modificaciones sustanciales a sus tareas investigativas. Cada personaje político tiene su propia interpretación acerca del quehacer de la policía de investigaciones. En el peor de los casos, la mezclan y confunden con la policía orientada a la prevención de los delitos. Contextualizar las políticas públicas legislativas en orden a la práctica del derecho en la investigación de los delitos, tiene un valor importante para alcanzar objetivos de eficiencia y eficacia en la policía investigadora mexicana.

Una respuesta correcta a dicho estado de cosas, sin duda, se encuentra en la integración de un sistema policial bajo el enfoque del sistema penal acusatorio de incorporación reciente a la legislación constitucional mexicana. Disminuir considerablemente los señalamientos negativos hacia la policía de investigación, quitarle ese sentido de rechazo comunitario, implica modificar las formas, procedimientos, procesos y el método de trabajo — metodologías— de la institución policial e incorporar la supervisión institucional sobre las tareas sustantivas.

<sup>5</sup> Malem Seña, Jorge F., *La corrupción. Aspectos éticos, económicos, políticos y jurídicos*, Barcelona, Gedisa, 2002, p. 73.



Algo reconocible en el sistema acusatorio está precisamente en la calidad que puedan tener las investigaciones a realizar por cada miembro de la institución policial, con el objeto de presentar una teoría del caso incuestionable en un juicio oral, en el que sea irrefutable la prueba, en el que las víctimas perciban y se sientan totalmente resarcidas por el daño material y moral que ocasionó la conducta derivada de un delito. Lo sutil y lo sencillo en la investigación del delito por parte de la policía de investigaciones, lleva a la exaltación de los derechos de la víctima. Esta reconoce de inmediato los esfuerzos realizados por la policía cuando se localizan instrumentos probatorios que muestran con precisión la responsabilidad penal de la persona que ha dañado la vida, la libertad, el patrimonio o la paz de su vida.

El contraste de la historia rutinaria de la policía en México es precisamente la actividad constante y permanente de servicios en favor de las víctimas. Llevar a cabo estas acciones necesarias requiere de la transformación a las estructuras administrativas, jurídicas y de orden cultural de las policías. Como no se tienen muchas propuestas para las tareas policiales en el nuevo modelo acusatorio, la vanguardia nos enseña a estar en el tiempo y esto permitirá el avance del conocimiento técnico policial. Para empujar hacia la construcción de un modelo de gestión de calidad, que fortalezca el sistema policial en el ámbito de la investigación penal, consideramos apropiado iniciar con las tareas elementales de todo policía de investigación en el marco del debido proceso penal.

El cómo construir registros policiales seguros, que tengan validez en el proceso penal acusatorio y adversarial, y el cómo utilizar esa información para actividades policiales futuras de cualquier otra índole, que contribuyan a establecer asociaciones de personas involucradas en presentes y futuros delitos o simplemente que permita la evaluación del trabajo individual o en equipo de los policías, es indudablemente de bastante utilidad.

Nadie puede cuestionar que las actas de la policía constituyen instrumentos valiosos para este tipo de registro, que en el futuro

facilitarán el expediente electrónico; además, preserva la información de calidad en torno al delito, a los probables imputados, a los objetos o instrumentos de la actividad delictiva e inclusive, para establecer la cantidad y calidad del trabajo llevado a cabo por el policía —sistemas de evaluación— que realizó determinados actos procesales en una investigación penal.

En este texto, comparto mi propia mirada de la función policial investigativa, a través de la mirada clara y precisa de la experiencia directa en el trabajo con policías en nuestro país. Una experticia que se suma a las actividades realizadas por más de treinta años en el sistema penal, con amplia interacción en el ámbito de la academia y la judicatura. La observación detallada y profunda de la institución policial en diversos actos del procedimiento penal después de haber explorado en algún tiempo sus inquietudes, bajo el enfoque de una fiscal o bajo la perspectiva de la defensa pública.

El resultado es unívoco y no disonante como muchos lo creen, la respuesta es la misma de siempre: la policía de investigación necesita capacitación, entrenamiento y un método de trabajo técnico-científico que se caracterice por ser sostenible y verificable. Los problemas estructurales del sistema penal inquisitivo impiden cualquier avance en materia policial; la alternativa está, sin duda, en intercalar las modificaciones del régimen policial a las nuevas exigencias del sistema acusatorio mexicano.

Las metodologías apropiadas que orientarán a la policía de investigaciones, tendrán que adaptarse a un nuevo sistema de gestión administrativa y jurídica, tendente a fortalecer el resultado del quehacer cotidiano en la investigación criminal. Sin duda, esto permitirá la evaluación constante de cada policía en los diversos actos procesales ejecutados con motivo de la investigación de un delito. En los próximos capítulos se abordarán los elementos básicos para integrar la parte sustancial de esa metodología: las actas policiales y los protocolos de investigación criminal en el modelo acusatorio.

*El problema de la justicia penal y seguridad pública*

En nuestro país la mayor preocupación de los ciudadanos tiene una clara definición hacia la percepción generalizada que existe respecto a la incidencia delictiva. En su mayoría, saben que alrededor del 91% —cifra proporcionada además por el INEGI— de los delitos queda sin castigo, conocen sobre resultados de investigación social que muestran como la impunidad promedio es de 96%. Tienen claro que las autoridades han mermado su capacidad de respuesta para enfrentar, disuadir y, en su caso, sancionar a los autores o partícipes de los delitos.

Existen pocos estudios en el abordaje científico de evolución de incidencia delictiva en México. A partir de los años ochenta comienza el repunte de diversos delitos, debido principalmente a las actividades vinculadas con el narcotráfico. Hoy por hoy, el avance del crimen organizado se ve reflejado en los miles de homicidios o “ejecuciones” realizados entre grupos criminales, secuestros, extorsiones y robos con violencia. ¿Cuál ha sido la respuesta del gobierno mexicano? Las respuestas por lo general han sido de tipo legal, pero siempre conservando las líneas estructurales del sistema penal inquisitivo.

Es hasta la reforma constitucional del 19 de junio de 2008, cuyo proceso de implementación está en curso, que se incorpora por primera ocasión en México un sistema de corte acusatorio. Con este se pretende alcanzar un equilibrio entre las garantías ciudadanas y las capacidades de acción del Ministerio Público y de las policías. Establece rapidez y bajo estándar en requisitos para la orden de aprehensión, formulación de imputación y orden de cateo; procedimientos abreviados y mecanismos de solución de controversias en el procedimiento penal acusatorio. Además, instaure reglas para lograr un sistema policial eficaz que elimine la impunidad, la corrupción, la discrecionalidad y los abusos de las policías en nuestro país.

La Constitución, recientemente reformada, establece la oportunidad de tener un nuevo sistema policial transparente, eficaz y

profesional, que incorpore los controles ciudadanos. Es importante que el modelo policial en la investigación del delito obligue a todos los policías a sustentar sus argumentos y evidencias de forma oral, pública, y en una forma científica, entendible y transparente ante los ojos ciudadanos. Asimismo, que esté dirigido particularmente a las actividades sustantivas de la investigación penal en las instituciones policiales con el propósito de delinear una estrategia de medición de la eficacia en los resultados de cada integrante de la policía de investigaciones contra la criminalidad.

Las anteriores son únicamente algunas de las notas distintivas del sistema acusatorio a diferencia de la ausencia de estas en la función policial propia del sistema de corte inquisitivo. Por esta razón, no comulgamos con el comentario del investigador Daniel Márquez, cuando menciona en su obra que abordará en una primera aproximación “la aparente diferencia entre el sistema inquisitivo y el sistema acusatorio”.<sup>6</sup> Opinamos que las diferencias son sustanciales y que los yerros en los procesos de preparación e implementación ocasionan una distorsión de ambos modelos. Consecuentemente, si no se implementa debidamente el modelo acusatorio, el problema de fondo, es decir, de los controles ciudadanos del actuar de las autoridades, será que siempre habrá un espacio oscuro donde se facilite la corrupción y colusión de autoridades con los grandes delincuentes, y como resultado la impunidad que tanto nos afecta.

<sup>6</sup> Márquez Gómez, Daniel y Sánchez Castañeda, Alfredo, *Las falsas divergencias de los sistemas inquisitivo y acusatorio. El idealismo alrededor de los juicios orales en México*, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2012, p. 3.

## CAPÍTULO SEGUNDO

### EL SISTEMA ACUSATORIO Y LA TRANSFORMACIÓN DE LA FUNCIÓN POLICIAL

La observación y análisis de la realidad que viven las instituciones policiales en el país focaliza como prioritario el tema de la investigación criminal en el modelo de justicia penal acusatorio y adversarial que deberá completar su instrumentación en el 2016, gradualmente o en forma simultánea en todo el territorio mexicano de acuerdo con los artículos transitorios de la reforma de junio de 2008. Semejante reto involucra la actividad de los diversos actores del sector público, con la finalidad de establecer una estrategia de organización, administración y de regulación jurídica para el funcionamiento eficaz del Ministerio Público.

Desde la óptica del sistema acusatorio, esta institución se concibe como un organismo autónomo, jerarquizado, que bajo esa denominación dirige y conduce jurídicamente la investigación de los hechos constitutivos de delito, en los que determina mediante elementos de prueba verificables, la participación punible o la inocencia del imputado. En su caso, ejercerá la acción penal pública en la forma prevista por la ley. De igual manera, adoptará medidas para proteger a las víctimas y a los testigos de los efectos coetáneos o posteriores del delito.

Entre sus facultades primordiales, ejerce y sustenta la acción penal pública en la forma prevista por la ley; practica todas las diligencias de investigación y tiene facultades de dirección en la investigación bajo esquemas de coordinación con la policía, la cual adquiere en el modelo acusatorio un rol importante en la etapa de investigación penal, con estricta sujeción al principio de objetividad e imparcialidad. En la atribución que describe el artículo 21

constitucional, son corresponsables de la investigación criminal, en un esquema de cooperación mutua; por lo tanto, en las acciones y diligencias necesarias que deben realizar para cumplir los fines del proceso penal acusatorio, previstos en la nueva generación de códigos procesales.

En la estructura del nuevo procedimiento penal acusatorio, la policía, en la fase preliminar de investigación, actúa con mayor intensidad en dos etapas importantes: *a)* en las etapas de investigación desformalizada o formalizada, y *b)* previo a las etapas intermedia y de debate de juicio oral. En cada una, la policía de investigaciones tendrá facultades autónomas o facultades delegadas por el Ministerio Público, dirigidas a realizar acciones trascendentes para el proceso penal acusatorio, como las de prestar auxilio a la víctima, practicar la detención en casos de flagrancia, resguardar, y en su caso, procesar el sitio del suceso, identificar a los testigos, y consignar en actas policiales cada una de las entrevistas con personas que aporten información relacionada con el esclarecimiento de los hechos o dirigida a establecer la identidad de sus autores o partícipes. Asimismo, recibir, en determinadas circunstancias, las denuncias públicas de los ciudadanos, el desarrollo de la investigación penal, en base a protocolos definidos por criterios y estándares internacionales.

Tiene la obligación de informar inmediatamente al Ministerio Público de cualquier denuncia que reciba del control de identidad de los probables imputados, la detención de cualquier persona en delito flagrante o previa orden judicial de detención. Incluye la obligación de llevar un registro relativo a los detenidos, a la entrada y registro en lugares cerrados, el examen de vestimentas o equipajes de detenidos. Además, recibir previa lectura de derechos, la información o los datos que proporcione el imputado, y la elaboración de actas policiales de toda la información, evidencia o cualquier hallazgo relevante en la investigación. Por otra parte, tiene la prohibición expresa de exhibir en medios de comunicación a detenidos o víctimas, salvo excepción que establezca la ley.

Para uno de los principales teóricos inspiradores de esta transformación de la justicia penal en Latinoamérica, el punto crítico de mayor influencia en la instalación de este nuevo modo de accionar el derecho de acceso a la justicia, está ubicado en lo que denomina “el gran tema pendiente: construir los Sistemas de Investigación” y lo describe diciendo:

...si existe un punto todavía muy problemático es el de la actuación del Ministerio Público y su relación con la Policía (la cláusula de dirección funcional no ha demostrado ser muy útil), falta de coordinación entre las Policías y entre ellas y los fiscales, burocratización y desorientación organizacional del Ministerio Público, falta de capacitación, etcétera.

El desafío de mejorar los métodos de investigación tiene mucho trabajo por delante. El autor citado señala el camino que se ha de recorrer para superar este problema crítico, del modo siguiente: “creo que hay que tomar conciencia de algo fundamental: no se puede construir un sistema eficiente de investigación sin una profunda reforma de las Policías de investigaciones y su separación de las Policías de seguridad”.

Continúa expresando,

...creo, firmemente que la creación de Policías de investigación, totalmente separadas de la Policía de seguridad es la solución más idónea para dar un paso más en lograr mecanismos eficientes de investigación, ello con relación a otras dimensiones: 1) la modernización de todas las dimensiones de las políticas de seguridad, y 2) El fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil para luchar contra la impunidad.

En razón de esas propuestas, Binder aconseja la necesidad de que la reforma de la policía de investigación vaya a la par con el fortalecimiento del Ministerio Público para abandonar “la lógica de tramitar” e imponer “la lógica de investigar”, de modo que las viejas prácticas sean desplazadas por las nuevas de manera dominante, para combatir la “tradición inquisitorial”, su

capital cultural y sus hábitos, en un proceso de construcción de la nueva cultura acusatoria. En la policía mexicana estas ideas exigen perseverar en la voluntad del cambio, en el aprendizaje de las nuevas instituciones y sus mecanismos de operación, acompañadas de una auditoría y monitoreo preciso, sostenido con indicadores de desempeño y de resultados, pues son imprescindibles para construir el liderazgo del cambio y así no estar siempre volviendo a empezar.

Discutiendo el concepto mismo de policía, en el modelo acusatorio el debate se enfoca en la necesidad de dar vida a una policía de investigación criminal que pueda participar más plenamente en el desarrollo de la investigación de los delitos, en forma completamente autónoma en colaboración al Ministerio Público, y en una función complementaria totalmente separada de las pertenecientes a las “policías de seguridad”, tomando en consideración la diferencia de las prácticas propias que esas funciones exigen desarrollar; la pertenencia a poderes diferentes del Estado y finalidades institucionales distintas, aunque vinculadas a la realización del elemento clave de la noción misma del Estado de derecho.

Tradicionalmente, la policía en nuestro país se asume a sí misma como instrumento del Estado en la lucha contra la delincuencia y adquiere una forma orgánica jerarquizada y disciplinada; la mayor parte de las veces, incluso es militarizada, y sus acciones de esta clase de disciplina provocan un ambiente hostil en la población. Desarrolla sus especialidades de acuerdo con el surgimiento de una diversidad de conflictos que se le encarga resolver, manteniendo en general la concentración del poder de policía en una misma y única institución, salvo los que establecieron regímenes federales de gobierno, o la excepción chilena desde 1932.

Esta multiplicidad de funciones en la cultura de la policía tradicional se acentúan por las formas de asumir el principio de legalidad, debido al desarrollo abundante de las reglas institucionales internas, en todas las dimensiones y campos del trabajo policial, con lo que termina alejando al policía de la comprensión del sentido y significado del derecho al que debe dar eficacia,



mediatizado por ese entramado reglamentario, burocratizador de sus variadas labores, que al fin de cuentas hace de los procedimientos policiales una suerte de autojustificación para responder ante su ordenamiento interno, alejado del servicio público que la sociedad espera recibir de ella.

El tema de la investigación criminal a cargo de la policía tradicional, no es más que una de las especialidades que se integran al conjunto de otras, como la vigilancia y patrullaje, el control de la circulación de los vehículos y de las conductas ciudadanas en espacios públicos, o las propias a garantizar el orden público en las manifestaciones masivas, o restablecerlo ante los desórdenes, motines o explosiones de conflictos sociales. En México, la policía de investigaciones que se encuentra inserta en la estructura y funcionamiento del Ministerio Público Federal y en la procuradurías estatales, desarrolla diversas actividades, y en su función natural, que es la investigación de los delitos, reduce su labor a cumplir órdenes de los funcionarios de estas instancias, cuya facultad constitucional es el monopolio de la acción penal.

La dispersión de la función dio origen a omisiones graves de alejamiento de la policía a las tareas de investigación criminal que le son propias. Lo que realizan los miembros de la policía son algunos actos, en los que funcionarios del Ministerio Público los hacen “participar”. Llámese la práctica de alguna diligencia que una vez ejecutada, produce el deshacimiento con el caso investigado del policía que la practicó. De esta manera, no hay seguimiento a la investigación y se elimina la posibilidad de la rendición de cuentas en relación con los resultados del caso.

En estas condiciones, la policía asume un papel exclusivamente instrumental, que está al servicio de un procedimiento enteramente definido en las normas administrativas; su intervención adquiere siempre el carácter de ejercicio de la fuerza pública al servicio del poder estatal, en franco deterioro de su función principal.

Con el modelo policial inserto en el sistema inquisitivo, la participación de la víctima o del procesado es prácticamente nula, y por supuesto, la comunidad es un mero espectador del enfren-

tamiento entre el supuesto autor del delito y el Estado en un terreno secreto y oscuro, que solo se conoce por filtraciones; de modo que el interés social se satisface con el “proceso periodístico”, que se encarga de establecer ante la opinión pública los hechos, juzgar paralelamente a los supuestos culpables y emitir una sentencia social que normalmente adquiere más eficacia que la producida por el juez penal.

Remontar estas ideas anquilosadas que inciden un modelo de policía igualmente colapsado, surge del desafío pendiente de la consolidación de una policía de investigaciones profesional e independiente, con autonomía técnica en sus funciones. El consenso social y político sigue focalizado en mantener la investigación criminal en manos de policías tradicionales —investigativas y de seguridad pública—, dominadas por su carácter y naturaleza de policías administrativas o de seguridad, que son la fuerza pública del Poder Ejecutivo. Esto mantiene limitada la expresión y desarrollo del potencial de investigación criminal de la policía porque somete su dirección y lógica operativa a las decisiones de ese poder del Estado, lo que representa limitaciones al desarrollo de una verdadera policía de investigación penal.

Su separación de las tareas de seguridad pública comprende una de las alternativas clave para hacer en México una reconversión de la función policial que elimine la improvisación y convierta en una estructura orgánica profesional a la policía de investigaciones. De esta manera, junto al Ministerio Público podrán rendir cuentas a los ciudadanos en el esclarecimiento de los miles de delitos, que hasta la fecha se mantienen en el oscuro sendero de la impunidad. El desafío consiste en encontrar la fórmula para que la labor de la policía de investigación se constituya en garante de la independencia en la realización de investigaciones criminales eficaces, que fortalezcan los mecanismos administrativos de acceso a la justicia de todos los sujetos intervinientes.

La mera diferenciación funcional de la policía de investigación en relación con la policía de seguridad no es suficiente si ella no se expresa en su configuración orgánica, en su perfil de gestión

y modalidades de sus unidades, definidos desde las exigencias propias a los fenómenos sociales a investigar la ley de la policía federal que mezcla indebidamente esa dualidad de funciones.

Una policía de investigaciones obliga a la formación de unidades y al desarrollo de lógicas de trabajo distintas, con el insumo de formas de acumulación de capital e instrumentos de producción investigativa diferentes. Así por ejemplo, en la investigación de delitos menores, que comprenden la inmensa mayoría de las demandas, la clave de la investigación se encuentra en la construcción de redes de información con la población mexicana a la que sirve y la elaboración permanente de bases de datos para su análisis, cuyo resultado permite la elaboración de programas de prevención delictiva.

En otro orden de ideas, en los delitos mayores y de connotación resultan eficaces y determinantes la especialidad criminalística y criminológica, así como el apoyo de peritajes. En cambio, en el nivel de las diversas manifestaciones del crimen organizado, la construcción del caso se hace desde una observación del funcionamiento de estas empresas, mediante el seguimiento de hipótesis especializadas, con el concurso de grupos profesionales interdisciplinarios, una inteligencia policial muy desarrollada y una red de contactos interpoliciales de alta calidad.

Desde esta visión, se comprende mejor el por qué Binder considera como limitada la visión que reduce la dependencia funcional de la policía de investigación respecto al Ministerio Público; justamente para responder adecuadamente a esta relación resulta esencial que la policía construya y desarrolle un conjunto de múltiples interacciones sociales y con base en estas pueda elaborar sus planes de trabajo en los que se contribuya al desarrollo de la paz jurídica por la eficacia del control social penal.

Un segundo elemento de una policía de investigación consiste en la concentración de su actividad exclusivamente a las tareas propias a este nuevo modo de producción de la justicia penal, ya sea llevando a cabo las facultades autónomas o delegadas por el Ministerio Público. En este escenario, los miembros de la policía

de investigación no pueden ser requeridos para realizar otras misiones genéricas, sino abocarse a trabajar en el esclarecimiento de casos penales. Incluso es recomendable garantizar la permanencia e inamovilidad de sus miembros, que impida apartar de una concreta investigación a los que la hubieran iniciado hasta la finalización de la misma.

El tercer elemento radica en el desarrollo permanente de la formación especializada del policía, tanto como institución, como a sus integrantes; de manera que el saber de los investigadores profesionales esté en permanente crecimiento, con un dominio cada vez más avanzado de las ciencias criminológicas y criminalísticas, sus capacidades de análisis criminal y la evolución jurídica que regula su trabajo.

Esta dimensión es uno de los principales desafíos. En cuanto a la forma de incluir a la policía de investigaciones en el nuevo modelo de enjuiciamiento, puesto que si bien podrían desarrollarse consensos respecto a los otros actores (jueces, Ministerio Público y Defensa Penal Pública), no se ha desarrollado el debate respecto a qué policía se hace necesaria y cuál sería su espacio de intervención en el procedimiento oral y acusatorio. Los especialistas están de acuerdo en que se requiere de una profunda modificación de la estructura policial, dotándola de un perfil especializado y una autonomía profesional, específica, que hagan posible una asociación real con el Ministerio Público para la investigación en una comunicación en tiempo real, con claros vínculos hacia la población para alimentar la investigación con su aporte.

En el marco de estos desafíos planteados hacia los miembros del Ministerio Público Federal o estatal y los de las instituciones policiales, destaca uno de los principales hitos de los próximos años: instrumentar los sistemas de organización y administración bajo el concepto de buen gobierno, transparencia y rendición de cuentas. Serán las dos grandes modernizaciones en la historia de la policía y de la procuración de la justicia mexicana que incluye la construcción de una policía técnica y su tránsito obligado hacia una policía científica.

Un enfoque de esta magnitud en la policía mexicana, constituye la base ideal que lleve a los gobiernos a la implementación de políticas públicas, dirigidas a la renovación de la estructura de la policía de investigación, que aspira a trabajar con nuevas técnicas y métodos en la investigación penal. La futura visión de la actividad policial en el marco del sistema penal acusatorio plantea exigencias de modernidad, rapidez, transparencia e irrestricto respeto a los derechos humanos.

Las citadas exigencias básicas requieren no solo de nuevos sistemas de organización y administración, sino que resulta indispensable que los integrantes de las agencias federal y estatal de investigaciones (policías federales y estatales) como instituciones, tengan una visión y una misión que cumplir en beneficio de la comunidad. Además que esa visión y la misión aparezcan ahora respaldadas por una línea estructural de normas éticas derivadas del principio de legalidad. Esta forma de concebir la futura policía de investigaciones en México plantea la indeclinable tarea de adoptar un Código de Ética que sea aplicado y administrado por un observatorio ciudadano y una comisión de evaluación policial.

## I. LA CORRESPONSABILIDAD DE LA POLICÍA EN LA INVESTIGACIÓN DEL DELITO

Las distintas instituciones policiales en la Federación y en las entidades federativas tienen una misión importante derivada del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Están obligadas a realizar actividad investigativa en la comisión de cualquier delito en corresponsabilidad con el Ministerio Público. Los códigos procesales deben establecer con esta perspectiva las atribuciones que tiene la policía en la investigación del delito o de hechos presuntamente delictuosos. Se requiere que los miembros de las distintas instituciones policiales desempeñen sus funciones investigativas con esmero, eficiencia y honestidad.

En cumplimiento a la citada disposición constitucional, la policía de investigación en esta corresponsabilidad, tendrá que adaptarse a la conducción jurídica del Ministerio Público en la investigación de los delitos. Las instituciones policiales y los denominados cuerpos de seguridad pública darán aviso inmediato a esta autoridad, que tiene el monopolio de la acción penal, del conocimiento que tengan sobre la comisión de un delito con independencia de que inicie las primeras actividades de la investigación criminal, con el objeto de coadyuvar en el esclarecimiento de los hechos, la detención del probable imputado y el debido proceso legal al que será sometido.

Frente a esta realidad del modelo acusatorio, en el marco de la reforma constitucional del 2008, todos los policías del país están obligados a cumplir siempre, dentro de los límites legales, con las directrices que establezca la institución del Ministerio Público en la investigación criminal. En toda actuación serán respetadas, siempre que no sean un obstáculo que impida el curso de la investigación. Las disposiciones secundarias de regulación de la actividad del Ministerio Público bajo ningún concepto podrán alterar la facultad de corresponsabilidad en la investigación asignada a la policía por la Constitución federal. Igualmente, los policías acatarán las instrucciones legales que les dirijan los jueces, sin perjuicio de la autoridad administrativa a la que estén sometidos.

Por otra parte, la dirección del más alto nivel en la administración y mando de la policía de investigaciones, no podrá revocar, alterar o retardar una orden emitida por los agentes del Ministerio Público o por los jueces cuando se trate de la investigación de un delito, o bien, de hechos presuntamente delictivos que están obligados a esclarecer en corresponsabilidad. En el nuevo sistema penal acusatorio, a partir del 19 de junio de 2008, la policía debiera cumplir una importante función en el ámbito de la investigación penal; esto en razón de que las expectativas del cambio se dirigen a las actividades de investigación con un perfil técnico, científico y eficiente. Una de sus funciones es la atención especializada y la protección que debe brindar a las víctimas y

testigos del suceso criminal, a quienes enterará de sus derechos y proveerá mecanismos de salvaguarda a estos, conforme lo indiquen las normas jurídicas procesales y reglamentarias que se construyan para la operatividad del sistema policial en el contexto del modelo acusatorio.

Con el objetivo de cumplir cabalmente su misión, las acciones de la policía de investigación también deben ajustarse a los principios de legalidad, eficiencia, honradez y espíritu de servicio consignados en el artículo 21, párrafo noveno constitucional, los cuales tendrán que materializarse a través de un eficiente sistema de organización y administración policial, que permita supervisar la actualización de cada uno de los policías en las actividades cotidianas de cada policía.

En contraste con el nuevo sistema, en el orden federal sigue vigente junto al sistema penal de corte inquisitivo el empirismo de las policías. Este fenómeno aún sin resolver en México, genera impunidad y violación a los derechos humanos. Los casos emblemáticos se caracterizan por la utilización de la tortura, la siembra de “evidencia” y los denominados “chivos expiatorios”. Evitar estas violaciones a los derechos humanos implica la profesionalización urgente de las policías y su adecuación estratégica al procedimiento penal acusatorio. Una de las más urgentes y necesarias modificaciones en la profesionalización depende de la incursión de los policías en especialidades como la criminalística.

Cobra importancia que las instituciones policiales en el país dedicadas a la investigación del delito —policías ministeriales o investigadoras— en su actividad diaria, superen los rezagos sustantivos y funcionales, se dirijan con metodologías sustentables hacia el periodo científico de nuestros días. Su eficacia radicará en terminar con la equivocación y el empirismo de la investigación policiaca, que en México lamentablemente son las principales herramientas de trabajo, y que las sustituyan por la criminalística como ciencia aplicada al procedimiento penal acusatorio, pues constituye la metodología más segura y confiable, dado que la modernidad de su tecnología y la eficacia de su métodos son más

útiles en el esclarecimiento de casos, debido a que pueden medirse sus resultados y el grado de satisfacción de los ciudadanos.

Hay que recordar que en la historia criminal, los juicios de mayor importancia en el mundo se han resuelto empleando la criminalística, en razón de que sus métodos y técnicas suministran material probatorio significativo que contiene información de calidad a los policías, agentes del Ministerio Público, defensores, jueces y magistrados. Por esa razón, una de las metas para la institución debería ser proporcionar a sus miembros las capacitaciones relacionadas con esos conocimientos aplicados en el contexto del procedimiento penal acusatorio. Su aplicación efectiva conducirá a disminuir considerablemente la impunidad con investigaciones ciertas y altamente confiables.

## II. LAS FACULTADES DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIONES CONSIGNADAS EN LA LEGISLACIÓN SECUNDARIA QUE INCORPORA EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO

Aunque a la policía mexicana a partir de 2008 le corresponde realizar importantes funciones en su calidad de corresponsabilidad con el Ministerio Público en la función de investigación del delito, lo cierto es que los códigos procesales —incluyendo el federal—, en su mayoría, no han adoptado e incorporado el sistema penal acusatorio con predominio de la oralidad para regular la actividad investigativa de la policía. Por primera ocasión en México, la policía tendrá la responsabilidad directa de llevar a cabo una investigación penal bajo la conducción (jurídica) del Ministerio Público, de ahí que los códigos procesales en este aspecto están obligados a delimitar las facultades de la institución policial, regulando ampliamente cuáles serán sus facultades autónomas y precisar en qué momento y en cuáles actos procesales tendrá facultades delegadas. En cumplimiento a ciertos lineamientos de la reforma constitucional de 2008, se han descrito en los códigos procesales algunas facultades genéricas que debe realizar la policía en el contexto de una investigación penal.



Los cambios sustanciales que tienen inmersas facultades delegadas y autónomas se pueden comprender en las siguientes actividades procesales:

1. Recibir noticia de los hechos presuntamente constitutivos de un delito, buscar y recopilar toda clase de información o evidencia sobre los mismos. De los resultados que obtenga en cada caso específico, la policía de investigaciones está obligada a informar de inmediato al Ministerio Público, en forma particular cuando se tenga un caso de delito flagrante. En cambio, cuando no exista esta figura podrá informar los resultados con toda oportunidad, a efecto de que la evidencia obtenida se incorpore a la carpeta de investigación y se ejercite la acción penal, en virtud a la existencia de elementos probatorios que acreditan los elementos del tipo penal del delito de que se trate y la probable intervención del imputado en su comisión.
2. Confirmar la información que reciba cuando esta provenga de una fuente no identificada y que esté relacionada con su función investigativa en torno a un delito o hechos presuntamente delictivos. En este caso, tiene capital importancia el desarrollo de un registro único sobre los hechos investigados y la verificación que se llevó a cabo respecto a estos. Los registros policiales con esta clase de información deben contenerse en un sistema integral de informática, que permita en cualquier momento hacer uso de esa información, realizar asociaciones con otros hechos pasados, presentes o futuros, que sean o fuesen probablemente constitutivos de delito. Esta obligación individual para cada policía de investigación, es con la finalidad de que asuma la responsabilidad de la labor que llevó a cabo. En el registro policial se deberá asentar el día y la hora en que el policía realice la actuación, además los datos del informante, y la forma o medio que sirvió de base para verificarla, y en su caso, el valor que se otorga a la información recibida.

3. Prestar el auxilio que requieren las víctimas u ofendidos o testigos del delito, e implementar todos los mecanismos adecuados para su debida protección, haciendo énfasis en aquellos asuntos que impliquen alto riesgo para las víctimas o un estado de vulnerabilidad que provoque el daño de otros bienes jurídicos. La policía de investigación está obligada en estos supuestos a describir la información en protocolos especiales y acatar las directrices de los tratados internacionales sobre derechos humanos, donde se reconocen derechos fundamentales a este tipo de víctimas. Sería ideal que la policía tuviera a su cargo unidades especializadas en atención a víctimas, que proporcionen atención y protección urgente, debido a que el primer contacto de la víctima, después de cometido el delito, lo tiene con la policía. El buen servicio de esta institución y el trato digno que les proporcione dará como resultado que la confianza ciudadana se recobre.
4. Cuidar que los rastros e instrumentos del delito sean conservados. La única forma de mantener la evidencia dejada por los protagonistas en la comisión de un delito o hecho presuntamente delictivo, sin duda alguna, se lleva a cabo a través de la preservación de la escena del crimen, que a nuestro juicio le corresponde a la policía en colaboración con peritos y científicos forenses.
5. Entrevistar a los testigos presumiblemente útiles para aproximarse a la verdad de lo ocurrido en los hechos investigados. Las entrevistas a la víctima o testigos podrán desarrollarse bajo las estrictas técnicas de la entrevista e interrogatorio. En el sistema acusatorio la policía deberá tener la capacitación y el entrenamiento suficiente para conducir un interrogatorio que permita obtener información de calidad sobre el delito o en relación a la identidad del probable imputado, la forma de comisión del delito y otras circunstancias en la preparación y consumación de los hechos. La legislación secundaria debe obligar a la creación y utilización de herramientas de trabajo, que otorguen seguridad a la preser-

vacación de la información, además de la responsabilidad del policía en su preservación y en la rendición de cuentas que está obligado a prestar a los superiores cuando haya concluido las tareas investigativas, aportando los elementos de prueba al agente del Ministerio Público. Estos instrumentos de trabajo son las denominadas actas policiales en las que se registra, además de la información, la actividad diaria de un policía.

6. Practicar las diligencias orientadas a la individualización física de los autores y partícipes del hecho. Este tipo de actividades suelen llevarse a cabo mediante el uso de diversos sistemas de información que fueron creados e instalados en la institución policial, como el denominado “Plataforma México” del Sistema Nacional de Seguridad Pública y otros sistemas estatales que contienen millones de datos sobre las personas, como actas del registro civil: acta de nacimiento, de matrimonio, adopción, etcétera; los registros relacionados con el patrimonio de las personas que documentan los datos de los propietarios de inmuebles y vehículos; los registros de distintos actos para ejercitar nuestros derechos como el de la libertad de movimiento en vehículos, en el cual el Estado proporciona una licencia; los registros de migración, de credenciales de elector, entre otros.
7. Recabar los datos que sirvan para la identificación del imputado. Estos generalmente suelen obtenerse de la información que aportan las víctimas o los testigos de un delito. A partir de estos elementos se acude a determinados sistemas de información institucionales en los que existen registros de personas, se hace uso de la ciencia forense y las disciplinas auxiliares, como la antropología y genética forense, el retrato hablado, etcétera. Todos los sistemas de identificación con los que cuente el instituto policial pueden emplearse por la policía de investigaciones para individualizar correctamente al probable autor o partícipe del delito. Por otro lado, los sistemas de identificación más confiables deben emplearse

como forma de confirmación de alguna evidencia biológica o cualquier documento.

8. Reunir toda la información que tenga carácter vigente y que pueda ser útil al agente del Ministerio Público para llevar a cabo detenciones en los casos que autoriza la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En estos casos, agentes de la policía realizarán inspecciones personales sobre el detenido y asegurarán los objetos que tenga en su poder, documentando la naturaleza y características en el registro de cadena de custodia. En la parte administrativa, para la conservación, guarda y custodia, levantará un inventario, que será firmado por el policía y el detenido. Estos bienes son puestos a disposición del agente del Ministerio Público y colocados en la sala de evidencias.

Los agentes policiacos no realizarán, de propia autoridad, manipulación alguna ni practicarán peritajes sobre esos objetos o instrumentos del delito. Excepto en el supuesto de que se localicen evidencias físicas o biológicas asociadas a la víctima o al lugar de los hechos, en cuyo caso, con la respectiva cadena de custodia, deberá ingresarlas a la sección que corresponda del laboratorio de criminalística, solicitando el informe pericial que requieran para obtener información adicional relacionada con esas evidencias.

Cuando para el cumplimiento de todas estas facultades de investigación se requiera de una orden judicial, la policía informará al Ministerio Público para que este la solicite, aportando los elementos de prueba indispensables para su expedición por parte del juez.

### III. FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA EN GENERAL

La reforma constitucional vigente desde el 19 de junio de 2008 introduce una modificación sustancial a la función de seguridad

pública. En el artículo 21, párrafo noveno, una ampliación distorsionada conceptualmente del término seguridad pública, introduce la corresponsabilidad a las instituciones encargadas a nivel federal y estatal competentes para la investigación y persecución de los delitos y a las autoridades municipales que tienen a su cargo una parte importante de la seguridad pública en su respectiva circunscripción territorial. Lo importante de la reforma es la conservación de los principios que rigen a las instituciones de seguridad pública, y las reglas nuevas bajo las cuales el Ministerio Público y la policía se coordinan para cumplir los objetivos de la seguridad pública. Ninguna duda cabe que la intervención del Ministerio Público en este punto está enfocada a reforzar esquemas de coordinación con las policías, no solo en el ámbito de la seguridad, sino también y principalmente en la investigación de los delitos. En esto radica la importancia de que dicha institución, como órgano de investigación y acusación de los delitos, intervenga en los asuntos de seguridad pública.

Otra cuestión se focaliza en la integración de un Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el que se pueden realizar las aportaciones que fortalezcan la función de procurar justicia, debido a que el Ministerio Público participa en el sistema citado para lograr el desarrollo de las siguientes bases mínimas: *a)* la regulación de los criterios de evaluación a todos los miembros de las instituciones de seguridad pública; *b)* establecer las bases de datos criminalísticas y de personal para las instituciones de seguridad pública; *c)* intervenir en la formulación de políticas públicas para prevenir la comisión de delitos; *d)* determinar la participación de la comunidad que coadyuvará en la evaluación sobre las políticas de prevención del delito y de las instituciones de seguridad pública; *e)* un criterio de obligatoriedad constitucional que evita que los fondos federales para la seguridad pública solo serán utilizados para este rubro.

En lo concerniente a la intervención de los integrantes de los cuerpos de seguridad pública en la función de investigación de los delitos, con la intención de que la reforma tenga eficacia prác-

tica, resulta indispensable para la operatividad de estas instituciones policiales en la indagación de los hechos delictivos, que se describan en la legislación secundaria las facultades y obligaciones que habrán de llevar a cabo en el contexto del procedimiento oral-acusatorio. Asimismo, necesitan de una capacitación especializada para la elaboración de protocolos y actas policiales, así como para la aplicación de métodos o técnicas criminalísticas que lleven a una sistematización ordenada de la información y su entrega oportuna al Ministerio Público. De este modo, si tienen la corresponsabilidad de la investigación, al igual que la policía de investigaciones, será importante establecer además reglas procesales que conecten su adecuada intervención a la función de investigación del delito, como las siguientes:

- a) Recabarán la información necesaria de los hechos delictivos de que tengan noticia, dando inmediato aviso al Ministerio Público.
- b) Impedirán que los hechos se lleven a consecuencias ulteriores.
- c) Realizarán detenciones en flagrancia a quien realice un hecho que pueda constituir un delito.
- d) Identificarán y aprehenderán por mandamiento judicial o ministerial a los imputados.
- e) En caso de violencia familiar y delitos contra la libertad y seguridad sexuales, aplicarán protocolos especializados para el adecuado resguardo de los derechos de las víctimas.

A nivel federal, cuando los cuerpos de seguridad pública distintos a la policía ministerial sean los primeros en conocer de un hecho delictuoso, podrán ejercer las facultades previstas en la Ley de la Policía Federal que son compatibles, en lo general, con el procedimiento penal acusatorio. En efecto, el artículo 1o. establece: “La presente Ley es reglamentaria del artículo 21 constitucional, en materia federal en lo relativo a la organización y funcionamiento de la Policía Federal, en el ámbito de compe-

tencia que establece esta Ley y las disposiciones aplicables. Es de orden público y de aplicación en todo el territorio nacional”.<sup>7</sup> La Policía Federal, como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Seguridad Pública, tiene los siguientes objetivos:

I. Salvaguardar la vida, la integridad, la seguridad y los derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos;

II. Aplicar y operar la política de seguridad pública en materia de prevención y combate de delitos;

III. Prevenir la comisión de los delitos, e

IV. Investigar la comisión de delitos bajo la conducción y mando del Ministerio Público de la Federación, en términos de las disposiciones aplicables.

Aplicando los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y el respeto a las garantías individuales y a los derechos humanos, conforme lo establece el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el ejercicio de las funciones y acciones que en materia de prevención y combate de los delitos le competen a la Policía Federal, bajo las atribuciones previstas en el artículo 8 y que en lo general son compatibles con el nuevo sistema penal acusatorio y adversarial:

I. Prevenir la comisión de delitos y las faltas administrativas que determinen las leyes federales;

IV. Realizar investigación para la prevención de los delitos;

VI. Recabar información en lugares públicos, para evitar el fenómeno delictivo, mediante la utilización de medios e instrumentos y cualquier herramienta que resulten necesarias para la generación de inteligencia preventiva. En el ejercicio de esta atribución se deberá respetar el derecho a la vida privada de los ciudadanos. Los datos obtenidos con afectación a la vida privada carecen de todo valor probatorio;

VII. Llevar a cabo operaciones encubiertas y de usuarios simulados para la prevención de delitos.

<sup>7</sup> Ley de la Policía Federal, *Diario Oficial de la Federación*, 1o. de junio de 2009.

VIII. Realizar análisis técnico táctico o estratégico de la información obtenida para la generación de inteligencia;

IX. Realizar bajo la conducción y mando del Ministerio Público las investigaciones de los delitos cometidos, así como las actuaciones que le instruya éste o la autoridad jurisdiccional conforme a las normas aplicables;

X. Informar a la persona al momento de su detención sobre los derechos que en su favor establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

XI. Poner a disposición sin demora de las autoridades competentes, a personas y bienes en los casos en que por motivo de sus funciones practique alguna detención o lleve a cabo algún aseguramiento de bienes, observando en todo momento el cumplimiento de los plazos constitucionales y legales establecidos;

XII. Verificar la información que reciba sobre hechos que puedan ser constitutivos de delito para, en su caso, remitirla al Ministerio Público;

XIII. Recibir las denuncias sobre hechos que puedan ser constitutivos de delitos, en términos de lo dispuesto por el artículo 3o. del Código Federal de Procedimientos Penales

XIV. Participar en la investigación ministerial, en la detención de personas y en el aseguramiento de bienes que el Ministerio Público considere se encuentren relacionados con los hechos delictivos, así como practicar las diligencias necesarias que permitan el esclarecimiento de los delitos y la identidad de los probables responsables, en cumplimiento de los mandatos del Ministerio Público;

XV. Efectuar las detenciones conforme lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Código Federal de Procedimientos Penales;

XVI. Inscribir de inmediato la detención que realice en el Registro Administrativo de Detenciones del Centro Nacional de Información, así como remitir sin demora y por cualquier medio la información al Ministerio Público;

XVII. Preservar el lugar de los hechos y la integridad de los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como los instrumentos, objetos o productos del delito, dando aviso de inmediato al Ministerio Público. Las unidades facultadas para el procesamiento



del lugar de los hechos, deberán fijar, señalar, levantar, embalar y entregar la evidencia física al Ministerio Público, conforme al procedimiento previamente establecido por éste y en términos de las disposiciones aplicables;

XVIII. Solicitar al Ministerio Público que requiera a las autoridades competentes, informes y documentos para fines de la investigación;

XIX. Garantizar que se asiente constancia de cada una de sus actuaciones, así como llevar un control y seguimiento de estas. Durante el curso de la investigación ministerial deberán elaborar informes sobre el desarrollo de la misma, y rendirlos al Ministerio Público, sin perjuicio de los informes que éste le requiera;

XX. Emitir los informes, partes policiales y demás documentos que se generen, con los requisitos de fondo y forma que establezcan las disposiciones aplicables, para tal efecto se podrán apoyar en los conocimientos que resulten necesarios;

XXI. Proporcionar atención a víctimas, ofendidos o testigos del delito; para tal efecto deberá:

a) Prestar protección y auxilio inmediato, de conformidad con las disposiciones legales aplicables;

b) Garantizar que reciban atención médica y psicológica cuando sea necesaria;

c) Adoptar las medidas que se consideren necesarias tendentes a evitar que se ponga en peligro su integridad física y psicológica, en el ámbito de su competencia;

d) Preservar los indicios y elementos de prueba que la víctima y ofendido aporten en el momento de la intervención policial y remitirlos sin demora al Ministerio Público encargado del asunto para que éste acuerde lo conducente, y

e) Asegurar que puedan llevar a cabo la identificación del imputado sin riesgo para ellos.

XXII. Dar cumplimiento a las órdenes de aprehensión y demás mandatos ministeriales y jurisdiccionales de que tenga conocimiento con motivo de sus funciones;

XXIII. Entrevistar a las personas que pudieran aportar algún dato o elemento para la investigación en caso de flagrancia o por mandato del Ministerio Público, en términos de las disposiciones

aplicables. De las entrevistas que se practiquen se dejará constancia y se utilizarán meramente como un registro de la investigación, que para tener valor probatorio, deberán ser ratificadas ante la autoridad ministerial o judicial que corresponda;

XXIV. Reunir la información que pueda ser útil al Ministerio Público que conozca del asunto, para acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del imputado, conforme a las instrucciones de aquel;

XXV. Incorporar a las bases de datos criminalísticas y de personal de la Secretaría y del Sistema Nacional de Información de Seguridad Pública, la información que pueda ser útil en la investigación de los delitos y utilizar su contenido para el desempeño de sus atribuciones, sin afectar el derecho de las personas sobre sus datos personales;

XXVIII. Solicitar por escrito, previa autorización del juez de control en los términos del artículo 16 constitucional, a los concesionarios, permisionarios, operadoras telefónicas y todas aquellas comercializadoras de servicios en materia de telecomunicaciones, de sistemas de comunicación vía satélite, la información con que cuenten, así como georreferenciación de los equipos de comunicación móvil en tiempo real, para el cumplimiento de sus fines de prevención de los delitos. La autoridad judicial competente, deberá acordar la solicitud en un plazo no mayor de doce horas a partir de su presentación;

XXIX. Solicitar por escrito ante el juez de control, en términos del capítulo XI de la presente Ley, la autorización para la intervención de comunicaciones privadas para la investigación de los delitos. La autoridad judicial competente deberá acordar la solicitud en un plazo no mayor de doce horas a partir de su presentación.

Excepto algunas de las facultades que competen directamente a la actual policía de investigaciones —que está bajo la estructura orgánica del Ministerio Público Federal—, en lo general, el resto de las atribuciones descritas en el artículo 8o. de la Ley de la Policía Federal contienen ya elementos técnicos relacionados con el modelo acusatorio.

Con especial cuidado debe atenderse la atribución descrita en la fracción XXIII, que se refiere a la entrevista policial de personas, en las que se contempla la posibilidad de que sea ratificada ante el Ministerio Público o juez para que tenga eficacia probatoria; esta circunstancia resulta totalmente contraria a los principios del modelo acusatorio, en virtud de que en él ningún medio de probar, aunque sea ratificado ante otras autoridades durante la investigación preliminar o la formalizada, incluso la etapa intermedia, tendrá valor. A diferencia de los juicios de corte inquisitivo, en el juicio oral tendrán valor solo aquellos juicios que sirvan para desvirtuar el principio de inocencia y que sean desahogados en el acto del juicio. Esto significa que la citada normatividad mezcla reglas propias del sistema penal tradicional, caracterizado por el exceso de formalidades y ritualismos. Lo que de cierta forma resulta explicable en atención a que el sistema penal federal aún no ha dado cumplimiento a la reforma constitucional del 19 de junio de 2008, incorporando el sistema penal acusatorio a través de un código procesal moderno y sus leyes secundarias que lo fortalezcan.

Algunas de las prohibiciones para los miembros de la institución policial, sea policía de investigaciones o policía de seguridad pública, en el modelo acusatorio debe abarcar el hecho de no informar a los medios de comunicación social ni a persona alguna la identidad de detenidos, imputados, víctimas u ofendidos, testigos, ni de otras personas que se encontraren o pudieren resultar vinculadas a la investigación de un hecho punible. Asimismo, guardar la reserva de la identidad en protección de sus derechos y de la función investigadora.

Por su parte, los integrantes de las policías de seguridad pública respetarán en su actividad de colaboración investigativa, la formalidad que marquen los códigos procesales de corte acusatorio; subordinarán “funcionalmente” sus actos a las instrucciones que emita el Ministerio Público, en relación con la investigación de los delitos; sin perjuicio de que ejerzan las facultades autónomas que adquieren en la corresponsabilidad investigativa de los delitos conforme las faculta el artículo 21 constitucional, re-

copilen y procesen toda información relevante que conduzca al esclarecimiento de los hechos.

En tales condiciones, la corresponsabilidad en la investigación de los delitos que contempla el precepto constitucional citado, a través de una reingeniería de las instituciones policiales, pretende alcanzar objetivos estratégicos tendentes a cubrir las expectativas ciudadanas. En el movimiento de reforma procesal mexicano, que incluye la función policial, destaca la idea de conseguir que los servicios de policía sean accesible para atender y resolver las denuncias de todas las personas; que los policías sean eficientes y rápidos en resolver las cuestiones diarias del delito flagrante que enfrentan; que sus actividades puedan medirse en términos de eficacia y economía, y por lo tanto proyecten eficacia en el control del crimen, bajo la premisa de respeto a las garantías penales y que repriman a quienes vulneren derechos. En estas tareas, el funcionamiento de un sistema de gestión de calidad, en el nuevo modelo acusatorio, adquiere relevancia y prioridad, ya que en términos de eficacia permite establecer controles internos y externos de las actividades policiales dirigidas gran parte de ellas a disminuir considerablemente la corrupción y de esta manera contribuye a la legitimación del sistema democrático.

Ahora bien, la transición de un sistema policial a otro es una etapa muy particular dentro del proceso de reforma que pretende instrumentar el modelo acusatorio, que se caracteriza, como sucede en nuestro país, por el enorme debate político y social en el que se insiste en abonarle más a una cultura inquisitiva en demérito de la cultura democrática. En un proceso de implementación de este orden se tiene la todavía deficiente asignación de recursos para la policía, porque se cree que será suficiente con patrullas y armas en la represión criminal, lo que genera escasos o nulos resultados que muestran débil cualquier modelo de justicia. A estas circunstancias debe sumarse la falta de capacitación profesional, que se convierte en un factor negativo por la incomprensión de muchos sobre los mecanismos jurídicos necesarios para crear una cultura de rendición de cuentas en la policía.

Asimismo, se agudizan las dificultades ante la presencia de desequilibrios que modifican las formas de la criminalidad; los delitos que irrumpen desde el 2007, con motivo del enfrentamiento entre grupos delincuenciales del crimen organizado, provocan una percepción ciudadana equivocada del modelo acusatorio, y por tanto sobresatura las cargas de trabajo en las estructuras policiales, que hasta ahora continúan dejando al margen la metodología de las ciencias criminalística y criminológica que permita atender oportuna y eficazmente los casos.

En México, desplazar la cultura inquisitiva para implantar una verdadera cultura democrática significa trazar un objetivo estratégico que conduzca a lograr una de las metas de mayor importancia en los temas de justicia penal y seguridad comunitaria. Entre ellas destaca la que está dirigida a lograr que hagan conciencia tanto los servidores públicos como los ciudadanos del papel central que tiene la policía en una racional y adecuada implementación del sistema penal acusatorio y en el mejoramiento de la percepción ciudadana respecto a las instituciones de justicia.

Estas circunstancias, traducidas en términos de profundización y consolidación de la democracia, ahora ya entendida no como un fenómeno de pura representatividad numérica electoral o como un medio para tener una administración pública eficiente, o como una función de la capacidad de las legislaturas para discutir y elaborar leyes, sino parte de la idea misma de democracia comprendida además, como el papel que en ella desempeñan sus jueces, fiscales y policías. Si los ciudadanos no tienen una confianza real en sus instituciones policiales de procuración y administración de justicia, los procesos de democratización no pueden ser verdaderos procesos de transformación social y política.

Como podremos advertir, estas instituciones, desde el enfoque legislativo, en nuestro país, registran un movimiento innovador de avance en el progreso policial, a partir de la tecnificación y adopción de las ciencias forenses en algunas entidades federativas, cuya aplicación son resultado de la implementación del sistema acusatorio, que requiere para su eficaz operatividad de la

instalación de laboratorios de criminalística y ciencias penales,<sup>8</sup> con adquisición de tecnologías avanzadas en el procesamiento de la evidencia, que lleva indefectiblemente a obtener pruebas técnicas y científicas, cuyo resultado muestra una aproximación confiable y verificable a lo ocurrido en la comisión de un delito, para que los jueces en la audiencia de debate de juicio oral emitan un veredicto en el que se condene o absuelva al acusado.

Las modificaciones en la infraestructura tecnológica fortalecen sin duda las instituciones policiales, y la procuración y administración de justicia. Constituyen el principal instrumento de la modernidad para el combate a la criminalidad que ha cambiado sus formas de operar. La investigación policial de los delitos debe basarse en la criminalística y no en la tradicional manera empírica de indagar un hecho delictivo con enfoque estrictamente policiaco.

<sup>8</sup> En la implementación del sistema acusatorio, el estado de Chihuahua instaló cuatro laboratorios de ciencias forenses (2007-2009) para el procesamiento de la evidencia física y biológica obtenida por la policía de investigaciones. En los cinco años con ocho meses de implementación del sistema acusatorio —2007 a 2012—, una de las mayores aportaciones de las ciencias forenses al proceso penal la proporciona el laboratorio de genética forense.

## CAPÍTULO TERCERO

### PRINCIPIOS PENALES DEL SISTEMA ACUSATORIO Y LA ACTIVIDAD POLICIAL

La propia dinámica del sistema acusatorio y adversarial concentra los actos procesales y limita los plazos o términos para su operación. La estructura del procedimiento penal acusatorio en lo básico cuenta con cuatro periodos: la fase de investigación (preliminar y formalizada ante el juez), la etapa intermedia, el juicio oral propiamente dicho y la etapa de ejecución de las sanciones penales.

Durante las diversas etapas procesales, la policía de investigaciones tendrá que ajustar su función estatal a los principios del modelo, debido a que constituyen imperativos dirigidos a todos los operadores jurídicos que inciden en el funcionamiento adecuado del sistema penal. Además, son premisas conceptuales de orden metodológico finalistas que guían la actuación policial en el respeto a los derechos fundamentales. Generalmente están contemplados en las Constituciones y son desarrollados en las normas secundarias.

Los miembros de las instituciones policiales deben tener claro que cuando se infringe un principio el sistema acusatorio pierde su carácter de tal porque se afecta uno de sus componentes esenciales. Por otro lado, deben comprender que cuando se viola una técnica procesal, semejante transgresión impacta en el principio o principios a los cuales sirve. La oralidad es una técnica procesal que hace funcionales los principios de inmediación y contradicción.

En este sentido, la policía de investigación habrá de internalizar como doctrina objetivizada el esquema de principios que animan y respaldan el sistema penal acusatorio, con la clara idea

de que aunque la legislación procesal admita una serie de actuaciones escritas especialmente en la etapa de investigación, ello no implica la afectación del sistema acusatorio en su esencia. Sin embargo, la vulneración de la inmediación y del contradictorio sí lo distorsiona de un modo relevante. El principio acusatorio del sistema constituye un postulado en el que las funciones fundamentales del proceso penal deben realizarse por órganos diversos, desempeñando cada uno funciones específicas de gran relevancia.

Contextualizar la función policial en el principio acusatorio implica explorar y profundizar en la interpretación teleológica del artículo 21 constitucional, que establece como competencia exclusiva del Ministerio Público y de la policía la investigación de los delitos, la persecución penal y la formulación de la acusación; en consecuencia, además le compete emprender acciones eficientes para proteger a víctimas y testigos que harán una aportación fundamental en el proceso de conocimiento de la verdad real —aproximativa—, con independencia de las facultades del defensor para ejercer los derechos y garantías del imputado, con la finalidad de obtener una investigación y un enjuiciamiento racional y equitativo.

Este proceso de orden teleológico está enclavado en un sistema judicial en el que con la imparcialidad e independencia de sus miembros, a quienes les compete el control jurídico de las actuaciones de la policía de investigación en todas las etapas procesales y del resto de los intervinientes en el proceso penal, tendrán como meta final emitir la decisión jurisdiccional del caso, proporcionando a los sujetos procesales un escenario que asegure la vigencia y el respeto de sus derechos fundamentales.

Durante el estadio procesal de la decisión judicial debe imperar la aplicación objetiva del principio de imparcialidad e independencia de los tribunales de control o los de juicio oral, cuyos miembros deben actuar y decidir con absoluta independencia sin pretender favorecer o perjudicar a las partes. El órgano judicial debe gozar de independencia frente a los demás órganos estata-



les, pero también el juez debe ser independiente en relación con los otros miembros del Poder Judicial. Respecto a la imparcialidad, la ley obliga a los jueces a resolver con objetividad los asuntos sometidos a su conocimiento.

Este principio distintivo de los jueces de control o de juicio oral aparece reflejado en su actuación cuando juzga o procede con rectitud. Un juez imparcial es aquel que no tiene ningún interés en el resultado de un caso penal y que no se ve influenciado por las partes o personas ajenas al caso para favorecer a una en perjuicio de la otra. El juez imparcial también será aquel que toma decisiones sin ningún prejuicio en cuanto al fondo del asunto. La parcialidad de un juez puede reclamarse por los motivos de excusa, que describan los códigos procesales de corte acusatorio.

Cuando la policía de investigaciones lleva a cabo acciones estratégicas en la búsqueda de elementos de prueba, durante la obtención de cada uno de estos datos, evidencias o vestigios, habrá de someterse, en la medida y parte que le corresponda, igual que el resto de los intervinientes, al principio del contradictorio. Este proporciona a las partes todas las posibilidades para controvertir y argumentar probatoriamente los planteamientos de la parte contraria. La función policial en el modelo acusatorio entra en esa dinámica dialéctica del proceso penal, debido a que este principio está presente en la recolección de elementos probatorios en todas las actuaciones procesales previas a la audiencia de debate, y en ocasiones, con posterioridad a ellas.

El citado principio entonces impone la obligación no solo al Ministerio Público, sino además a la policía de investigaciones de llevar un registro de sus actuaciones en la etapa preliminar a la formalización de la imputación, con la ineludible obligación de entregar y poner al alcance los antecedentes de la investigación tanto al imputado como a su defensor.

De igual manera se aplica en la etapa procesal que corresponda permitir el debate jurídico y probatorio de los elementos probatorios recolectados por la policía. Este principio tiene implicaciones en el derecho de defensa, de tal manera que mientras

más se fortalezca esta, habrá mayor posibilidad de encontrar la verdad. Sin los registros de la investigación preliminar por parte de la policía o cuando estos son inadecuados o incompletos, esta infracción al deber de información, que implica el principio contradictorio o adversarial, la defensa técnica no tendrá posibilidad alguna de oponerse a la estrategia probatoria del fiscal o agente del Ministerio Público.

Cuando se examina el principio de inmediación debe entenderse que este impone al tribunal la obligación constitucional de decidir de acuerdo con lo observado durante las audiencias, en las que se han desahogado los medios de prueba de un caso penal, y en las cuales los policías pueden participar directamente en su calidad de órganos de prueba cuando las circunstancias del caso así lo ameritan.

Por consiguiente, el examen directo de los medios de probar durante su desahogo, comprende un control completo e inmediato de los jueces respecto a la información de calidad que llega a producirse en la audiencia de debate y juicio oral. Con este principio el juez “observa por sí mismo el desahogo de la prueba y extrae los hechos sin utilizar intermediario alguno”.<sup>9</sup> Este principio implica que la prueba con la cual se forme la convicción del juez es aquella que necesariamente se rindió durante la audiencia de debate oral.

De esta forma, los medios de prueba desahogados en una audiencia previa al juicio oral y las actuaciones aplicadas durante la investigación preliminar que practique la policía de investigaciones o el agente del Ministerio Público, no tienen el rango probatorio suficiente para el dictado de la sentencia, excepto aquellas que tienen la naturaleza de anticipo de prueba, o bien, las que autorizan algunos códigos procesales de corte acusatorio a incorporar por lectura o reproducción durante la audiencia de debate del juicio oral.<sup>10</sup> Así, los jueces penales deberán presidir y presenciar

<sup>9</sup> Artículo 25, inciso primero, 259, 273, inciso final, 297, inciso segundo y 332 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua. Incorpora por primera ocasión el sistema acusatorio predominantemente oral a partir de enero de 2007.

<sup>10</sup> Artículo 236 del citado código procesal de corte acusatorio.

el desarrollo de las audiencias y bajo ningún motivo podrán delegar sus funciones como ocurría en el sistema penal inquisitivo.

En este sentido, en un número considerable de casos prácticos importa que la policía de investigación genere una unidad especializada para el manejo de esta figura que es fundamental en la obtención de información de calidad y en la formación de la prueba ante el tribunal de juicio oral: el anticipo de prueba. Debemos hacer la acotación de que en casos insuperables provocará, por las circunstancias de riesgo, una situación que llevará a permitir la reproducción de declaraciones anteriores vía electrónica, o en su caso, las lecturas de registros precedentes en apoyo de memoria a los testigos o víctimas.

Dicho mecanismo constituye un instrumento valioso para la policía de investigación en el esclarecimiento del caso, puesto que permite por anticipado fijar la información relevante de aquellos órganos de prueba. Sobre todo, debe emplearse sin excesos o abusos cuando el o los testigos están imposibilitados por motivos de fuerza mayor para asistir a declarar personalmente a la audiencia de debate oral.

Como efecto sustancial de los principios examinados aparece el del *debido proceso legal* que comprende la obligación estatal de proporcionarle a las partes condiciones adecuadas y oportunas para la resolución del conflicto jurídico penal a través de un mecanismo jurisdiccional. Los derechos y garantías comprendidos dentro de la exigencia de un debido proceso son los siguientes:

- A. El derecho de defensa. La defensa técnica comprende la asesoría especializada para el imputado dirigida a favorecer su posición jurídica, desde que se le imputa un hecho punible hasta la ejecución de la sentencia condenatoria. Este derecho es irrenunciable y su violación origina la nulidad absoluta de las actuaciones. La inviolabilidad de la defensa es una prerrogativa esencial que comprende tanto la defensa material como la defensa técnica, que habrá de respetarse en toda su extensión y detalle por la actividad que desempe-

ñe la policía de investigación durante las etapas procesales que marca el sistema acusatorio.

La primera es la facultad que asiste al propio imputado para revisar alegaciones que beneficie sus intereses, como el derecho a ser oído, a formular sus alegaciones y a intervenir en el proceso por sí o por abogado; constituyen una obligación constitucional de primer orden para la policía, particularmente en el sentido de convertirse en un facilitador de estas exigencias garantistas que impiden la violación a los derechos fundamentales. En ambos casos se requiere que se informe adecuadamente de la imputación penal, que se permita la refutación y contraste de los elementos de cargo, que se asegure la comparecencia de los imputados a los actos relevantes del procedimiento penal, a ser oído y declarar en esas actuaciones.

La declaración del imputado como mecanismo de defensa exige, en cuanto a la oportunidad, que al ser aprehendido se le debe exigir la declaración inmediatamente o dentro del plazo de cuarenta y ocho horas que puede durar la retención por parte del Ministerio Público, con la posibilidad de declarar durante el procedimiento cuantas veces lo desee, siempre y cuando la declaración no constituya una medida dilatoria. Las policías de investigaciones a cargo del esclarecimiento de los hechos de connotación delictiva, al igual que el Ministerio Público, deben hacerle saber detalladamente cuál es el delito que se le atribuye, con todas la circunstancias de tiempo, lugar y modo de comisión, en la medida conocidas, incluyendo aquellas que fueran de importancia para su calificación jurídica, las disposiciones legales que resultan aplicables y los antecedentes que arroje la investigación en su contra. Será la única forma que asegure que la declaración del procesado sea libre, abierta e informada, excluya cualquier hipótesis de confesión provocada e incluso involuntaria por el actuar inadecuado de algunos policías. Frente a la policía entonces, el derecho a declarar se traduce en la pre-

rrogativa de guardar silencio para no autoincriminarse; por lo tanto, nadie puede ser obligado a declarar en su contra y de su silencio no puede desprenderse ninguna consecuencia jurídica.

- B. La igualdad procesal. Constituye otro derecho que comprende el debido proceso y se traduce en la igualdad de trato y la prohibición de discriminaciones arbitrarias, procurando garantizar el pleno ejercicio de las facultades y derechos previstos para las partes. A los jueces se prohíbe mantener, directa e indirectamente, comunicación con alguna de las partes o sus defensores sobre los asuntos sometidos a su conocimiento, salvo con la presencia de todas ellas. Es función esencial de los jueces preservar este principio.
- C. El deber de fundamentación. En el debido proceso los jueces están obligados a fundar y motivar sus decisiones. La simple relación de las pruebas, la mención de los requerimientos, argumentos o pretensiones de las partes o de afirmaciones dogmáticas o fórmulas genéricas o rituales, no reemplaza en caso alguno a la fundamentación ni a la motivación. En este sentido, los códigos procesales de corte acusatorio habrán de establecer que no existe motivación cuando se infringen las reglas de la sana crítica con respecto a medios o elementos probatorios de valor decisivo. Dicha valoración debe observar las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de la experiencia. En su decisión, el tribunal de garantía o de juicio oral tendrá que explicar a las partes y a la sociedad las razones de fondo en que se apoya, siendo insuficiente la sola argumentación normal para cumplir el estándar exigido en un sistema acusatorio como el que incorpora la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La fundamentación y motivación de las decisiones judiciales constituyen una garantía del derecho a un debido proceso. Asimismo, esta garantía es un aporte de racionalidad en el proceso intelectual de valoración de la prueba, de inter-

pretación jurídica de las normas y de aplicación de las mismas al caso concreto, dejando de lado el arbitrio o la subjetividad. Ningún sentido tendría la producción de la prueba de descargo o la argumentación propia de los alegatos finales, si en definitiva los jueces nunca expresaran porque han sido ineficaces las alegaciones y objeciones de la defensa, prevaleciendo las de la acusación, o bien, si se abstuvieran de valorar las pruebas de descargo.

Por otro lado, el Ministerio Público debe fundar y motivar sus actuaciones y las resoluciones que dicte; lo mismo se espera de la institución policial —como cualquier autoridad—, principalmente cuando su intervención pueda lesionar derechos fundamentales o cuando decida la terminación o conclusión de una investigación penal. Por ejemplo cuando resuelva peticiones que se relacionen con alguna detención provisional por delito flagrante o caso de urgencia, respecto a visitas o atenciones médicas que soliciten los probables imputados, y tratándose de la seguridad que habrá de garantizar en la aplicación y seguimiento de ciertas medidas cautelares personales, entre otras cuestiones que son trascendentales en el procedimiento penal acusatorio, en el que la función policial tiene una aportación sustancial.

En este orden de ideas, el principio de publicidad, característico del modelo acusatorio de oralidad predominante, implica que los actos de la investigación y del procedimiento son públicos, especialmente respecto de las partes, excepto en el caso de reserva o limitación de publicidad autorizada legalmente cuando se trate de indagar hechos que requieran sigilo para evitar entorpecer la investigación.

Este supuesto tendrá que justificarse plenamente por la policía de investigaciones, de manera que exige una fundamentación y motivación suficiente sobre la necesidad de que se impongan ciertos límites a la publicidad en algunos actos de la investigación para que, a su vez, el agente del Ministerio Público, conduc-

tor jurídico de la investigación, haga de su conocimiento y solicite un plazo al juez de control o de garantía. La excepción aludida suele encontrarse en los códigos procesales mexicanos de las entidades federativas que han iniciado el proceso de implementación del modelo acusatorio. De igual manera, las audiencias ante los tribunales penales son públicas, como lo ordena claramente el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a menos que por motivos fundados y calificados se resuelva lo contrario de acuerdo con las reglas específicas que determine la ley secundaria.<sup>11</sup> Desde la perspectiva ciudadana, el principio de publicidad procesal permite un escrutinio mucho más amplio sobre la actividad policial que produce insumos probatorios para que el fiscal los traslade al proceso penal acusatorio y, finalmente sobre los jueces, quienes son responsables ante la comunidad del debido ejercicio de sus atribuciones.

En algunos casos particulares, la publicidad puede excluirse, por ejemplo, cuando el tribunal dispone, a petición de parte y por resolución fundada, medidas para proteger la intimidad, el honor o la seguridad de cualquier persona o para evitar la divulgación de un secreto protegido por la ley. Esta regulación ya la contemplan los códigos procesales del nuevo modelo acusatorio en México.

Uno de los principios que se relaciona directamente con la función policial es el denominado *principio de inocencia*. Por primera vez aparece estipulado en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en la que se indica como presunción de inocencia la regla acerca de que habrá de presumirse inocente “a todo hombre hasta que haya sido declarado culpable”. No se trata de ningún beneficio a favor del imputado; al contrario, constituye una limitación precisa a la actividad del poder punitivo estatal. Comprende un postulado fundamental de todo sistema procesal que se inserta en un Estado democrático y de derecho, ya que emana de la consideración sobre la dignidad de la persona humana. El jurista mexicano Díaz Aranda describe este principio

<sup>11</sup> Artículo 321 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua.

con claridad indicando que “la presunción de inocencia implica que toda persona debe gozar de su libertad hasta que no haya un acto de autoridad debidamente fundado y motivado que la pueda restringir. Si esto es así, entonces, debemos ahora delimitar el principio de presunción de inocencia”.<sup>12</sup>

Las expresiones objetivas de este principio se manifiestan, en primer término, con la premisa del enjuiciamiento penal en libertad, de tal manera que deberá respetarse al imputado su condición de sujeto libre, pudiendo cambiar esta posición únicamente a consecuencia de una sentencia condenatoria firme. El citado autor añade que la presunción de inocencia

...es antes que nada una posición de ventaja que la constitución atribuye al ciudadano que se encuentra en posición de parte acusada o, en general, es objeto de persecución penal. La ventaja consiste en atribuirle de entrada la calidad de persona inocente y, además, no obligarle a hacer nada para demostrarlo. La persona favorecida no tiene que preocuparse en absoluto de probar su inocencia, le basta y le sobra la pasividad más absoluta. Como consecuencia de este reconocimiento se establece, además, especiales exigencias para conseguir que pueda ser despojada de esa condición, de manera que se desplaza la exigencia de la prueba de la acusación a las partes que la ejercen y que en definitiva, pretenden la condena del acusado.<sup>13</sup>

Concluye diciendo que

...lo anterior explica ampliamente por qué uno de los principales avances de la nueva legislación procesal de Chihuahua radica en la incorporación del principio de presunción de inocencia y, en ese sentido, el legislador local señaló los tres aspectos que lo conforman: 1) la manera en que se determina la responsabilidad penal a partir del *onus probando*, 2) la imputación de responsabilidad penal o participación en hechos delictivo a un individuo que no

<sup>12</sup> Díaz-Aranda, Enrique, *Proceso penal acusatorio y teoría del delito*, México, Straf, 2008, p. 383.

<sup>13</sup> *Ibidem*, p. 384.



ha sido juzgado y, 3) el trato a personas bajo investigación de un delito y a presos sin condena.<sup>14</sup>

El imputado debe ser considerado y tratado como inocente en todas las etapas del proceso penal, mientras no se declare su culpabilidad por sentencia firme. En la legislación procesal moderna vigente en el país —códigos procesales de corte acusatorio— se describe claramente este principio, el que incumbe respetar y garantizar a las instituciones policiales, así como a las áreas de procuración y administración de justicia.

Un debate polémico que se libra actualmente entre los académicos, medios de comunicación, autoridades y ciudadanos es el relativo al quebrantamiento de este principio en aras de la libertad de expresión. La flexibilidad que permitiría, en busca de un equilibrio con esta garantía fundamental, tendrá justificación solo si con base en un interés superior como es la justicia para las víctimas y la sociedad en general, exista el propósito de localizar a imputados sustraídos a la acción de la justicia; en este supuesto resulta admisible la publicación de datos indispensables de los imputados para su aprehensión por orden judicial.

En segundo término, otra de las manifestaciones de este principio es la interpretación a favor del imputado en caso de duda. Este lineamiento interpretativo es vinculante para las autoridades que intervienen en el procedimiento penal acusatorio, y particularmente para los integrantes del sistema judicial; si existe un conflicto de aplicación de normas sustantivas o procesales deberá optar por la aplicación de la más favorable al imputado.

Una expresión más del principio de inocencia se traduce en la carga de la prueba que incumbe al Ministerio Público, en los términos del artículo 20, fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Consecuentemente, como le corresponde a esta autoridad acreditar todas las categorías de imputación, la policía de investigaciones está obligada y es responsable de que la carga de la prueba se traduzca en eficiencia y eficacia

<sup>14</sup> *Idem.*

observando las garantías del debido proceso penal; en caso contrario, el imputado debe ser absuelto. Cuando este y su defensor hagan el planteamiento de causales de justificación, exculpación o atenuación, les corresponderá justificarlas a través de elementos de prueba que hayan incorporado al proceso penal acusatorio, o bien, de aquellos que aportó el Ministerio Público. Resulta inadmisibles en este modelo la presunción legal de culpabilidad que se advierte en los códigos procesales de corte inquisitivo.

La legalidad de la prueba es otra expresión añadida para reforzar el principio de inocencia; está prohibida la obtención irregular de medios de prueba y su posterior utilización en el procedimiento. Evidentemente, esta consideración aplica directamente a los actos de prueba que realiza la policía de investigaciones. Incumbe directamente la observancia de reglas de prueba tendentes a obtener información sin lesionar los derechos fundamentales de los ciudadanos que en su oportunidad son objeto de investigación penal. A esto se le denomina legalidad de la prueba, como condición para la valoración lícita de la misma, que sería la única forma de vencer la presunción de inocencia.

Conforme a este principio, los elementos de prueba recolectados por la policía de investigaciones solo tendrán valor si han sido obtenidos y producidos por medios lícitos e incorporados al proceso en forma legal. Por consiguiente, será ineficaz cualquier elemento de prueba que obtenga la policía en el curso de una investigación mediante torturas, amenazas o violación de los derechos fundamentales de las personas.

De ahí que al sistema procesal acusatorio no le sea indiferente la forma en que se obtienen los elementos de prueba. Por el contrario, es precisamente esta actividad de la policía y de los agentes del Ministerio Público, la que crea mayores riesgos para el respeto de los derechos fundamentales. Es cierto que la indagación de la verdad es uno de los fines del proceso penal, sin embargo esta no debe buscarse sin límites.

*El principio de única persecución*, que está inspirado en el postulado de *non bis in idem*, muestra objetivamente la certeza

jurídica que emana de la cosa juzgada. Las personas que sean condenadas, absueltas o cuyo proceso haya sido sobreseído por sentencia ejecutoriada, no podrán ser sometidas a otro proceso penal por los mismos hechos; la policía de investigaciones está obligada a observar este principio creando en sus sistemas de información los registros necesarios que eliminen la posibilidad de causar un quebrantamiento al principio del *non bis in idem* con la apertura de indagatorias por los mismos hechos a probables imputados o sentenciados cuyas causas penales han sido terminadas por cualquier motivo legal y que tienen el estatus de cosa juzgada.

Cuando se habla de la justicia pronta y expedita incuestionablemente aparece la aplicación del principio de celeridad en el procedimiento penal acusatorio que estará vigente en todo el país los próximos años. Postula como derecho, tanto de víctimas como de imputados, un proceso sin dilaciones indebidas, porque los procesos judiciales deben iniciarse y completarse en un plazo razonable. El artículo 18 constitucional ha plasmado su esencia: “Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial”.<sup>15</sup>

Aunque ni duda cabe que la garantía de un juicio sin dilaciones está ligada principalmente al derecho a la libertad personal, la presunción de inocencia y el derecho de defensa, los miembros de las instituciones policiales habrán de respetarla e impulsarla a través de la actividad policial basada en metodologías y técnicas de investigación forense que tengan su base en una gestión de calidad que impulse sus múltiples actos de investigación a través la medición de indicadores de desempeño y de resultados en tiempos breves y forma.

<sup>15</sup> Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, *Diario Oficial de la Federación*, Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 5 de febrero de 1917.

El Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua<sup>16</sup> incorpora por primera ocasión en el país el sistema acusatorio —en 2007— y contempla este principio bajo la denominación de “justicia pronta” que describe de la siguiente manera: “Toda persona tendrá derecho a ser juzgada y a que se le resuelva en forma definitiva acerca de la imputación que recae sobre ella, dentro de los plazos que establece éste código”. En consecuencia, el citado ordenamiento procesal materializa el principio de celeridad procesal a través de la declarativa en ese sentido que acompaña de plazos breves para el enjuiciamiento penal: cuatro meses si se trata de un delito cuya pena máxima de prisión no excede de dos años, y de un año si la pena del delito excediere de dos años, desde que se dicta el auto de vinculación a proceso hasta el dictado de la sentencia. Con la salvedad de que en tratándose de un procedimiento abreviado por cualquier delito, el proceso penal acusatorio podrá concluir en una semana o par de semanas de acuerdo con las circunstancias del caso concreto.

Unido a este postulado encontramos *el principio de eficiencia y eficacia*, que debe encontrarse presente en todo sistema acusatorio moderno; este principio se traduce, por una parte, en que los recursos estatales destinados a la persecución penal deben ser administrados de una manera eficiente y eficaz. En este caso, los procesos que lleva a cabo la policía de investigaciones para la obtención de los elementos de prueba deben incorporarse a un sistema de gestión que permita la medición de la eficiencia, en plazos razonables, de cada uno de los miembros de la policía, de manera que se permita racionalizar administrativamente el trabajo de los factores institucionales, aprovechando al máximo sus capacidades y dedicación en beneficio de la justicia pronta y expedita.

Aunque en este principio de la persecución penal el Ministerio Público dispone de facultades legales de selectividad que buscan

<sup>16</sup> Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, Decreto núm. 611/06 II P.O., aprobado el 15 de junio de 2006 por la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado de Chihuahua. Vigente a partir del 1o. de enero de 2007.

descongestionar un sistema penal, que solo será capaz de hacer frente con efectividad y eficiencia a un acotado porcentaje de delitos. En este proceso de selectividad que se desarrolla a través de la justicia penal alternativa, la policía de investigaciones habrá de tener una participación importante en la formación de sus policías que tendrán un perfil profesional que permita en algunos casos dirigir la resolución del conflicto penal a cualquier mecanismo de solución de controversia —llámese mediación, justicia restaurativa o negociación—.

Esta será la aspiración ideal a futuro en la formación de los miembros de la policía de seguridad o de investigaciones. La experiencia muestra que cualquier Estado en el mundo que pretenda perseguir todos los hechos criminales que acontecen en la vida social, al poco tiempo estará colapsado. Los recursos serían insuficientes y los órganos estatales proyectarán la incapacidad de resolver el conflicto penal con los estándares de calidad que esperan todos los ciudadanos. Bajo este marco de crisis, la ineficacia genera impunidad y esta, a su vez, el descrédito de la norma penal como mecanismo de control social.

La selección de casos contribuye entonces a que el sistema de persecución penal pública funcione dentro de parámetros de eficiencia y calidad mínimamente razonables, aplicando el principio de la justicia restaurativa, cuyo postulado coincide con uno de los fines del proceso penal: la resolución del conflicto que surge a consecuencia del delito; además, contribuye a restaurar la armonía social entre los protagonistas en un marco de respeto irrestricto a los derechos fundamentales.

De manera semejante, la policía debe acatar el principio de proporcionalidad que se caracteriza por el hecho de presumir la existencia de una relación adecuada entre uno o varios fines determinados y los medios con que son llevados a cabo. Posibilita un control de exceso para proteger a las personas de los abusos o arbitrariedad del poder público y, en su caso, de la actividad policial en la investigación de los delitos.

Las garantías penales sustantivas cobran vigencia y se materializan cuando tienen un contexto procesal adecuado, basado en principios y reglas internalizadas por los operadores y particularmente por los miembros de la policía, en el que se asegura a niveles aceptables ciertas pautas normativas postuladas en el pensamiento penal de la Ilustración. Incorporar las garantías del proceso penal, tanto orgánicas como procesales, posibilita la construcción de un modelo procesal en el que se busca conocer una verdad real que se aproxime lo más posible a lo ocurrido en el pasado al cometerse el delito, esa verdad trasladada por los operadores jurídicos a través de los datos, evidencias, vestigios o elementos de prueba que constituyen el puente para el conocimiento de los hechos ocurridos.

Un proceso penal acusatorio queda legitimado a través de los valores de verdad y libertad que involucran derechos fundamentales. Sobre este punto de la verdad, Ferrajoli indica que “el objetivo justificador del proceso penal se identifica con la garantía de las libertades de los ciudadanos, a través de la garantía de la verdad— una verdad no caída del cielo, sino obtenida mediante pruebas y refutaciones— frente al uso y al error”. El valor de la verdad se proyecta de forma directa sobre el quehacer de la policía de investigaciones, fiscales o agentes del Ministerio Público, quienes estarán empeñados en obtener datos confiables, ciertos y controlables respecto de la comisión de un delito.

La actividad de la policía frente a los *principales derechos y garantías del imputado* son los siguientes:

- a) Que se le informe de manera específica y clara acerca de los hechos que se le imputan y los derechos que le otorgan la Constitución y la ley. Una manera clara y precisa de hacerlo será a través de la lectura de derechos, cuyo texto estará consignado en actas policiales.
- b) La asistencia de un abogado desde los actos iniciales de la investigación. Cuando la policía lleve a cabo su detención de inmediato habrá de brindar las facilidades para la designación de un defensor público o privado.

- c) Igualmente, el imputado tiene derecho a exigir, en su caso, a los fiscales y policías la realización de actuaciones procesales dirigidas a desvirtuar imputaciones de culpabilidad que se le formularen.
- d) Promover directamente ante el juez que cite a una audiencia, a la cual podrá concurrir con su abogado o sin él, con el fin de prestar declaración sobre los hechos materia de la investigación.
- e) Pedir que se active la investigación y conocer su contenido, salvo en los casos en que alguna parte de ella hubiere sido declarada secreta y solo por el tiempo que esa declaración se prolongare.
- f) Guardar silencio, o en caso de consentir en prestar declaración, hacerlo con la presencia de un defensor público o privado que designará con todas las facilidades que le brinde la policía de investigaciones.
- g) No ser sometido a tortura ni a otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. La policía tiene la obligación constitucional de generar mecanismos que eliminen cualquier posibilidad de riesgo de que el imputado sea violentado para que proporcione información sobre los hechos investigados. Nada de lo expuesto en estas condiciones tendrá valor, además de que resulta innecesario porque para efectos de juicio oral carece de eficacia cualquier medio de probar realizado en las etapas posteriores, con mayor razón una declaración arrancada mediante los tradicionales métodos violentos de la policía mexicana.
- h) No ser juzgado en ausencia, sin perjuicio de las responsabilidades que para él derivaren de la situación de rebeldía.

En el ámbito policial, uno de los derechos a favor de los imputados que deben internalizar los miembros de las instituciones policiales es el principio de inocencia, y no olvidar que cuando son privados de la libertad se impone la obligación de llevar a cabo de inmediato la comunicación de la lectura de sus derechos.

Esta obligación está a cargo de cualquiera autoridad de los órganos de justicia, pero particularmente de la policía y del agente del Ministerio Público, quienes tienen el contacto primario con el imputado; incluso se extiende al juez de control o de juicio oral cuando fue omitida por las mencionadas autoridades. En la lectura de derechos, el probable imputado recibe información también acerca de algunos derechos derivados de los principios descritos en este capítulo y que comprende los siguientes datos:

- a) Que se le exprese específica y claramente el motivo de su privación de libertad y, salvo el caso de delito flagrante, a que se le exhiba la orden de detención.
- b) Que el funcionario a cargo del procedimiento de detención o de aprehensión le informe de los derechos a que se refiere la Constitución federal.
- c) A ser conducido sin demora ante el tribunal que hubiere ordenado su detención
- d) A solicitar del tribunal que le conceda la libertad.
- e) A que el encargado de la guardia del recinto policial al cual fuere conducido, informe, en su presencia, al familiar o a la persona que le indicare, que ha sido detenido o preso, el motivo de la detención o prisión y el lugar donde se encontrare.
- f) A entrevistarse privadamente con su abogado.
- g) Recibir visitas y comunicarse por escrito.



## CAPÍTULO CUARTO

### LA POLICÍA DE INVESTIGACIONES EN EL JUICIO ORAL

La aplicación de la criminalística es fundamental en el modelo acusatorio, desde el inicio de las investigaciones policiales hasta la celebración de los juicios orales. Constituye una fuente de producción de pruebas técnicas y científicas, producto del procesamiento de evidencias físicas y biológicas obtenidas durante la investigación policial y criminalística.

La reflexión profunda sobre el futuro de las instituciones policiales ahora hacen posible lo impensable en México; es decir, que en su actividad cotidiana apliquen métodos y técnicas forenses de investigación criminalista con el objetivo estratégico de recolectar elementos de prueba confiables y verificables. Estos son los desafíos del modelo acusatorio en la función policial que además, a través del lenguaje, construye la razón de la causa probable en la investigación de un delito.

Analizar aspectos científicos en esta clase de asuntos no es fácil. Sin embargo, los fundamentos de la ciencia forense son tópicos de un valor inestimable en las investigaciones criminales, que darán certeza y seguridad a los ciudadanos respecto a los resultados de la policía mexicana. Por ejemplo, la complejidad que presenta la obtención de actos de prueba en materia de genética forense hace extremadamente difícil su exposición, al menos en términos que puedan ser comprensibles para personas del mundo jurídico. Existe la barrera del legítimo temor a incurrir en imprecisiones en el intento de transcribir, siquiera resumidamente, el proceso metodológico que sustenta el análisis de la huella genética y su aportación al esclarecimiento de algunos delitos.

Es justificable ese legítimo temor por parte de la policía, pero es de mayor valía su participación en estos tópicos y otros en su

calidad de testigos en un caso penal en el cual tuvieron calidad de investigadores. Por este motivo, compartimos plenamente estas inquietudes, y consideramos que en un juicio oral las pruebas técnicas y científicas, además pueden incorporarse mediante el testimonio policial.

Duce ha expresado que

...la principal oportunidad con que un abogado cuenta para narrar y probar su historia, permitiéndole al tribunal revivir la versión de los hechos de su cliente, es el examen directo. Con esta expresión designamos la revisión en el juicio oral de los testigos que la propia parte presenta, cualquiera que sea el nombre que se les dé en el Código Procesal Penal (acusado, víctima o testigo propiamente tal)...

Durante el estudio y el análisis de la investigación criminalística o policial, alguna vez nos hemos enfrentado con ideas, teorías o experiencias sin tener instrumentos técnicos, normas, criterios o definiciones de trabajo orientadoras para el desarrollo apropiado de un testimonio policial con suficiente prueba material que acredita elementos del delito y la autoría o participación de una persona en su comisión. En este nuevo procedimiento acusatorio es importante formar en nuestros policías hábitos y disciplina intelectuales tendentes a lograr la exactitud del pensamiento en las intervenciones que enfrentará en un juicio oral. Además, ciertas habilidades del policía asociadas naturalmente a la expresión precisa de los elementos de prueba que derivan de la prueba material que obtuvieron durante los actos de investigación en la práctica forense de un caso concreto.

Este tema contribuye en algo al orden y progreso de las instituciones policiales, en las actividades que durante el proceso penal acusatorio ahora deberá encarar el policía, particularmente las vinculadas a la prueba y su desahogo en un juicio oral. Quiquiera que ofrezca una alternativa estratégica en la labor policial que se inserta en el nuevo sistema penal acusatorio, debe tener presente que las personas no aceptan fácilmente una disciplina técnica o científica si no ven alguna buena ventaja en hacerlo.

Por lo tanto, además del desarrollo individual y el deber de cada policía de rendición de cuentas a la comunidad a la que sirven, se encuentra la parte que corresponde a la institución policial que consiste en la creación de un sistema judicial digno y justo que incluya la asistencia jurídica para establecer esquemas de asesoramiento frente a la eventualidad de concurrir a un juicio oral con motivo de una investigación por ello realizada.

Lo que he dicho líneas arriba espero sea motivo suficiente para algunos, en la profundización del cambio de modelo de policía en el contexto del sistema acusatorio. Naturalmente, nuestros policías deben saber que en los temas intelectuales no se puede obtener algo por nada en estos asuntos. De modo que el policía debe realizar un esfuerzo de concentración y atención en las actividades a desarrollar previas a la audiencia de debate y juicio oral. Es necesario subrayar que entre más difícil y confuso parezca un caso con diversos aspectos que se habrán de abordar en un juicio oral (que además es importante, porque involucra la investigación criminalística ya realizada), más necesario resulta escudriñar clara, ordenada y explícitamente sus partes esenciales, que serán objeto de prueba en el debate, a partir de un interrogatorio o contra-interrogatorio. La meta trazada de investigación criminalística será proyectada a través de los medios de prueba que presenten el fiscal y, en su momento, el policía investigador que comparece en calidad de testigo a la audiencia de debate.

En esta audiencia, un policía de investigaciones deberá emplear a fondo, con constancia y seriedad, las facultades analíticas y constructivas del pensamiento, como una más humana opción de trasladar su aportación al juez con todas las notas técnicas que involucra, utilizando un lenguaje claro y preciso. Es necesaria la disciplina para que cada policía logre pensar con rigor cuando acuda a la audiencia de debate a trasladar la información obtenida durante las etapas previas y que confirman la teoría del caso inicialmente planteada. Su comparecencia abordará los problemas de investigación criminal, que aumentan y se hacen más complejos al momento de mostrar finalmente la verdad de lo ocurrido.

De los aspectos generales de la función policial, en relación con la intervención que puede tener un policía de investigaciones en una audiencia de debate de juicio oral, destaca el perfeccionamiento de las facultades críticas y analíticas del pensamiento, ya que son de la máxima importancia para los ciudadanos a quienes deben rendir cuentas, debido en ocasiones a la distorsión de los hechos investigados por las características de la actual sociedad mexicana, cada vez más compleja y atestada con bloques masivos de información tanto espuria como genuina.

Es importante que los miembros de la policía de investigaciones adquieran el hábito de pensar con exactitud conceptual y el desarrollo del rigor lógico analítico en los modos de razonar; sobre todo cuando están en presencia de alguna de las partes, que en la audiencia de debate de juicio oral pretenda introducir alguna duda razonable respecto a la investigación policial realizada. En consonancia, los protocolos de investigación y las actas policiales son útiles como instrumentos básicos en la obtención de información de calidad, que aparece asentada desde la etapa de investigación, dirigida a establecer la identidad del culpable en la comisión de un delito o ciertos aspectos relacionados con la ejecución de la conducta típica y las cuestiones concernientes al daño ocasionado a la víctima. Construir algunos lineamientos de este tema debería ser un objetivo fundamental.

Tanto la actitud experimental de la mente como la actitud racional de cada policía de investigaciones, tiene que aprenderse (y conservarse) poco a poco por aproximaciones a veces zigzagueantes. De ahí que la actividad policial debería ceñirse a estas nuevas formas de operar en una investigación criminal.

*En perspectiva diremos que el policía de investigaciones en la audiencia de debate de juicio oral como objetivos estratégicos buscaría:*

- 1) Realizar un análisis y diagnóstico cuidadoso, previo a la audiencia de debate, de las dificultades técnicas, culturales y psicológicas que pudieran presentarse al exponer o trans-

mitir las proposiciones fácticas que pretende probar en el juicio el agente del Ministerio Público, y la información de calidad que fue producto de la investigación policial.

- 2) Elaborar algunas normas y criterios que sirvan para regular y volver más eficiente y constructiva su comparecencia a la audiencia de debate de juicio oral, en relación con el fortalecimiento de la teoría del caso cuyo contenido fue producto de la investigación policial. La discusión y la crítica de las técnicas criminalísticas empleadas por la policía para obtener elementos de prueba, pueden ser su punto débil en el debate. El diseño de reglas de admisibilidad de las pruebas técnicas es una táctica que permite dar respuestas a preguntas que le formulen las partes al policía-testigo en la audiencia.
- 3) El clarificar y describir —respecto a la investigación policial en relación a la que hará su comparecencia— algunos conceptos, prácticas y técnicas en criminalística de campo y de laboratorio que fueron empleadas en la investigación policial, pueden auxiliar en dar credibilidad y confianza al resultado de la investigación policial respecto a los elementos del delito y la identidad de sus autores o partícipes. Estas herramientas metodológicas son esenciales para el adecuado desarrollo de las habilidades y destrezas del policía que comparece a rendir cuentas de su actividad policial en una audiencia de debate.
- 4) Desarrollar precisión y coherencia lógica en la expresión verbal de cada policía que comparece en calidad de testigo a juicio oral, a través de la práctica constante de técnicas de entrevista e interrogatorio. Estos elementos los puede adquirir a través del planteamiento de preguntas cerradas o abiertas que construya directamente, antes de comparecer a la audiencia, de toda la información que aparece documentada en las actas policiales o protocolos de investigación que elaboró en las etapas anteriores del procedimiento acusatorio. El objetivo es que las expresiones de contenido

y lingüísticas lleguen a generar el entendimiento y la transmisión clara de los datos, evidencias o indicios obtenidos en su investigación policial.

- 5) Identificar los posibles errores cometidos en la investigación policial con el objeto de construir los argumentos que permitan hacer la aclaración, sin que la información aportada genere alguna duda razonable sobre el delito, su forma y modo de ejecución o la intervención de los probables autores o partícipes. De preferencia localizar aquellos argumentos que sean verificables, de manera clara y eficaz, mediante el análisis cuidadoso de cada una de sus partes.
- 6) Estimular la amplitud de visión conceptual de cada uno de nuestros policías, mediante ciertas prácticas de análisis definicional en torno a los elementos de los diversos delitos que investiga, las penas y medidas de seguridad; así como la comprensión de figuras procesales recurrentes en la actividad cotidiana de la policía de investigaciones en el nuevo modelo policial, que deriva del sistema penal acusatorio y adversarial.
- 7) Familiarizar a cada policía participante en una audiencia de debate de juicio oral con las técnicas criminalísticas de investigación y de resolución de problemas, con ciertas técnicas y conceptos lógicos del modelo acusatorio, cuyos usos y aplicaciones son de gran amplitud para la corresponsabilidad que adquieren en la investigación del delito, la identificación de los autores o partícipes y su inmediata o posterior detención.
- 8) Reconocer la importancia que tiene la identificación, por parte de cada policía, de la estructura del sistema penal acusatorio en el lenguaje policial, la delicada tarea de transmisión (sin tergiversación) de la información y comprensión de los principios fundamentales del juicio oral.
- 9) Analizar lógicamente la estructura interna de una audiencia de debate de juicio oral a través de un protocolo que muestre todas las facetas de intervención de las partes durante la

comparecencia del policía a la audiencia, tipos de preguntas, objeciones, etcétera, con la finalidad estratégica de dar un orden a su participación cuando deba comparecer en su calidad de testigo, portador de elementos de pruebas sustanciales en la determinación de los hechos investigados que son constitutivos de un delito. En esta actividad específica el policía investigador debe ejercitar los elementos esenciales con los que puede discernirse la inteligencia humana:

- a) La habilidad resolutoria.
- b) La habilidad crítica.
- c) La capacidad creativa.

La primera se perfecciona resolviendo problemas cuidadosamente elegidos que pueden presentarse en una audiencia de debate de juicio oral. La segunda, a través del análisis de conceptos, razonamientos, teorías, proyectos, asociados a la investigación criminalística que realizó y la cual será cuestionada por la defensa técnica; la capacidad creativa puede ser, en algunos afortunados casos, el resultado de las actividades anteriores y de meditar con constancia en lo que nos interesa en profundidad mostrar con claridad al tribunal de juicio oral: los hechos investigados en torno a la culpabilidad del acusado, o bien, un asunto que deba esclarecer sobre la existencia del delito y la identidad del autor o cómplices.

En la vida ordinaria, en el estudio y la investigación criminalística, algunas veces el policía investigador se enfrentará con ideas, hipótesis y experiencias, sin tener un razonable arsenal de técnicas, criterios y definiciones de trabajo que le sirvan de orientación y de precedente regulador. El proceso penal acusatorio repasará lo existente, pero además permitirá que el policía directamente genere sus propias herramientas de pensamiento necesarias para encarar y confrontar su investigación en audiencia de debate.

Para la institución que concentre la policía de investigaciones en el nuevo modelo acusatorio, será conveniente que trate de desarrollar algunos instrumentos analíticos básicos, que

contribuyan al perfeccionamiento de las habilidades de nuestros policías, en el análisis constructivo y en la disciplina intelectual necesaria, para alcanzar una mayor exactitud al transmitir el producto de su trabajo de investigación al tribunal de juicio oral; así, el tribunal podrá “leer” con precisión toda la actividad probatoria precedente, de manera tal que si el juez o jueces observan la calidad de los datos de prueba mostrados por el policía-testigo, sea influido a fallar en favor de la teoría del caso inicialmente planteado por el agente del Ministerio Público y confirmados los actos de investigación de la policía.

Por muy astuto que sea un policía, es muy improbable que descubra por sí mismo las herramientas que han desarrollado los criminalistas, abogados, criminólogos, psicólogos y médicos forenses, la ciencia y la tecnología en los últimos años. Requiere que estos conocimientos básicos y entrenamiento se los brinde el instituto policial para comenzar a producir nuevas herramientas de trabajo en la indagación criminal.

La instrumentación del sistema acusatorio debe proporcionar las más importantes herramientas de conocimiento y entrenamiento esencial para las actividades fundamentales de la policía en la investigación, pero también en su comparecencia a juicio oral. Una estrategia de esta naturaleza no puede pretender enseñar a razonar sobre los temas de la investigación criminalística o del juicio oral, sería tan tonto como pensar que un curso de óptica nos va a enseñar a ver; solamente se pueden proporcionar técnicas específicas e inducir al policía investigador a que las aplique en la resolución de problemas que impliquen la confrontación de la teoría del caso frente a la tesis de la defensa, aspirando que su intervención sea más técnica, sistemática y constructiva.

Los policías reflexivos deben tener presente que el desarrollo mental a lo largo de sus vidas consiste en la construcción de estructuras de conocimiento, creencias e información asociada a la evolución de la información criminalística que oriente en buena medida sus pensamientos y decisiones, presentes y futuras. Nuestra policía de investigaciones en sus próximas actividades,



en el nuevo modelo de justicia penal, facilitará el sistema integral de rendición de cuentas a los ciudadanos.

Es evidente que en el sistema acusatorio puede persuadirse a nuestros policías a habituarse a reflexionar con mayor rigor lógico y técnico, de manera más crítica y menos chapucera; a desarrollar a través de ciertas prácticas forenses, cuidadosamente elegidas, sus propias habilidades analíticas de investigación policial y de comparecencia en calidad de testigo a la audiencia de debate de juicio oral. Esto exige naturalmente el empleo cuidadoso del lenguaje que utilicen para comunicar sus actos de investigación, y en particular, el análisis de las evidencias o la prueba material obtenida en las etapas previas a la audiencia de debate.

Una parte importante para llevar a cabo ordenadamente estas labores es la utilización de las actas policiales que registran la información conforme al principio de legalidad y que modificarán comportamientos y formas de razonar en los policías, acostumbrados al registro de datos en su memoria. El empleo de la técnica de los mapas mentales y el pensamiento irradiante son hábitos que pueden adquirir para reforzar la teoría del caso, igualmente plasmada en un protocolo de investigación. Esta dará claridad, exactitud, y puede ser la guía en la planeación estratégica de una investigación criminal, particularmente en el procesamiento y transmisión de la información a fiscales, jueces o defensores.

El conjunto de motivos expuestos llevan a concluir, que en un mundo de ideas imposible de abarcar totalmente, *la organización y eficiencia de la actividad policial dependerá sin dudar, de un sistema de gestión de calidad eficaz y eficiente*. Las tareas del policía tendrán que registrarse a través de las tecnologías de información en un sistema de esta naturaleza, que preserve y permita el análisis puntual de toda la información del caso; por lo tanto, constituye un elemento de suprema importancia en el sistema penal acusatorio y adversarial, porque comprende la parte medular de este modelo.

El componente medular de la investigación policial será el desarrollo y aplicación de las técnicas de investigación crimi-

nalística. El resultado de estas se convierte en una metodología imprescindible en la obtención de la prueba que será desahogada en un juicio oral, otorgando por primera vez en el país, para la actividad policial, un procedimiento transparente y de rendición de cuentas.

Por ello, la cultura democrática en el nuevo perfil del policía de investigaciones disciplina para pensar con rigor y precisión, y para tomar en serio la actividad de investigación criminalística, sin dogmatismos, ni prejuicios. Es por esta razón que nos hacemos la grata ilusión de que los textos para policías contribuyen, con su parte, a generar un más amplio horizonte y al aumento de la autoconciencia policial en el respeto a los derechos fundamentales de todos.

## CAPÍTULO QUINTO

### LA PRUEBA Y LA POLICÍA EN EL MODELO ACUSATORIO

Comenzar a revisar las reglas constitucionales que han dado un enfoque distinto a la actividad policial investigativa, implica llevar a cabo el análisis profundo de las facultades descritas en los artículos 20 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

A partir de la aprobación de la reforma penal y procesal comprendida en diez artículos de la Constitución federal, en su artículo 21 aparece una modificación sustancial relacionada con la función policial. Con anterioridad dicho precepto mencionaba que “...la investigación y persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público, el cual se auxiliará con una policía que estará bajo su autoridad y mando inmediato”. En cambio, a partir del 19 de junio del 2008 entró en vigor la norma que imperativamente cambia la posición de la policía en relación con el objeto de su función investigativa, ya que textualmente establece: “La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función”.

Con precisión y claridad la norma constitucional vigente ordena que a partir de esa fecha la investigación de los delitos no solo esté a cargo del Ministerio Público, sino que también le “corresponda” a las policías. De manera que explícitamente describe una corresponsabilidad en la investigación del delito sin limitación alguna, excepto aquella relacionada con la conducción y mando del Ministerio Público en el ejercicio de la función investigativa exclusivamente. Esto abre el camino hacia la corresponsabilidad en todas las etapas del procedimiento penal acusatorio.

Las policías están en principio obligadas a la investigación de los delitos, y deberán actuar con eficiencia y eficacia desde el momento en que se presente la comisión de estos hechos. De esta obligación constitucional deriva que las acciones policiales para la investigación penal deben iniciarse y desarrollarse sin esperar una orden por escrito o verbal del Ministerio Público.

Esto es así debido a que el desarrollo de la función natural que le corresponde a la policía facilita su actuación inmediata en los sitios donde generalmente se cometen los delitos, por lo general en lugares públicos o abiertos. En otras ocasiones, en sitios de propiedad privada o cerrados al público, de igual forma, la primera autoridad que acude al conocimiento del hecho presuntamente delictivo es precisamente la o las policías del sector o comunidad.

Por lo tanto, la facultad constitucional de investigar los delitos estará a cargo de las policías en general. Esto independientemente de que la legislación secundaria que regula las actividad policial en México, en este caso la Ley General del Sistema de Seguridad Pública federal y las leyes estatales en este tema, precise un esquema de división en la estructura policial donde se contemple por la materia una policía de prevención, otra de reacción y una más enfocada a la investigación.

Opinamos que una concepción racional de la policía de investigaciones es de carácter prioritario y trascendente en la función pública, principalmente porque se fundaría en una verificación probatoria de su quehacer cotidiano que lleva a la determinación de los hechos típicamente relevantes indagados. Debemos partir de la premisa de que la justicia no presupone únicamente su legalidad, sino también la veracidad de los hechos probados, a través de todos los elementos de prueba que la policía llegue a localizar y trasladar a la carpeta de investigación que tramita el agente del Ministerio Público. Ninguna decisión de los miembros de la institución policial —en la apertura de investigación y las detenciones de imputados— podrá considerarse justa si se funda en una comprobación falsa o errónea de los hechos delictivos investigados. Esta situación la propicia en nuestro país, sin duda, el

sistema tasado o mixto que legislativamente ya fue rebasado por la norma constitucional.

Dentro de este contexto debemos puntualizar algunos aspectos relacionados con la prueba y la actividad policial, que constituyen elementos técnicos aportados por la doctrina procesal y que no deben pasarse por alto al momento de construir cualquier investigación penal en un modelo acusatorio y adversarial. Lo anterior en razón de que forman parte de una plataforma común en el lenguaje democrático y contribuyen a la limitación de la arbitrariedad policial a través de la precisión de las ideas expresadas en una metodología y técnica desarrollada por la policía de investigaciones tendentes a establecer certeza jurídica en la actos procesales realizados por esta institución.

Las reglas generales sobre el tema implican establecer lo que debería entenderse por el término “prueba”. El concepto tradicionalmente fue asociado con la idea de búsqueda de la verdad. La dinámica del proceso penal de corte inquisitivo mantiene reglas que pueden hacer que aparezcan algunos hechos como ciertos — las múltiples confesiones producidas ante la policía y difundidas en los medios de comunicación—, no por ser verdaderos, sino por haber sido obtenidos con determinados requisitos legales: una confesión producida aparentemente ante el agente del Ministerio Público y con la asistencia de un defensor. No es raro que por la rigidez de las reglas sobre la apreciación del material demostrativo se produzcan imágenes irreales. El régimen colapsado de tipo inquisitorial, en el que está inmersa la policía para el desarrollo de la investigación penal, puede velar o deformar la verdad.

Uno de los antecedentes más claros asociados al término de “la verdad” y el concepto de “prueba” lo describe con claridad Michael Foucault en una de sus obras:<sup>17</sup>

Esta gran conquista de la democracia griega, el derecho de dar testimonio, de oponer la verdad al poder, se logró al cabo de un

<sup>17</sup> Foucault, Michael, *La verdad y las formas jurídicas*, trad. de Enrique Lynch, 2a. ed., España, Gedisa, 2003, p. 66.

largo proceso nacido e instaurado definitivamente en Atenas durante el siglo V. Este derecho de oponer una verdad sin poder a un poder sin verdad dio lugar a una serie de grandes formas culturales que son características de la sociedad griega. En primer lugar, la elaboración de lo que podríamos llamar formas racionales de la prueba y la demostración: cómo producir la verdad, en qué condiciones, que formas han de observarse y que reglas han de aplicarse. Estas formas son la filosofía, los sistemas racionales y los sistemas científicos. En segundo lugar y en relación con estas formas que hemos mencionado, se desarrolla un arte de persuadir, de convencer a las personas sobre la verdad de lo que se dice, de obtener la victoria para la verdad o, aún más, por la verdad. Nos referimos a la retórica griega.

Entendemos por verdad “la idea que se tiene de las cosas y su correspondencia con la realidad”, un concepto proporcionado por Trasky y reproducido por Michelle Taruffo.<sup>18</sup> De esta manera, asumimos que la “verdad material”, que invocan los procesalistas, será aquella que se fija en el pensamiento del juez como certeza y como consecuencia de la libre apreciación de los medios de probar que son presentados en una audiencia de debate de juicio oral, los cuales fueron previamente recolectados, fijados y obtenidos por la policía de investigaciones, el agente del Ministerio Público o la defensa en su caso, durante las actividades procesales previas a la decisión final del tribunal de juicio oral.

Ahora bien, resulta conveniente, dentro de la estructura del procedimiento penal acusatorio, tener presente que la integración de la prueba en el juicio oral requiere de acciones previas de la policía, del agente del Ministerio Público, de la defensa técnica y del imputado que implican necesariamente: *a)* una actividad probatoria reglada, *b)* los medios de probar y su recepción, *c)* el resultado de los medios de probar, y *d)* el desahogo y valoración de los medios de prueba (cuando se ha producido la prueba).

<sup>18</sup> Taruffo, Michelle, *La prueba de los hechos*, trad. de Jordi Ferrer Beltrán, Madrid, Trotta, 2002, p. 143.

La actividad probatoria reglada es la primera fase del procedimiento probatorio que involucra los actos de investigación de la policía y del agente del Ministerio Público; por lo general se produce durante la etapa investigativa del proceso penal acusatorio. En cambio, los medios de probar que se utilicen para adquirir conocimiento e información privilegiada por la policía, habrán de documentarse en protocolos y actas policiales destinadas a guardar fielmente esos datos o elementos de prueba que acreditan los elementos del delito y los daños ocasionados por este. La actividad policial en materia investigativa, descrita en los códigos procesales de corte acusatorio, no deja de ser ambigua, pues la constriñe a determinadas acciones genéricas sin establecer una orientación metodológica que conduzca a procesar, analizar y preservar la evidencia hasta que sea presentada ante el tribunal de juicio oral por las diversas formas que establezca la ley procesal.

En nuestro concepto, abatir el rezago histórico existente en México sobre la materia de derecho procesal orientada a la actividad policial, implica uno de los grandes desafíos y debe sujetarse a un profundo estudio que arroje como resultado la estructura de un diseño policial moderno, que abarque los mecanismos de control a la discrecionalidad policial en el procedimiento probatorio; por ese motivo, la institución policial ocupa un lugar especial en este replanteamiento procesal en el nuevo sistema acusatorio.

Así, la actividad de la policía de investigaciones tendrá un papel importante en la formación de un nuevo procedimiento probatorio. La estructura de este impone la necesidad del manejo preciso y claro de lo que debe entenderse como medios de probar, para evitar decisiones erráticas en un juicio oral. Este concepto cobra una resignificación especial en el modelo acusatorio, ya que cualquier acto de investigación del que derive información y conocimiento sobre la forma, modo y ejecución del delito, puede adquirir rango de indicio sin que deba calificarse de prueba hasta en tanto los datos, evidencias o elementos de prueba obtenidos por la policía se trasladen ante la presencia del juez a la audiencia de debate de juicio oral y esta se produzca con los

principios y requisitos que establece el procedimiento acusatorio. De donde resulta que los instrumentos empleados por la policía para preservar la información o el conocimiento adquirido durante la investigación penal, acerca de lo sucedido en un hecho que ha sido calificado como delito, tienen una importancia sustancial para la formación de la prueba en el juicio oral.

La legislación procesal y la doctrina mexicanas no utilizan criterios claros respecto a lo que debe entenderse como medios de prueba. Para efectos de orientación en la actividad policial, podremos entenderlos como cualquier mecanismo, instrumento o herramienta que sirva para introducir datos empíricos o racionales, tendentes al esclarecimiento de un hecho considerado delito en la ley, a la audiencia de debate de juicio oral, con la finalidad de que sea declarado el derecho en el caso concreto. Esas referencias o datos pueden aludir a acontecimientos históricos o a reglas científicas o técnicas que aporten un conocimiento específico en torno al delito, de ahí la necesidad de funcionarios profesionales que tengan el conocimiento especializado suficiente para la ponderación de este tipo de información durante el proceso de aprehensión y razonamiento del conocimiento probable o cierto que producen.

En conclusión, es inobjetable que la tendencia de las leyes procesales modernas está orientada al uso de todos los medios demostrativos posibles, siempre que se obtengan sin contravenir los derechos fundamentales de los afectados; por lo tanto, la institución policial habrá de modernizar sus métodos y técnicas de investigación forense. Las limitaciones legales a la libertad de utilización de los medios de prueba que aparecen en el Código Federal de Procedimientos Penales redundan en perjuicio del conocimiento de los hechos sucedidos en el pasado y que han sido calificados como delito. Cuando existen limitantes formales a la confección por parte de la policía de algunos medios de probar —por ejemplo las actas policiales— se limita, por tanto, la probabilidad del conocimiento de lo sucedido en el pasado en la comisión de un delito.



Una de las actividades fundamentales de la policía de investigaciones en el procedimiento penal acusatorio es llegar a la mejor aproximación posible a la realidad de los hechos. Por tanto, los policías, en corresponsabilidad con los agentes del Ministerio Público, deberán llevar a cabo acciones tendentes a la búsqueda y comprobación de la “verdad” de lo ocurrido en un hecho delictivo, en el que habrá de verificarse su existencia y los daños o perjuicios ocasionados. El producto de los actos de investigación, como son el acopio de información, la verificación de su fiabilidad, el análisis de su relevancia y la formulación de inferencias lógicamente válidas conducirán al policía a una conclusión sobre el delito y la autoría o participación del imputado.

En torno a la actitud de los miembros de la policía, hay una cuestión a la que debe asignarse especial importancia: promover la idea de que la verdad no es producto de una intuición individual, sino que es parte de un procedimiento cognoscitivo debidamente estructurado y comprobable. De ahí que el tema de la prueba en el juicio oral desde el enfoque policial cobre un papel preponderante. La prueba constituye un instrumento del proceso intelectual, que proporciona al juez la certeza sobre la información presentada, que le permite dilucidar sobre la falsedad o verdad de los enunciados expuestos por las partes. Michelle Taruffo<sup>19</sup> ha sostenido que la función de la prueba es “...una función racional ya que se sitúa en el interior de un procedimiento racional de conocimiento y está orientada a la formulación de ‘juicios de verdad’ fundados en una justificación racional”.

El significado o alcance que la policía de investigaciones deberá otorgar a los términos relacionados con la prueba posee relevancia significativa, debido a que lleva seguramente a la claridad en las técnicas forenses que desarrolla con la finalidad de integrar cada medio de probar a su carpeta de investigación. Además, el pronunciamiento de validez de cada uno de los elementos o datos que introduce la actividad policial a estos medios de probar, des-

<sup>19</sup> *Ibidem*, p. 33.

ahogados en una audiencia de debate de juicio oral, constituyen el centro vital de la actividad policial, a partir de un proceso intelectual de discernimiento en relación con la calidad de la información que decide trasladar al proceso penal acusatorio para la decisión de un caso y con la cual lleva la certeza de que se logrará la imposición de una condena al autor o partícipe.

*En el modelo acusatorio impera la libertad de prueba que en los próximos años debe ser el pilar fundamental en la investigación policial.* El principio de libertad de prueba, también conocido como principio de prueba libre, consiste en la posibilidad, legalmente consagrada, de acreditar la veracidad o falsedad de los hechos objeto de la investigación de un delito; esto se logra por medio de cualquier clase de fuentes de prueba, libremente capturadas, fijadas, obtenidas o recolectadas por la policía, sin más limitaciones que la legalidad de dichos medios, las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia.

La libertad de prueba es ante todo, en la actividad policial, búsqueda, captura, obtención e incorporación a las carpetas de investigación formadas para crear registros confiables de cada elemento de prueba, dato o vestigio que muestre la existencia de los elementos del delito o la autoría y participación de una o varias personas en su comisión.

El principio de libertad de prueba es el único compatible con la razón, con la búsqueda de la verdad material y con el desarrollo de la ciencia y la técnica, que cada día crea o descubre nuevos y más eficientes métodos de investigación policial. Este es el principio rector del régimen probatorio del modelo acusatorio, que debe imperar en las prácticas policiales que buscan confirmar o descartar la existencia de hechos que tengan connotación delictiva y que se investigan en ejercicio de las facultades de corresponsabilidad que señala el artículo 21 constitucional.

La reforma constitucional de 2008 en materia de prueba impone en cualquier investigación, relacionada con la comisión de delitos, observar los lineamientos que establece el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que estatuyen

la libertad de la prueba, con la única limitante de ser nula aquella obtenida con violación a los derechos fundamentales. De manera que la facultad de investigación de la policía, en corresponsabilidad con el Ministerio Público, no escapa de la observancia de esas normas en el proceso de integración del conocimiento probable o cierto en torno a un delito.

Consecuentemente, ninguna duda existe de que el nuevo esquema probatorio de rango constitucional ha venido a sustituir al viejo sistema de prueba legal, según el cual solo son admisibles los medios probatorios expresamente autorizados por la ley y sujetos a reglas rígidas de valoración, como actualmente aparecen para determinados medios de prueba —documentos, inspecciones, cateos, confesión— en el Código Federal de Procedimientos Penales, debido a la falta de adecuación legislativa.

En el contexto de la aludida reforma constitucional, la interpretación correcta de las normas relativas a la investigación del delito, relacionadas con la actividad policial en el desarrollo de las etapas de investigación, intermedia y de juicio oral, dentro del sistema de prueba libre, debe proclamar la máxima de admisibilidad general, con especificaciones acerca de los límites de la libertad probatoria por razones de utilidad, pertinencia, idoneidad y legalidad de los medios, especialmente de los empleados por la policía: evidencias físicas, prueba material como documentos, instrumentos u objetos del delito. Las reglas para su obtención obedecen necesariamente a las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia, sin el ritualismo y las formalidades imperantes en la ley inquisitiva. En lo fundamental, la libertad de prueba para la policía de investigaciones implica los siguientes aspectos relevantes:

- a) Libertad de elegir los medios de probar con independencia de aquellos que naturalmente localice en la escena de un crimen.
- b) Libertad para determinar, junto al agente del Ministerio Público, el modo de formación de la prueba.

- c) Integración gradual de los medios de probar a la carpeta de investigación.
- d) Libertad de ponderación sobre los elementos de prueba, datos o evidencias que trasladará al conocimiento de la autoridad judicial a través de la actuación del fiscal o Ministerio Público.

a) *Libertad de elegir los medios de probar con independencia de aquellos que naturalmente localice en la escena de un crimen*

La libertad para elegir los medios de probar con independencia de aquellos que naturalmente localice en la escena de un crimen, coloca a la policía de investigaciones en la tesitura de utilizar metodologías y técnicas forenses que permitan consolidar con eficiencia y eficacia el resultado de los casos penales y la pronta detención de los probables autores o partícipes del delito. Implica esa libertad, compromiso y responsabilidad de cada policía, así como de la institución en el proceso penal acusatorio que constitucionalmente les impone la obligación, en principio, de traer al procedimiento cualesquier dato, elemento, vestigio, instrumento y objeto que esté relacionado directa o indirectamente con la ejecución del delito o sus autores. La posibilidad de que puedan verificarse y contrastarse con el material probatorio que posee el agente del Ministerio Público, e intentar su demostración por cualquier medio útil, conducente y lícito, susceptible de valorarse por las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia.

b) *Libertad para determinar, junto al agente del Ministerio Público, el modo de formación de la prueba*

La libertad para determinar el modo de formación se refiere a la posibilidad que tiene la policía de investigaciones de acceder y participar en la actividad probatoria, preliminar a aquella que seguirá el Ministerio Público en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos durante el proceso penal acusatorio. Lo anterior se logra realizando actos de investigación que conducen a la obtención de conocimiento probable o cierto que aportarán el análisis de evidencias, pruebas materiales, documentos, las entrevistas e interrogatorios de testigos, peritaciones, entre otros, e interviniendo decisivamente en su búsqueda, localización e incorporación a la carpeta de investigación, con la finalidad de integrarlos en su oportunidad a las audiencias preliminares o a la de debate de juicio oral. Esto, sin prescindir de la notificación oportuna tanto a la defensa técnica como al imputado, quien podrá oponerse aclarando posibles irregularidades y refutando el contenido de algunos medios de probar.

c) *Integración gradual de los medios de probar a la carpeta de investigación*

La integración gradual de los medios de prueba es una consecuencia necesaria e ineludible de la aplicación del principio de libertad de prueba, a partir de la facultad implícita de investigación que tiene la policía de investigaciones de acuerdo con la obligación constitucional compartida con el Ministerio Público conforme a lo previsto en el artículo 21 constitucional que claramente determina:

La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial.

De manera que todo dato o elemento de prueba tendente al esclarecimiento del delito deberá incorporarlo gradualmente a la carpeta de investigación en caso de encontrar alguna asociación o articulación con la forma, modo o lugar de su comisión, o respecto de los daños causados a las víctimas o los datos relacionados

con el probable autor o participe. En este caso quedan inmediatamente a disposición del Ministerio Público, excepto en aquellas situaciones que requieran de un plazo considerable para utilizarlos como medio que lleve a la aprehensión de otras evidencias físicas o racionales, que podrán complementar o completar los datos de prueba ya obtenidos por la institución policial durante la etapa de investigación. Toda la evidencia recabada durante la investigación preliminar o fase preparatoria en la actividad policial es acervo común del Ministerio Público, con la finalidad de impulsar el desarrollo del proceso penal acusatorio hasta llegar a la audiencia de debate de juicio oral, o bien, para la audiencia preliminar que permita la conclusión anticipada del proceso penal (acuerdos preparatorios, suspensión del proceso a prueba, sobreseimiento o procedimiento abreviado).

d) *Libertad de ponderación sobre los elementos de prueba, datos o evidencias que trasladará al conocimiento de la autoridad judicial a través del impulso procesal del fiscal o Ministerio Público*

Con todo, el principio de libertad de prueba implica una libre apreciación o ponderación sobre el valor que tiene para producir convicción. En un Estado de derecho este principio está unido indisolublemente al de su licitud y al de su libre valoración. Solo puede valorarse libremente la prueba cuando se haya obtenido libre y lícitamente, con la característica de la integridad de un buen gobierno y sin menoscabo a las normas del procedimiento. Esta actitud intelectual no es ajena a la actividad policial, que en su oportunidad tendrá que hacer una ponderación de los elementos de prueba recolectados durante el procedimiento penal, con el objeto de decidir si son idóneos, verosímiles, suficientes para influir en la convicción del juez de garantía o de juicio oral, quien será el que determine sobre la culpabilidad o inocencia de alguna persona sometida a un enjuiciamiento penal.

La libre valoración de la prueba también es una acción que involucra la actividad de la policía de investigaciones cuando de-

fine si con los elementos de prueba obtenidos tiene suficiente material para lograr o no una condena. Por lo tanto, el policía debiera llevar a cabo un ejercicio intelectual en el que otorgue a cada uno de los elementos de prueba que recolectó el valor que considere adecuado en la formación de su convencimiento, explicando las buenas razones y argumentos en relación con los hechos que prueban. Así, verbigracia, el policía tiene absoluta libertad para estimar que un buen número de evidencias físicas le aporta mucha más convicción que varias entrevistas realizadas, porque contienen una diversidad de indicios que permiten arribar a conclusiones objetivas e imparciales; sin embargo, como disciplina intelectual, está obligado a explicarse en qué estriba la cualidad convincente de esas evidencias y qué las hace superiores, incluso a otros medios de prueba, para que en su oportunidad procesal el Ministerio Público las introduzca al proceso penal acusatorio, utilizando la serie de argumentación que le otorgan calidad probatoria a la policía en el esclarecimiento de los hechos constitutivos de delito.

Por otra parte, la policía de investigaciones, en la búsqueda y construcción de metodologías o técnicas forenses para la aprehensión de elementos de prueba, debe acatar las fases sustanciales del método técnico-científico policial que exige:

- 1) Formular una hipótesis lógica, creíble y jurídicamente suficiente que pueda probar.
- 2) Elaborar los objetivos estratégicos para la obtención de evidencias e información de calidad.
- 3) Utilizar técnicas de interrogatorio para hacer que los testigos, víctimas o imputado narren una historia convincente dentro de la entrevista policial.
- 4) Plantear una visión de lo sucedido al fiscal y la refutación probable que tendrán en el juicio oral sus indicios.
- 5) Elaborar un alegato de conclusión y demostración de la hipótesis inicialmente planteada, para exponerla en la audiencia de juicio oral.

De esta manera logrará la consolidación y administración de las fuentes de prueba que habrán de emplearse en el juicio oral por el agente del Ministerio Público. Consecuentemente, el rol de la policía de investigaciones en la producción de las fuentes de prueba en el modelo acusatorio tiene especial significación. Empero, el desarrollo de sus funciones en la etapa de investigación requiere un esquema de colaboración y coordinación con el Ministerio Público; que los policías ejecuten sin la inducción de este sus tareas de investigación, es decir, en forma autónoma e independiente, siempre bajo la dirección y responsabilidad del Ministerio Público, de acuerdo con sus instrucciones verbales o escritas, que deben documentarse en un registro informático que permita la evaluación de la actividad de ambos.

La dirección de la investigación a cargo del Ministerio Público puede traducirse en una conducción jurídica de los actos relacionados con la producción de las fuentes de prueba; el desahogo de los medios de probar; en su oportunidad, la decisión de cuáles elementos de prueba o datos aportados por la policía trasladará al proceso penal acusatorio en cada una de las etapas de investigación judicializada, intermedia y, finalmente, la etapa de juicio oral. En esta dirección o conducción jurídica de la investigación habrán de plantearse objetivos estratégicos dirigidos a lograr un seguro éxito en el juicio oral (ordinario o abreviado). La policía de investigaciones en la realización de los objetivos hace una aportación relevante en torno a la cantidad y, sobre todo, la calidad de los actos de investigación autónomos que pueda realizar, de acuerdo con las normas procesales y conforme a la modernidad de sus métodos o tecnologías de investigación forense.

Los actos de investigación autónomos que contemplen los códigos procesales de corte acusatorio deben orientarse hacia aquellas facultades que tiene la policía y que puede ejercer de forma inmediata sin mayor trámite, que no requieran ser calificadas por algún miembro de la institución policial, mucho menos por los agentes del Ministerio Público, debido a razones de convenien-



cia, procedencia u oportunidad de la fuente de prueba que busca fijarse.

Contraria a esta facultad, en este proceso de obtención de elementos de prueba, están los actos de investigación que serán ordenados por el Ministerio Público, particularmente aquellas órdenes por escrito para ejecutar aprehensiones, cateos y aseguramientos. En algunas situaciones, órdenes verbales para llevar a cabo diligencias de recolección de información o de evidencias físicas, o bien, el acompañamiento a víctimas en cualquier tipo de diligencia para proteger su integridad física y psicológica; además, el seguimiento a determinadas medidas cautelares por orden del juez de control o del tribunal de juicio oral.

Consideramos que las facultades autónomas del policía en el sistema penal acusatorio mexicano enunciativamente serían las siguientes: intervenir en los primeros momentos y horas después de la consumación del delito en la búsqueda de elementos de prueba o datos para la comprobación de lo ocurrido, en síntesis, la función de investigación de los delitos. Asimismo, llevar a cabo actividades de investigación inmediatamente que se presenten muertes, robos, lesiones, daños, entre otros delitos, que sean consumados o en grado de tentativa en la vía pública; en sitios y lugares relacionados con la obtención de evidencias físicas o elementos de prueba, colaborar en el trabajo de la protección, fijación y levantamiento de la escena del crimen o el sitio o lugar del hallazgo; la oportuna detención de sospechosos o imputados en el proceso de flagrancia; en consecuencia, el registro de la detención en pantallas electrónicas (transparencia y rendición de cuentas).

Por otro lado, en busca de elementos probatorios, la entrada y registro en lugares públicos o cerrados, en el que se esté cometiendo un delito; por lo tanto, la recolección y traslado al laboratorio de ciencia forense de las evidencias localizadas en escenas asociativas. Dentro de las actuaciones policiales que no requieren orden de cooperación o colaboración solicitada por el agente del Ministerio Público, se encuentran también aquellas

relacionadas con la atención y asistencia integral a las víctimas del delito; cualquier policía de investigaciones estará obligado a prestar auxilio a la víctima, realizar la detención del sospechoso o probable imputado en el sitio del suceso, o momentos después de ocurrido en algún lugar contiguo; llevar a cabo la práctica del registro de vestimenta, equipaje y de la persona de aquel; el resguardo del lugar y la recepción de las denuncias ciudadanas o de informantes en torno al caso con el objeto de analizar y procesar su información haciendo entrega del resultado al agente del Ministerio Público.

Cuando tenga evidencia suficiente debe efectuar el control de identidad de personas relacionadas con la posible comisión de delitos, el registro de sus vestimentas y demás características; además, informar de sus derechos al detenido; entrar y registrar lugares cerrados donde existan vestigios o indicios de que se está cometiendo un delito; identificar a testigos y recibir sus entrevistas voluntarias; en su caso, realizar la entrevista de un probable sospechoso.

## CAPÍTULO SEXTO

### PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTAS POLICIALES

#### ACTUACIONES PROCESALES DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIONES

La eficiencia de las instituciones policiales radica en operar con un sistema de organización y administración que contemple herramientas o instrumentos de cómo llevar a cabo sus diversas actividades que deriven de la función de investigación del delito. Entre estas herramientas de trabajo se encuentran los protocolos de investigación policial y las actas de policía que concentran información relacionada con los órganos de prueba o los elementos probatorios derivados de evidencias físicas o biológicas.

Este sistema dará certeza al contenido de los actos procesales que lleve a cabo cada policía; permitirá la integración sistemática y permanente de un esquema de inteligencia policial; evitará se presenten casos de impunidad que ahora son recurrentes, y será probable que por fin disminuyan los espacios de corrupción. Otra de las ventajas estriba en que abre la posibilidad de la transparencia y rendición de cuentas en las instituciones policiales, lo que traerá como secuela la posibilidad de sancionar las conductas omisas o negligentes de aquellos policías de nulo o escaso profesionalismo, detectando con toda oportunidad las fallas, los errores voluntarios e involuntarios que permitan reasignar el caso y evitar la dilación procesal.

La construcción de un modelo policial, en el contexto del procedimiento penal acusatorio, implica la aceptación de establecer criterios uniformes y objetivos para la operación diaria de cada

policía de investigaciones. Este modelo debe partir de la documentación de información de los actos primarios y sustanciales de la policía investigativa que pueden llevarse a cabo en actas policiales, sin olvidar que la concentración más amplia de la información tiene que documentarse en los protocolos de investigación policial.

Concentrar la información de las actas policiales coadyuva a la mejor comprensión de las tareas diarias de la policía de investigaciones y de las variantes que deben aplicar en determinados delitos que requieren de tratamientos más complejos o sofisticados para su debido esclarecimiento y con la finalidad de llevar a cabo la detención de los autores o partícipes.

El nuevo sistema penal acusatorio de oralidad predominante se caracteriza por establecer reglas procesales dirigidas a la policía de investigación con el interés prioritario de que proporcione auxilio y protección a las víctimas del delito. La idea de esta intervención policial oportuna menguará, en la mayoría de los casos, el *shock* postraumático que padece el sujeto pasivo del delito. La afectación que el delito, como fenómeno social, tiene en los familiares de la víctima y en ella misma, son efectos que el policía debe paliar con la mayor sensibilidad posible. Además de orientar sus esfuerzos al esclarecimiento del hecho, sin el acompañamiento de la víctima o con el acompañamiento de esta, también le conviene hacer una ponderación de las ventajas o desventajas que conlleva la presencia de la víctima en determinadas acciones policiales que requieren de la aportación de información que solamente la víctima, sus familiares o allegados poseen, para el avance más rápido y efectivo de los procedimientos de indagación.

Cada policía, en este modelo acusatorio, debe haber recibido capacitación y entrenamiento para la asistencia y protección a las víctimas directas e indirectas del delito, así como herramientas intelectuales que les permitan convencer a estas la utilidad de que proporcionen a la policía la información sensible del caso y de su vivencia, sin llegar, en ningún caso, a provocar la revicti-

mización por sus agresores, o bien, la recurrente victimización institucional que en ocasiones emerge sin que el policía tenga conciencia de que la está llevando a cabo.

Por lo tanto, las actas de policía que registran estos aspectos garantizan sin duda un eficiente sistema de organización y administración policial, el que comprende el manejo sistémico de la información a través del registro de las actas policiales. Debe ponerse especial énfasis en la asistencia y protección a las víctimas del delito y sus familiares en determinados casos. Las actas, además, deben contener la información del auxilio y protección brindado a víctimas, testigos u otros intervinientes en el procedimiento penal acusatorio; no solamente porque es un deber jurídico derivado del derecho internacional de los derechos humanos, elevado en nuestro país a rango constitucional, sino porque constituye el derecho natural de acceso a la justicia. El trato digno a las víctimas del delito también brinda la oportunidad al instituto policial de allegarse de una fuente inagotable de información. Aunado a la circunstancia de que la eficacia y eficiencia de la actividad policial redundará en la futura confianza de las víctimas y ciudadanos hacia la actuación del policía.

Son objeto prioritario de registro en actas policiales y requieren de oportunidad e inmediatez en su incorporación al sistema de administración policial: 1) las actas de policía encaminadas al registro de denuncias de hechos delictivos o presuntamente delictivos; 2) el registro en las actas de los pormenores de la escena del crimen o del sitio donde se pudo cometer un hecho con algunas de estas características; 3) las actas relacionadas con la información de los objetos, instrumentos y lugares asociados al sitio en el que fue cometido el delito; 4) las actas que informan del auxilio brindado a víctimas, testigos u otros intervinientes en el procedimiento penal acusatorio; 5) las actas policiales que obtienen los datos o elementos de prueba proporcionados por víctimas, testigos y probable imputado; 6) las actas policiales en las que se obtienen documentos públicos o privados con su respectiva cadena de custodia. De esta forma, se podrían enlistar toda

clase de actas policiales relacionadas con el quehacer diario de la policía de investigaciones que integrarían un sistema de administración policial que concentre, articule y asocie los elementos de prueba obtenidos en cada caso penal.

1. *Actas de policía relacionadas con la denuncia de hechos y la escena del crimen*

Las razones que señalamos en los párrafos anteriores son motivo bastante para considerar que la denuncia deberá registrarse cuando llegue por conducto de los miembros de la institución policial que es el comportamiento cotidiano observado en los ciudadanos. El acta policial se denomina “acta de aviso de hechos presuntamente delictivos”. Conviene puntualizar que la información puede obtenerse por cualquier medio, particularmente por la comunicación directa que hacen las personas en el lugar donde se ha cometido el delito, en algún sitio cercano o bien en las instalaciones de la policía a donde acuden los ciudadanos a reportar el daño o puesta en peligro de un bien jurídico que han observado a través de sus sentidos o del que tuvieron conocimiento en forma indirecta.

En su corresponsabilidad de investigación del delito con el Ministerio Público, la policía está obligada a indagar sobre hechos que revistan esa naturaleza delictiva y de los cuales se enteraron por cualquier medio, incluyendo los radiofónicos, televisivos y electrónicos, siempre y cuando hayan verificado la información que los conduce a establecer una hipótesis objetiva y seria de la probable realización de algún delito que el Estado tiene la obligación constitucional de investigar una vez conocidos los hechos.

Recolectada la información que sea posible sobre el hecho delictivo, se procederá a documentarla en el registro sistematizado de los protocolos de investigación y de las actas policiales concentrados en un sistema de gestión organizacional de la información. La policía de investigación debe recopilar información sobre los hechos presuntamente delictivos y llevar un regis-

tro general, que pueda consultarse en tiempo real a través de las tecnologías y sistemas informáticos. La parte sustancial de este registro, además de ser objeto de análisis e interpretación por equipos de expertos analistas de la institución policial, habrá de compartirse con los agentes del Ministerio Público. Si está plenamente claro que los hechos son constitutivos de delito, se abrirá una carpeta de investigación para iniciar el procedimiento penal acusatorio. Por su lado, la policía abrirá una carpeta de investigación policial que concentre los actos de prueba obtenidos durante sus labores de indagación del delito.

El desarrollo de esas herramientas debe producir los lineamientos generales dirigidos exclusivamente a obtener información destinada a llevar a cabo una interpretación, verificación, procesamiento y análisis de aquella para desagregar datos o elementos de prueba útiles en la acreditación de los elementos del delito o la autoría y participación en su comisión. El resultado conduce a tener como punto de partida una hipótesis de trabajo que constituye finalmente la construcción de la teoría del caso por parte del agente del Ministerio Público. Otros propósitos del registro de información por la policía, en una carpeta por separado que abarque los temas asociados, serán para establecer un sistema de inteligencia enfocado a fortalecer la seguridad comunitaria y la seguridad pública.

## *2. Actas de policía que registran el control y la preservación de la escena del crimen*

El acta policial que documenta la protección, fijación, levantamiento y suministro de evidencias al laboratorio de criminalística, se traduce en un acto procesal fundamental para localizar, procesar y analizar evidencias —información de calidad—. El resultado del trabajo coordinado entre policías y la colaboración de los peritos en criminalística de laboratorio o de campo comprende un ejercicio fundamental en el éxito de cualquier investigación criminal. Hemos insistido en que la investigación de los

delitos debe basarse en los conocimientos que aporta la criminalística y no en la tradicional manera empírica de indagarlo, es decir, utilizando un enfoque estrictamente policíaco. El empleo responsable de los laboratorios de criminalística por parte de las instituciones policiales, traerá como resultado investigaciones eficaces, que garanticen los derechos fundamentales de los ataques del poder público y disminuyan en forma considerable la impunidad.

Debemos destacar en este punto que en el modelo inquisitivo, vigente aún en el sistema federal y en la mayoría de las entidades federativas, resulta escasa o están ausentes las metodologías criminalísticas en la investigación policial. El resultado del trabajo de la policía de investigaciones aparece generalmente cuestionado por el aberrante uso de la tortura, la siembra de “evidencia” y la creación de los denominados “chivos expiatorios”. En este proceso histórico de transición de un sistema penal inquisitivo al sistema democrático de corte acusatorio y adversarial, la investigación del delito basada en las aportaciones de la criminalística terminará en nuestro país con la historia de corrupción policial que generan la equivocación y el empirismo sin sustento en la investigación penal, con graves repercusiones en la violación a los derechos humanos.

Los miembros de las instituciones policiales deben capacitarse y recibir entrenamiento en el uso de las disciplinas, métodos y técnicas empleadas por la criminalística de campo y de laboratorio. Esta, como disciplina científica, esencial e ineludible en la investigación de los delitos, se traduce en un instrumento más seguro y confiable en la producción de la prueba indiciaria. La modernidad de su tecnología y la revisión de sus métodos muestran su valor en el esclarecimiento de casos penales. Sin duda, los procesos de enjuiciamiento penal, objeto de cuestionamientos y polémica mediática en otros países, han sido resueltos en su mayoría por la aplicación de la criminalística, en razón de que la actividad pericial suministra información sensible y de calidad a la policía, a los fiscales, a los jueces y a los magistrados, median-



te los informes periciales o en el desahogo del dictamen pericial. De ahí la importancia que revisten los laboratorios de criminalística y ciencias forenses en las tareas de investigación policial.

El conocimiento criminalístico de los hechos tiene carácter esencial desde el inicio de las primeras indagaciones que realiza la policía en torno al delito cometido, a los protagonistas, al lugar de los hechos y a las evidencias localizadas en el sitio o en un lugar asociado. Recurrir a obtener la confesión mediante violencia policial (tortura) y ahora militar, refleja el atraso policial que México tiene en las investigaciones criminales y la ausencia de la criminalística durante décadas, que ha provocado la falta de procesamiento, análisis e interpretación de las evidencias levantadas mediante técnicas específicas por policías y peritos en la escena del crimen o en el lugar de los hechos. Asimismo, pone de relieve la escasa investigación profesional y técnica que se produce en nuestro país por las instituciones policiales.

Tienen carácter prioritario las políticas públicas tendentes a la construcción de infraestructura que permita la implementación de laboratorios de criminalística y ciencias forenses. La falta de estos instrumentos, derivados de la ciencia y tecnología aplicada en la investigación penal, hace naufragar y cuestiona los resultados del sistema penal, en detrimento del derecho de acceso a la justicia de las víctimas. En cambio, produce un conocimiento reflexivo para el desahogo de la prueba durante la audiencia de debate de juicio oral, a través de las metodologías y técnicas forenses que permiten despersonalizar la investigación del trabajo de los policías; por lo tanto, garantiza objetividad e imparcialidad en el conocimiento probable o cierto del delito y de la culpabilidad del autor o partícipe.

La idea de analizar aspectos científicos en la investigación policial no es fácil. Sin embargo, los fundamentos que sustentan los estudios criminalísticos son tópicos de un valor inestimable en el sistema penal acusatorio, porque proporcionan a través del adecuado análisis de la evidencia, certeza y seguridad a los ciudadanos en las decisiones de los jueces de garantía o del tribunal de

juicio oral. En verdad, la labor del policía, el fiscal y el abogado penalista requiere cada día con más fuerza que sean capaces de entender el lenguaje de la ciencia para producir ante los tribunales de juicio oral las pruebas técnicas y científicas que garanticen la preservación del Estado social y democrático de derecho.

La preservación de la escena del crimen o del sitio donde se cometió un hecho presuntamente delictivo exige el conocimiento especializado de la criminalística y sus disciplinas denominadas “ciencias forenses”. Por esta razón, los integrantes de las instituciones policiales están obligados a conocer integralmente los elementos básicos de esta disciplina, que les permita llevar a cabo con eficiencia y eficacia la actividad de obtener elementos de prueba que conduzcan al esclarecimiento de los hechos constitutivos de delito.

Desde luego que la afirmación anterior obliga necesariamente a preguntarse desde el enfoque de la investigación penal y el proceso penal acusatorio lo siguiente: ¿qué debemos entender por criminalística? En términos sencillos es la disciplina que agrupa conocimiento interdisciplinario dirigido al procesamiento, análisis e interpretación de las evidencias, que servirán de base para la decisión en los casos que se presentan a los órganos encargados de procurar y administrar justicia.

En la función investigativa que desarrolla la policía, una de las actividades de mayor relevancia centrada en la obtención y calidad de la prueba se expresa en el manejo y preservación del lugar de los hechos. La manera de llegar a encontrar y poseer información de calidad respecto de los elementos del delito y la autoría o participación de una o varias personas, radica en la aplicación de metodologías cuya finalidad es la conservación de todas las evidencias localizadas en el sitio del suceso o del hallazgo.

Cobra importancia en el sistema acusatorio el manejo y preservación del lugar de los hechos por parte de la policía de investigaciones. Las evidencias encontradas por los investigadores-forenses serán objeto de procesamiento, análisis e interpretación a efecto de que proporcionen la información objetiva y verificable

en relación con el delito consumado: la forma y modo de ejecución, sus particularidades en torno a las expresiones patológicas del autor y las manifestaciones de reticencia o defensa de la víctima en el desenlace del suceso ilícito. Estos aspectos se localizan en el entorno donde ocurrió el hecho, a través de los testigos mudos inmersos en las evidencias físicas o biológicas recolectadas por la policía y las que en su momento procesal —juicio oral— habrán de mostrarse a detalle ante un juez que observe su contenido, realice una valoración y decida sobre la calidad de la evidencia en la construcción del razonamiento forense que llevará a la decisión.

En la búsqueda y levantamiento de evidencias, sean físicas o biológicas, el policía investigador debe aplicar algunos métodos que le permitan agotar completamente una escena del crimen y documentará en un acta policial cualquier detalle que considere importante para la conocer la identidad del autor del delito, su *modus operandi* o la relación con la víctima, algún testigo o partícipe del suceso delictivo. De acuerdo con el tipo de suceso delictivo, la criminalística, con sus aportaciones, sugiere la aplicación de los llamados métodos de rastreo de indicios. Estos procedimientos auxilian al policía-investigador a ubicar los diversos “indicios” o evidencias en el lugar de los hechos con la finalidad de realizar el estudio preciso de su producción. Existen ciertos tipos de evidencia que no están tan expuestos a la vista; por lo tanto, amerita una investigación especial, cuidadosa, laboriosa y organizada.

La falta de organización en la búsqueda de evidencias puede producir pérdida de tiempo para la policía —en la detención del probable imputado— cuando la escena del crimen no recibe un tratamiento metodológico. Cualquier actividad de esta naturaleza, de acuerdo con los métodos empleados, requiere de la elaboración de un acta policial que registre las evidencias, los detalles y los rasgos sustanciales encontrados en el sitio. Olvidar este registro provoca, como ocurre en el modelo tradicional de justicia, que la policía no responda de sus actos y que ocasione una dis-

persión de las acciones policiales en la búsqueda de evidencias, cuyo resultado en el modelo acusatorio será de interés trascendente para el juicio oral. Los métodos de rastreo de indicios o búsqueda y localización de evidencias, empleados en el quehacer cotidiano de la investigación forense mexicana y, de acuerdo a la información del maestro Juventino Montiel Sosa,<sup>20</sup> se describen a continuación:

- A. Métodos de rastreo de indicios. Permite en el lugar donde se ha cometido el hecho presuntamente delictivo aplicar el procedimiento ordenado de búsqueda “punto a punto”. Este método tiene cierto orden en su desarrollo y resulta efectivo cuando el policía investigador tiene un perfil profesional muy sistemático. En cambio, si esta cualidad no está presente en el investigador, pueden generarse omisiones en la búsqueda de las evidencias. Sin embargo, este método es el más ordinario en la práctica forense de peritos, policías y agentes del Ministerio Público; suele emplearse en lugares pequeños. Comprende el desplazamiento del investigador de un lugar a otro de manera exhaustiva, pero sin un plan de investigación trazado en relación al sitio que se está examinando.
- B. El método de búsqueda por sector o cuadrante. En esta hipótesis debe existir previamente una planeación para revisar y examinar la escena del crimen o lugar del suceso presuntamente delictivo. La utilidad de este método radica en que cada policía investigador registre determinada zona hasta agotar el sitio, pero además que realice el levantamiento, embalaje y etiquetado de las evidencias. O bien, cuando la escena cuantitativamente representa una oportunidad por el número de evidencias encontradas, varios investigadores podrán examinar determinado número de zonas en forma simultánea. Con la ineludible obligación de realizar el

<sup>20</sup> Montiel Sosa, Juventino, *Criminalística*, 2a. ed., México, Limusa, 2011, t. 1, p. 65.

levantamiento, embalaje y etiquetado de las evidencias en forma conjunta. Todos se responsabilizarán de estas tareas de conservación de las evidencias hasta su traslado y depósito en lugar seguro. Cuando la investigación se desarrolla en zonas o espacios muy amplios es recomendable utilizar esta metodología.

Cuando se trata de una zona grande, para su registro completo, exhaustivo y preciso, resulta mejor segmentarla. Una vez realizados los trazos para su examen, debemos llevar a cabo la distribución de policías investigadores y personal de servicios periciales en la estrategia metódica de búsqueda de evidencias en las zonas de revisión que sean de interés para la investigación del o los delitos cometidos.

- C. Método de búsqueda concéntrica o en espiral. El investigador selecciona un punto focal y se desplaza en forma de espiral cada vez más amplia. Abarca así todos los puntos del área inspeccionada. La dirección puede ser como en las manecillas del reloj.
- D. Método de la rueda (método radial). Cuando la zona es circular, esta clase de procedimiento será empleado por los policías de investigación, quienes se desplazarán a lo largo de los rayos de la rueda. El problema: la zona que debe ser investigada por cada investigador se vuelve cada vez más grande a medida que se desplaza del centro hacia afuera.
- E. Método de búsqueda por franjas o líneas. Será el más recomendable para que lo utilice la policía de investigación cuando la finalidad sea investigar escenas del crimen o hechos probablemente delictivos en los que las evidencias pueden localizarse en superficies grandes o espacios abiertos. En este supuesto, la inspección del sitio donde ocurrió algún o algunos delitos debe realizarse por varios investigadores. Para evitar que se revisen las mismas áreas, deberán de alinearse y desplazarse, examinando las franjas paralelas del terreno. Este tipo de método se utiliza cuando existe la presunción de que se han tirado armas, drogas, artículos

robados, etcétera, en distintos lugares pero en una misma dirección.

- F. Método de búsqueda por cuadrícula o rejillas. Una vez finalizado el aseguramiento del lugar del suceso delictivo, se procederá a investigar a partir de la planificación esquemática del lugar en franjas cruzadas. El desplazamiento de los policías de investigación se llevarán a cabo a lo largo de un eje. Las primeras franjas se cubrirán de sur a norte y las segundas de este a oeste.

Cualquiera que sea el método seleccionado por la policía de investigaciones, a su llegada a la escena del crimen deberá fijarse como objetivo estratégico la localización de la cantidad máxima de evidencias significativas en el menor tiempo posible, de tal modo que permita el procesamiento y análisis oportuno para el hallazgo de pistas que conduzcan a la detención del probable imputado. Interesa especialmente mantener la eficiencia del desplazamiento o movimiento de los policías y peritos, basada en la atención por preservar, sin alteración alguna, la integridad de las evidencias encontradas.

El trabajo policial en el sitio del suceso está circunscrito permanentemente a la búsqueda de evidencias halladas de distintas formas, en diferentes estados. Cada una por sí sola puede constituirse en una prueba irrefutable en el juicio oral. De ahí la importancia que tiene su hallazgo. Los procedimientos sistemáticos de la operación policial deben focalizarse en el desarrollo de la metodología que conduzca a fijar y preservar la escena del lugar de los hechos como lo apuntaremos en seguida.

*Metodología general para la preservación del lugar de los hechos.* Una vez realizada la descripción general de la importancia que tiene la criminalística en el trabajo de investigación policial, conviene subrayar que su estudio lleva intrínsecamente a la aplicación de la metodología general de investigación en el lugar de los hechos, en la que se examinan las reglas que

integran el proceso de conservación del lugar y las evidencias localizadas.

Esta metodología específica abarca diversas fases que garantizan la calidad de la evidencia en torno al delito, la víctima o el autor o partícipe del hecho, desde su consumación hasta los efectos coetáneos o posteriores que produce en el mundo exterior. Las evidencias son la materia prima que localiza la policía o los peritos, las cuales permiten replantear cómo se produjo el hecho y proporcionan respuestas a otras interrogantes criminalísticas que en este proceso deben responderse: qué, cómo, cuándo, dónde, quién, por qué, entre otras preguntas que debe plantearse el policía investigador.

El policía de investigación tendrá una idea precisa sobre el significado de la escena del crimen o del lugar de los hechos. Este entendido como el sitio en el cual se cometió un hecho que puede ser constitutivo de delito. La investigación criminalística tiene su punto de partida en el lugar del suceso, por lo tanto, cuando no se recogen y estudian las evidencias en el escenario del crimen, toda investigación resulta más difícil. La temporalidad en su análisis implica la posible alteración o pérdida de las evidencias dejadas por el autor o partícipe del delito o la víctima.

Una de las razones más importantes de la etapa primaria del policía consiste precisamente, como imperativo legal, en la protección, en principio, “del lugar de los hechos”, a fin de que los integrantes del Ministerio Público y los miembros de las instituciones policiales encuentren cualquier evidencia en su forma original, es decir, tal como lo dejó el autor o partícipe del hecho o la víctima. La policía tendrá siempre presente que el probable imputado, en su paso por el escenario del crimen, deja evidencias de su comportamiento delictivo; además, suele llevarse generalmente otras o vestigios que corresponden a la víctima, existiendo un intercambio natural o planeado de estos. Conforme al principio de intercambio y correspondencia de evidencias del que participan el autor, la víctima y los elementos que aporta el lugar de los hechos.

*El control de la escena del crimen por la policía.* La queja constante en la etapa de investigación en el procedimiento penal, derivado de un sistema penal inquisitivo, está dirigida a la falta de control inicial de la escena del crimen. ¿Por qué se presenta este problema? La policía utiliza la confesión como eje fundamental de su trabajo. Resultado: la carencia de una escena del crimen bien controlada y analizada se convierte en ausencia de material para ser procesado científicamente en los laboratorios e incorporado a un sistema de inteligencia policial, pero particularmente implica la renuncia a obtener algún elemento de prueba que contribuya al acercamiento de la verdad de lo que ocurrió en la comisión de un delito. Impide entonces el pronunciamiento de decisiones judiciales justas y legítimas ante la ausencia de prueba material o insuficiencia de estas.

Las características y deficiencias estructurales en las que opera la policía de investigaciones en el sistema penal inquisitivo, y la escasa o casi nula calidad de las evidencias que llegan a obtener, juegan un papel central ahora en la eficacia que puede lograr en los resultados el nuevo modelo de justicia penal: en materia de control de la escena del crimen, en la calidad y organización de la información policial; de ahí que el control sistemático y oportuno de la escena del crimen se corresponde con la calidad de las evidencias.

Estas razones conducen indefectiblemente a elaborar un protocolo que registre desde la notificación hasta la llegada de la policía de investigación a la escena del suceso delictivo. Lo anterior debido a que la nueva cultura policial debe construirse a partir del control que obliga a planear, organizar, ejecutar y controlar la información derivada del lugar de los hechos; en el sistema penal acusatorio exige: perseverancia en la modificación de los hábitos policiales, empleo de protocolos, actitud perseverante y respetuosa de las normas, en la creación de los nuevos mecanismos de operación policial; una auditoría y monitoreo preciso de la actividad de cada policía en la escena del crimen, sostenida en indicadores de buenas prácticas en el desarrollo de las actividades primarias en este sitio.



Como etapas fundamentales que garantizan la preservación de la escena del crimen o del hecho donde se cometió presuntamente un delito, en la criminalística denominada de campo suelen desarrollarse, en forma sistemática y cronológica, las siguientes fases: la protección del lugar, la observación, la fijación y colección de las evidencias, hasta concluir con el suministro de ellas a los laboratorios de criminalística y ciencias forenses. Las actividades de la investigación policial estarán relacionadas con el procesamiento de levantamiento e interpretación de la evidencia, a partir de las acciones periciales de los técnicos y científicos forenses.

*A. El proceso de protección y preservación del sitio a investigar*

Consiste en no alterar el lugar de los hechos a fin de conservar todos y cada uno de los indicios existentes, con lo cual es posible llegar a determinar la verdad histórica de cómo sucedió el presunto hecho delictuoso. De acuerdo con la reforma constitucional de 2008, la corresponsabilidad del Ministerio Público con la policía lleva a considerar que los integrantes de esta institución, que generalmente tienen el primer contacto con las consecuencias dejadas por un delito, los convierte en autoridades responsables.

Por lo tanto, como primer contacto en el lugar, su función policial será precisamente la de no permitir alguna alteración por mínima que sea del sitio o de las evidencias, no tocando o cambiando de posición algún objeto o el cadáver, asimismo, prohibiendo el paso de toda persona ajena. En su momento, coadyuvar con las autoridades y especialistas que intervendrán en la investigación criminalística, la cual suele iniciar con el trabajo policial de preservación del lugar o de las evidencias asociativas que puedan ser objeto de alteración o pérdida.

En estas actividades primarias, la policía de investigación, al arribar a la escena del crimen, es importante que tenga presente ciertas normas orientadoras que le permitan el logro de una in-

vestigación criminalística objetiva e imparcial. Las normas elementales que un policía debe acatar son las siguientes:

- a) Procurará evitar las denominadas “ideas preconcebidas” cuando observe el sitio del suceso. Eliminando cualquier idea asociativa sin fundamento, por mucho que reproduzca los elementos de otra escena del crimen, el policía investigador tendrá presente que este nuevo sitio donde ocurrió probablemente un delito será completamente distinto. Ningún fenómeno de la naturaleza se produce con elementos idénticos, ya que existen componentes de tiempo, modo, lugar, objetos, comportamientos que lo harán único e irrepetible. De tal forma que, por mucha que sea la experiencia de un policía, es conveniente que inicie la investigación del lugar de los hechos con toda su experiencia y conocimiento realizando un ejercicio racional único e irrepetible en este caso. En ocasiones, se presentan algunas escenas del delito en las que su autor o partícipes reproducen algunos aspectos de otros sucesos delictivos con la finalidad de provocar el error policial para beneficiarse, ya que dicho error garantiza el desvío de las investigaciones y la pérdida de tiempo e incluso de evidencias; esto brinda una ventaja importante a los responsables del delito que tratan de llevar a cabo el ocultamiento del suceso, que tiene como finalidad generar lo que no existe: “el crimen perfecto”. Lo que se presenta en estos casos son los errores policiales, los cuales al replantearse la investigación son advertidos por quienes los cometieron o por compañeros que objetivamente lanzan una mirada objetiva a los resultados obtenidos.
- b) En un sitio en el que ocurrió un delito o un hecho que debe investigar la policía y los integrantes del Ministerio Público en corresponsabilidad, como lo ordena la norma constitucional, es importante que quienes acudan al lugar lleven la actitud de observar como norma de comportamiento que en la escena debe haber un número reducido de personas; es decir, únicamente aquellas que sean necesarias para el exa-

men, levantamiento y traslado de evidencias a los laboratorios o salas de conservación. Cuando se presenta un número considerable de individuos dificultan y hacen más compleja la actividad criminalística del policía y los técnicos o científicos forenses que trabajan en el sitio. La tarea de preservar la escena del crimen cumple con fases sistematizadas que desarrollan solamente los expertos autorizados. Por otro lado, existe propensión a que personal no autorizado en el sitio contamine o altere el orden que siempre se privilegia en las distintas inspecciones a que se somete la escena del crimen o un sitio en el que ha realizado un hecho que la policía y el Ministerio Público están obligados a investigar en corresponsabilidad (por ejemplo, el suicidio o hechos fortuitos que dañan bienes fundamentales de las personas).

- c) En un sitio de esta naturaleza, la policía de investigación y sus auxiliares técnicos o científicos forenses, no deben someterse a ningún “apresuramiento” en el levantamiento de las evidencias, aunque exista mucha presión social y mediática. El carácter y personalidad de investigador policial tiene que ser lo suficientemente fuerte y contundente, esto aunado a la experiencia, que le permita sostener su actividad investigativa en forma acuciosa y completa, al igual que el resto del equipo responsable de la investigación. A nuestro juicio, las habilidades y destrezas en la investigación criminal, en esta etapa de presión mediática y social, son sometidas a vencer los retos propios de la naturaleza humana. La destreza y sagacidad del policía de investigaciones lo conducirá a obtener, con el tiempo necesario, la evidencia que fue dejada en el sitio por el probable responsable o la víctima y que tendrá utilidad para el esclarecimiento de los hechos.

En nuestra opinión, las habilidades y destrezas no tienen por qué asociarse en la práctica forense a sinónimo de rapidez. Ya se han presentado en múltiples casos penales resultados desastrosos en la investigación penal. Han sucedido cuando peritos o poli-

cías, actuando con rapidez y atropellamiento en la realización de tareas que son indispensables para la preservación de la escena del suceso, con su acelerado comportamiento han provocado la alteración, destrucción y, en otros casos, la deformación de evidencias importantes. Esta rapidez innecesaria conduce inevitablemente a obtener un trabajo policial inicialmente mal orientado y que llevará al fracaso temporal de la investigación. Apresurarse a llevar a cabo el examen del lugar de los hechos, sin la medida y búsqueda tranquila de evidencias, debe quedarnos claro, cultiva la impunidad e impulsa la desconfianza ciudadana.

Las reglas o normas de comportamiento no son rígidas en las tareas criminalísticas del policía de investigaciones, por lo contrario, deben ser lo suficientemente flexibles. Los policías, técnicos y científicos forenses que auxilian tendrán presente que nadie tiene la última palabra: ni los médicos forenses, químicos o físicos forenses, tampoco los policías de investigación por muy experimentados que sean. La experiencia enseña que debe seguirse un orden para cada uno de los expertos que actúan en la preservación del lugar de los hechos y de su evidencia, desarrollando un trabajo de equipo sin imposición de ideas sobre lo sucedido. El resultado de su actuación objetiva e imparcial será revelado con éxito cuando cada quien haga su aportación a la investigación penal. A veces estas normas se quiebran, pero en beneficio del trabajo, en el sitio de suceso, ya sea por salvar la vida de una persona, proporcionar atención médica oportuna, preservar evidencias de inmediato por un fenómeno incontrolable o cualquier razón de peso que conduzca al quebrantamiento de las normas institucionales determinadas para el trabajo metódico y racionalmente sustentado en técnicas y procedimientos.

El conocimiento criminalístico permite que el policía y sus auxiliares cultiven el arte de llevar a cabo tareas con el propósito de “hacer hablar las evidencias” localizadas en la escena del crimen, a través de su procesamiento, análisis e interpretación. Otros autores, al referirse a este acto, han mencionado que la criminalística y sus actores harán hablar a los “testigos mudos” del

lugar del suceso. El trabajo policial es complejo porque examina a través de una mirada integral, los elementos que le permiten la reproducción de hechos pasados, con el propósito de que puedan juzgarse con los elementos de prueba preservados y contenidos en las evidencias localizadas por el policía y sus auxiliares.

La evidencia probatoria encontrada debe contrastarse en su momento procesal con el testimonio de víctimas y testigos, incluyendo la propia versión del probable autor o partícipes del hecho delictivo investigado, a efecto de saber si tienen o no confirmación las versiones de los protagonistas. La complejidad, además, radica en llevar a cabo acciones de investigación que les permitan la reconstrucción de los hechos solo con los elementos de prueba que se encuentren en el presente, que generalmente no serán todos lo que fueron utilizados en la ejecución y consumación del delito.

Proceso de descubrimiento de la evidencia. El éxito de una investigación penal depende de las observaciones y acciones iniciales de la policía que tiene el contacto primario con la escena del crimen y sus evidencias, las personas que observaron, víctimas y, en algunos casos de delito flagrante, con los probables imputados. El registro de todos estos datos en actas policiales constituye una herramienta básica para cualquier policía de investigaciones en el sistema penal acusatorio.

En este registro se debe anotar el auxilio que proporcionó a personas lesionadas y el examen realizado a personas aparentemente fallecidas; la forma como protegió con objetos idóneos ciertas salidas o aperturas críticas, o bien, áreas que podrían alterarse por el humo, granizo, lluvia, nieve o rayos directos del sol; en casos de extrema urgencia, las acciones que llevó a cabo para resguardar objetos de prueba. Debe evitar el desplazamiento hasta haber sido fijados y examinados.

No obstante, el acta policial habrá de mencionar estas acciones ordinarias y excepcionales que lleven a cabo los policías investigadores en el lugar donde ocurrió presuntamente un delito. Este tipo de actas policiales registrarán cuestiones de trascendencia vital para la buena marcha del procedimiento acusatorio, como

aquellas relacionadas con el arresto de sospechosos, la retención de testigos y la solicitud de ayuda.

La policía de investigación mexicana debe establecer, en consecuencia, un procedimiento de actuación del policía asignado para la coordinación de la diligencia. Dicha acción permite fortalecer el conocimiento de gestión en materia de planificación policial; un liderazgo racional del mando; la reingeniería de los procedimientos para la preservación de las evidencias; crear una innovación operativa, tecnológica y organizativa en la coordinación con otras instituciones policiales y el Ministerio Público y, finalmente, la aplicación de un protocolo único, que conduzca a la coordinación y colaboración en la protección y aseguramiento del lugar de los hechos.

Este protocolo único de entrega de la escena del crimen, cuando se presente la intervención de los cuerpos de seguridad pública, abordará con precisión las fases de entrega del acordonamiento o protección del lugar, del lugar del suceso y evidencia principal, así como de las evidencias asociativas, el nombre de quien hace la entrega de la escena del crimen y la identidad del policía de investigaciones que la recibe.

### *B. El proceso de la observación del lugar de los hechos*

La observación es una habilidad que se debe tener muy bien desarrollada con el sentido de la vista, apoyada en los otros sentidos. Consideramos que con la finalidad de que sea sustancial y provechosa esta fase de la investigación criminalística, debe llevarse a cabo en una mirada inicial por el policía, técnico o científico forense, en forma directa y macroscópicamente sobre el lugar de los hechos y sus evidencias materiales. De igual importancia, estos investigadores llevarán su mirada específica al uso de los aparatos tecnológicos que permitan atisbar desde un ángulo singular cada segmento del lugar del suceso o las evidencias.

Advertir la presencia de particularidades en las evidencias se debe a que el policía, técnico o científico forense utilizan y

ejercitan, en el lugar del suceso, los cuatro sentidos, poniendo alerta primeramente la vista, el olfato y el oído, dejando por último el sentido del tacto, el que en ocasiones suele utilizarse para efectuar una ordenada colección y manejo de las evidencias encontradas en el sitio del suceso después de que han sido fijadas. El sentido del gusto no se recomienda porque se traduce en una operación demasiada empírica y peligrosa que en muchos casos conlleva la alteración o pérdida de ciertas evidencias. Cuando se busca encontrar la naturaleza de algunas evidencias y sus efectos en el organismo, se recurre a las técnicas forenses del laboratorio para el análisis. En la fase de la observación del sitio del suceso que tiene interés criminalístico, se recomiendan algunas que dependen de las características del lugar: si es cerrado o abierto la sistemática de la observación variará considerablemente.

En nuestro concepto, el procedimiento de observación y análisis del lugar de los hechos permitirá superar la “práctica del trámite” e instalar la “práctica de la investigación policial” a partir de las acciones siguientes: *a)* construir la cadena de mando en el lugar del suceso; *b)* toma de decisiones oportunas para la protección del lugar; *c)* cooperación con los equipos de investigación (policías, peritos o agentes del Ministerio Público); *d)* aplicación de protocolos en la observación del sitio del suceso y su análisis, y registro de datos recolectados durante la observación y análisis de los hechos en el sistema de inteligencia policial.

### *C. El proceso de fijación en el lugar de los hechos*

El estudio de la escena del crimen requiere capacitación policial especializada, comprender los procedimientos básicos para la documentación y registro de cada una de las acciones llevadas a cabo en la revisión y análisis del lugar donde ocurrió presuntamente un delito. Es importante el registro de las razones o motivos del “porqué” de ciertas acciones en el registro de datos, evidencias o descripción objetiva respecto de los detalles empleados en la comisión de un crimen.

El éxito de la investigación es siempre función del intelecto y de la experiencia. El registro de esos datos y su consideración posterior en el análisis de evidencias o en la construcción de indicios concluyentes, resulta necesario para eliminar cualquier duda razonable que puede ocurrir en la confirmación de hipótesis criminalística del trabajo policial. En este sentido, el policía investigador debe desarrollar una hipótesis directriz, basada en la primera investigación de la escena (suposiciones razonadas en la forma en que se cometió el crimen y a la secuencia de los actos involucrados), la cual debe ser constantemente reevaluada con cada pista nueva que se descubra.

El método y las técnicas usadas deberán auxiliar en el conocimiento del lugar y los objetivos estratégicos planeados para la indagación del hecho presuntamente delictivo. De esta forma, el policía investigador tendrá una acumulación global de la información concerniente al sitio del suceso, la víctima, el agresor y terceras personas quizá intervinientes en los hechos.

Cada evidencia, cuyo contenido sea la información de calidad descrita, será producto de un periodo razonable de tiempo, de todas las herramientas metodológicas disponibles y de los instrumentos empleados para economizar y asegurar el desplazamiento a la sala de evidencias para su conservación, o bien, a los laboratorios de ciencias forenses en atención a que deberá aplicarse con la mayor precisión alguna técnica o método que auxilie en el procesamiento de la información.

#### *D. El proceso de fijación de la escena del crimen o del suceso*

Consiste en la aplicación por parte del policía, técnico o científico forense de las técnicas apropiadas que registren fielmente las características generales y particulares del lugar de los hechos y sus respectivas evidencias físicas o biológicas.

En el sistema penal acusatorio, las tareas de investigación criminalística en la escena del crimen o del suceso deben efectuarse por el policía, técnico o científico forense con la dirección o



conducción jurídica del Ministerio Público, empleando las siguientes técnicas: a) la descripción escrita, b) la fotografía forense, c) la planimetría forense y d) el moldeado.

Es imprescindible que las descripciones manuscritas, gráficas y moldes que se elaboren, ilustren con precisión y claridad, en cualquier momento, el lugar mismo de los hechos, sin que se exista la necesidad de regresar a fijarlo. La descripción debe ser cuidadosa y detalla, en forma general y particular, del escenario del suceso. Por su parte, la fotografía pone de relieve detalles y particularidades de las cosas o evidencias de interés criminalístico. En cambio, el dibujo forense, ya sea con el croquis simple o con la planimetría de Kenyeres, incorpora distancias entre una evidencia y otra. De igual forma, proyecta una vista general superior muy completa del lugar. El moldeado comprende la técnica que es útil para captar huellas negativas en el propio lugar, de pies calzados o descalzos, de neumáticos u otro tipo de instrumentos que tienen relevancia para la investigación penal.

#### *E. Proceso de levantamiento y traslado al laboratorio*

Entre las principales recomendaciones para levantar evidencias del lugar del suceso se establece la prioridad hacia aquellas evidencias que pueden ser producto de deterioro con el tiempo o los elementos discordantes en el medio ambiente. Cada circunstancia relativa a este tipo de decisiones tendrá que justificarse o explicarse en un acta policial por quienes llevan a cabo la investigación penal y toman en consideración las investigaciones técnicas, producto de los conocimientos criminológicos.

La cadena de custodia, al iniciarse en la escena del delito en donde se descubren, recaudan o encuentran los elementos materiales probatorios y la evidencia física, se rige con determinados principios técnicos y éticos.

El principio de control de todas las etapas desde la recolección o incorporación de las evidencias hasta su destino final, así como del actuar de los responsables de la custodia de estas. El

principio de preservación de estos elementos materiales, que implica garantizar su inalterabilidad, evitar confusiones o daño de su estado original, así como un indebido tratamiento o incorrecto almacenamiento. El principio de seguridad, que requiere para su cumplimiento del empleo de medios y técnicas apropiadas para garantizar su conservación y almacenamiento en contenedores adecuados que de acuerdo con su naturaleza logren preservar la evidencia hasta su destino final.

A los anteriores principios se suman el principio de la mínima intervención, que impone la obligación a policías y funcionarios responsables en cada uno de los procedimientos de registrar siempre su identificación; el principio de la descripción detallada, que comprende las características y elementos de las evidencias localizadas e incorporadas a la carpeta de investigación policial. En este rubro el policía investigador habrá de mencionar en el acta policial el medio en el que se hallaron las evidencias, las técnicas utilizadas para su levantamiento y embalaje, las pericias aplicadas, algunas modificaciones o alteraciones que se generen en el proceso de recolección, entre otros aspectos que puedan sugerir variación de su contenido.

Los principios son importantes para demostrar: *a)* que los elementos materiales probatorios y la evidencia física han sido detectados, fijados, recogidos, obtenidos y embalados técnicamente, *b)* que se observó en la metodología de investigación citada lo prescrito en la ley.

En términos sencillos, diremos que esta actividad de orden criminalístico y policial constituye un procedimiento que lleva a garantizar la autenticidad de los elementos materiales de prueba recolectados y examinados; así, al presentarse la información que obtienen por cualquier medio de prueba, se tendrá la certeza de que son parte integrante del caso investigado, sin confusión, adulteración o sustracción alguna. La conservación y preservación de la evidencia conduce a la policía de investigaciones a darle seguimiento, para que no vaya a ser alterada, cambiada o perdida; tiene la obligación de llevar a cabo la serie de actos para el etiquetado de las evidencias.

Las actas policiales juegan un papel relevante; al llenarse habrán de anotar: el estado del proceso cuando se encuentra el elemento de prueba, quién la localizó, el nombre del policía investigador, el área del laboratorio de ciencias forenses en el que se efectuará su análisis. Estas circunstancias, en términos generales, garantizan la seriedad y transparencia del dictamen pericial que irá a producirse en la audiencia de debate de juicio oral. Habrá de expresarse en el acta policial el tipo de evidencia para acreditar su identificación plena, el estado original y las condiciones en las que se localizó, la identidad del policía investigador que hizo el levantamiento, quién realizó el traslado e hizo la entrega en el laboratorio o en la sala de evidencias, persona o perito que maneja y analiza la evidencia. Inicia en el lugar donde se obtiene, encuentre o recaude el elemento físico de prueba y finaliza por orden de la autoridad competente.

La cadena de custodia supone que la evidencia se mantiene en un lugar seguro donde no tengan acceso personas no facultadas para ello. Es el aseguramiento que se le da a una evidencia que presuntamente tiene relación con un hecho delictivo; se inicia en el momento que se levantan; en su caso, hay que registrar en el acta policial quién la levantó, dónde se levantó y quién la recibió. Una ruptura de la cadena supone la pérdida de elementos o muestras básicas para la investigación, y por ende, la ausencia de elementos de prueba, en ocasiones trascendentes, para integrar la prueba material en un juicio oral, lo que en el momento de la decisión judicial puede generar la condena de un inocente o la libertad de un culpable.

En la institución policial mexicana, dentro del contexto del sistema penal acusatorio, la cadena de custodia es la aplicación de una serie de normas tendentes a asegurar, embalar y proteger cada elemento material probatorio para evitar su destrucción, suplantación, alteración o contaminación. La omisión de estas acciones por la policía puede implicar serios problemas en la investigación de una conducta punible, puesto que comprende un sistema de aseguramiento que tiene como fin garantizar la auten-

ticidad de la evidencia que se utilizará como “prueba” dentro del proceso penal acusatorio.

Una cuestión aprehendida permite afirmar que las evidencias se obtienen inicialmente en el lugar del hecho o escena, siendo este el lugar donde *inicia la cadena de custodia*.<sup>21</sup> Comienza cuando el servidor público —llámese policía o perito— embala y rotula el elemento material probatorio o evidencia física localizada (huellas, rastros, manchas, residuos, armas, instrumentos, dinero, documentos, grabaciones en audio y video, etcétera). *Terminará* con el órgano jurisdiccional o el agente del Ministerio Público, quienes respectivamente ordenarán su destrucción o preservación, una vez que se haya presentado en juicio o resuelto el caso a nivel de investigación sin necesidad del ejercicio de la acción penal.

La reforma procesal se diseña a nivel legislativo en el sistema penal federal. Sin embargo, se han realizado acciones tendentes a la preparación, particularmente en el tema relativo a la cadena de custodia. La institución de procuración de justicia federal modifica sustancialmente la forma de registro de la evidencia pública mediante acuerdo del titular de la Procuraduría General de la República del protocolo de cadena de custodia para la preservación de las evidencias o indicios.

En el modelo acusatorio, los sujetos procesales debatirán sobre si un elemento de prueba es admitida para que sea valorada en el juicio oral como elemento de convicción. Si la defensa observa algunas irregularidades durante el proceso penal en la cadena de custodia de cualquier evidencia o elemento de prueba, podrá

<sup>21</sup> El Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua por primera ocasión en el país la incorpora al señalar en el artículo 297: “*Informes de peritos...* Al ofrecerse evidencia material sometida a custodia, deberán anexarse los documentos respectivos que acrediten, en su caso, *la cadena de custodia*”. En relación con esta técnica de preservación, añadió en el artículo 351: “Excepciones a la regla de la mejor evidencia... Lo anterior no es óbice para aquellos casos en que resulte indispensable la presentación del original del documento, cuando se requiera para la realización de estudios técnicos especializados, o forme parte de la *cadena de custodia*”.

oponerse a la admisión y desahogo de ese material probatorio. El juez de garantía o el tribunal de juicio oral tendrán que ceñirse, en la valoración de cualquier evidencia, a las observaciones que hagan las partes sobre la o las irregularidades que muestre la cadena de custodia.

Cuando se produce un hecho delictivo y la policía llega al lugar de los hechos o al lugar del hallazgo, en dicho espacio físico, con el equipo adecuado, llevará a cabo una de las acciones relevantes para la investigación criminal: la protección del sitio, con el propósito de realizar un levantamiento seguro y confiable de las evidencias físicas o biológicas que ahí se encuentran, generando el inicio de la cadena de custodia. En el lenguaje ordinario, las denominadas huellas, rastros, proyectiles, armas de fuego, armas punzocortante o contundentes, semen, vello púbico, cabello, entre otros, que fueron dejados por la víctima y el probable imputado, son objetos de la cadena de custodia. Su empleo debe realizarse siguiendo estrictamente el procedimiento establecido en los reglamentos de policías, peritos o agentes del Ministerio Público, con la finalidad de asegurar la fidelidad de la prueba que contienen.

## CAPÍTULO SÉPTIMO

### EL MODELO DE GESTIÓN POLICIAL EN EL SISTEMA ACUSATORIO

Un sistema de organización y administración policial tiene calidad de innovador cuando opera a través del avance que registra en la aplicación y desarrollo de las ciencias forenses; cuando sus miembros tienen la infraestructura necesaria en el procesamiento de evidencias encontradas en el lugar o sitio del delito y las tecnologías avanzadas para el registro de las investigaciones, sobre la base de un sistema de gestión policial.

Esto fortalece sin duda el trabajo de la institución en beneficio de los ciudadanos, debido a que las ciencias forenses y la tecnología aplicada constituyen el principal instrumento de la modernidad en el combate a la criminalidad, que ha cambiado sus formas de operar. Las tareas policiales bajo esta perspectiva implican el fortalecimiento del sistema acusatorio y adversarial. Los medios de prueba que se presenten ante el juez de garantía o ante el tribunal de juicio oral, tendrán escasas posibilidades de refutación ya que se obtuvieron bajo claros procesos de naturaleza científica o tecnológica.

En varios estados de la República hay perspectivas de reforma procesal penal de índole oral-acusatorio similares a las reformas que ya se han realizado en otras entidades federativas. Uno de los factores de éxito en estos procesos es el grado en que los ministerios públicos puedan ajustarse a su nuevo perfil y el grado en que logren transitar el camino de un entorno escrito de orden inquisitivo, a uno más auténticamente acusatorio, oral y contradictorio.

Como es de esperar, actualmente las estructuras organizacionales, los sistemas de gestión y el funcionamiento de las institu-

ciones policiales reflejan el marco procesal y la práctica vigente del sistema inquisitivo. Las actitudes, destrezas y habilidades de los policías de investigaciones son producto del mismo entorno; las formas de comunicación y trabajo con los organismos auxiliares, los juzgados y las partes en el proceso penal, reflejan el formalismo de un sistema colapsado e ineficiente.

El nuevo paradigma procesal, en cambio, privilegia el juicio oral y los mecanismos de solución de controversias, desformaliza y agiliza la investigación preliminar, cuyo producto ya no gozará de valor probatorio en sí. Se le concede a la policía de investigación más campo de acción durante esa etapa, que está ahora bajo control judicial, pero además bajo el control funcional del fiscal, quien orienta al equipo de policías, en cuanto lo requisitos legales y asegura la legalidad de las diligencias y los medios de convicción recabados.

De la misma manera, una vez que inicia la etapa intermedia, mediante el auto correspondiente expedido por el juez de control de garantías, le incumbe al fiscal defender su postura frente a un contrincante con igualdad de oportunidad procesal. Esto requiere mayor compromiso y beligerancia de su parte, pero particularmente el respaldo en la consolidación de la información probatoria por parte de la institución policial y los cuerpos auxiliares.

Estos avances guardan profundas implicaciones para los agentes de la policía de investigaciones y para su propia organización. Con especial énfasis en el sistema de gestión institucional que modifica sustancialmente las lógicas burocráticas de operación, descentralizando la línea de mando con indicadores de gestión que definen el servicio policial prestado a través de la calidad y cantidad de operaciones de investigación y administrativas, desarrolladas con un amplia perspectiva enfocada a la corresponsabilidad en la investigación del delito. La experiencia en otros países demuestra que sin una adecuada adaptación y preparación previa por parte de esta institución clave en un sistema de gestión policial, no se podrán lograr los efectos positivos de la reforma procesal al sistema de justicia.

## MODELO DE GESTIÓN POLICIAL EN EL SISTEMA ACUSATORIO 123

### I. LA GESTIÓN POLICIAL: LÍMITES Y POSIBILIDADES EN LA REFORMA

Es claro que después de años de inversión e intervención, continúa prevaleciendo un déficit de eficiencia en la operatividad de policías de investigación, lo que se refleja sobre todo en la vieja, pero invencible moratoria de casos sin resolver y la consecuente impunidad. Aunque este sea el mal endémico más generalizado, otros problemas continúan impidiendo el avance y progreso en la función policial.

Pese a las carencias y deficiencias que aún prevalecen en las policías de investigaciones, los obstáculos encontrados en el recorrido de la reforma al sistema de justicia penal, hoy nos permite afirmar que el escenario de estas instituciones, a nivel federal y en algunas entidades federativas, ha variado en cierto grado. En los últimos años se han constituido y desarrollado las escuelas o institutos de capacitación para policías, así como las academias para el ingreso de estos, han mejorado los procesos de selección y nombramiento de los policías; a nivel legislativo se tienen los avances más importantes con las leyes de seguridad pública, que buscan sentar las bases de un modelo policial de vanguardia, con la finalidad de resolver algunos de los problemas que enfrenta el funcionamiento de la policía en México.

A través del sistema nacional y del fondo para las aportaciones de seguridad pública, existen diversos proyectos de inversión para mejorar la gestión policial. Desafortunadamente, la mayor parte de los recursos se han venido aplicando a la adquisición de equipos, armas o programas de adiestramiento militar. Una mínima parte se destina a la construcción de metodologías que eliminen la ineficiencia de la estructura organizacional y de la tramitación de los casos penales, lo cual se puede lograr a través de la incorporación de criterios organizacionales y valores de la nueva gestión pública, como el de racionalización y economías de escala para la eficiencia en el servicio público; todo ello en un afán de romper con la frontera de producción ineficiente de la investigación criminal.



Algunos países de Latinoamérica —Chile y Colombia— instauraron desde hace varios años la profesionalización de las policías de investigaciones, incorporando con ello criterios y prácticas gerenciales en la organización policial, mucho más fácilmente que en nuestro país. Las estrategias orientadas a mejorar las formas de gestión policial han sido diversas y han variado en los últimos años. Se observa recientemente un enfoque que la integra con otros planteamientos, tales como el cambio cultural y organizacional que impone la reforma al proceso penal —acusatorio—.

Podemos distinguir etapas nítidas de desarrollo *stricto sensu*, que habrían de caracterizar la gestión policial en el proceso de reforma orientado a implementar el sistema acusatorio. Uno de los enfoques es, particularmente, hacer énfasis para que el liderazgo policial prepare la introducción de tecnología de punta dirigida a investigar cualquier delito (instalación de equipos y sistemas para las tecnologías de información, por ejemplo, en el análisis de los vínculos entre personas, procesos, instrumentos u objetos de los delitos); añadir otras acciones concomitantes de bastante envergadura para la investigación técnica y científica del delito, sin olvidar que dentro de estos procesos debemos hacer una apuesta más racional de profesionalizar la gestión policial: incorporar especialistas en administración y gerencia en el quehacer de la policía de investigaciones. Sin improvisar y con paso firme se puede preparar el primero de los modernos sistemas de gestión policial, con expertos y formas novedosas de organizar gerencialmente oficinas policiales; a su vez, resulta factible llevar a cabo la profesionalización de los futuros administradores policiales en materia de investigación criminal.

Quizá pueda lograrse con esta experiencia un verdadero desarrollo en la gestión policial que permita la conectividad a través de las técnicas de información de diversas actividades de las instituciones policiales en el país (por ejemplo, en la aplicación de las normas para la investigación del secuestro), mediante un sistema integral de administración y organización policial, que

## MODELO DE GESTIÓN POLICIAL EN EL SISTEMA ACUSATORIO 125

agrupe las distintas agencias policiales, los servicios comunes, con criterios de economías de escala. Esto implica una verdadera ruptura del paradigma organizacional, que tradicionalmente dividió el servicio policial en nuestro país.

Una experiencia de esta naturaleza y la incorporación de profesionales en administración policial, con nuevas alternativas de organización, que demanda la gestión policial en el proceso de la reforma procesal, propiciaría cambios de cultura y organización más adecuados a las necesidades propias de la institución policial en el contexto del sistema acusatorio. A su vez, desarrollar sistemas de información para la gestión policial que posibilite a los operadores un mejor control de la tramitación de los casos penales por cada policía, y a los ciudadanos el acceso a la información del avance de las investigaciones a través de mecanismos de control interno y externo —ciudadano—; así como el acceso a otra información jurídica relevante, tal como los incentivos institucionales a policías que logren la resolución de determinado número de asuntos, con estricto respeto a los derechos humanos. Constituiría este tipo de gestión un instrumento importantísimo para la seguridad jurídica y el ejercicio profesional de la función policial, desde el ámbito de la investigación criminal, en un esfuerzo de transparencia sin precedentes, en la administración de las instituciones policiales.

Algunos de estos avances suelen verse en países como Chile y Colombia, aunque no son homogéneos. Todavía existe la percepción de que las reformas policiales enclavadas en el sistema penal acusatorio, han sido muy lentas o mucho menores a la inversión realizada; que las reformas se han estancado y tienden a languidecer; que solo han removido algunos obstáculos; o bien, que apenas están comenzando pese a los años transitados y a la inversión realizada, o que se exageraron promesas y expectativas. Lo cierto es que unos y otros coinciden en la afirmación de que es aún muy compleja y amplia la tarea pendiente en la construcción de la nueva etapa de la policía de investigaciones.

## II. LA GESTIÓN POLICIAL: SUS LÍMITES Y POSIBILIDADES

Si coincidimos en que hay que enfocarnos aún más en la gestión policial, es porque implícitamente en nuestro país estamos aceptando que la burocracia de servidores públicos, que domina la institución policial —policía de investigaciones—, aún no ha sintonizado con algunos nuevos valores, como el de economía y eficiencia o control de desempeño, temas poco incorporados en la cultura policial. Pero es de reconocer también que el discurso de eficiencia —mucho más pobre que el deontológico— empata mal con las creencias. Adicionalmente, un sobre marcado énfasis en los aspectos de gestión policial nos puede hacer configurar el cómo, pero si carecemos del para qué, corremos el riesgo de instrumentalizar la reforma al sistema penal, o hacer simplemente acciones de “escaparate” como suelen verse algunas de ellas en ciertas policías. La gestión es y será siempre accesorio a lo sustantivo y quizá el déficit que se observa en la gestión policial es la falta de alineamiento entre lo que se dice y en el cómo se hace la nueva administración.

Por consiguiente, se requiere rescatar el cómo, pero a su vez destacar y posiblemente reformular ideológicamente, qué es la buena justicia y qué es el buen policía para los mexicanos de nuestros días.

No hay que olvidar que todavía la institución policial de nuestro país continúa atada a una estructura organizacional de carácter vertical, que no se ha superado con el surgimiento de las nuevas leyes de seguridad pública. Esta situación ha desarrollado disfunciones, que tienen como resultado no solo la permanencia de esa estructura organizacional, sino la funcionalidad de esas distorsiones. Por consiguiente, en el cómo siempre habrá puertas que solo podrá cerrar el para qué. El para qué debe fundarse en el discurso deontológico e ideológico de la policía mexicana, en un entorno diferente que impulsa el procedimiento penal acusatorio y adversarial, para que impregne a su vez el cómo de valores. Es fundamental entender que sin visión de conjunto y

## MODELO DE GESTIÓN POLICIAL EN EL SISTEMA ACUSATORIO 127

de largo plazo, la gestión policial será puro activismo; pero sin la especificidad del aquí y ahora, la proyección de futuro será mera especulación.

En este sentido, es un avance positivo que mecanismos como el de la planeación estratégica empiecen a ensayarse en el seno de las instituciones policiales. Tradicionalmente la policía de investigaciones ha funcionado con el mero impulso de su inercia —auxiliar del Ministerio Público—, acudiendo a conceptos “pre-fabricados” y “formalistas”, generalmente no sujetos a objetivos concretos ni medibles. México debe comenzar, a través de su reforma policial, a realizar por primera vez un ejercicio de planificación estratégica en el marco del proceso de modernización del sistema penal, sirviendo de base no solo para motivar a los policías de investigaciones en la delicada función que desempeñan, sino también para fijar la visión que presupone impulsar un proceso de cambio profundo en diversos aspectos, uno de los cuales es la gestión policial.

Este proceso importante requiere de todos los instrumentos disponibles para coadyuvar, en el proceso de adaptación, al cambio en el seno de las instituciones policiales, así como el compromiso político al más alto nivel, la persistencia en el tiempo del proceso, combinada con resultados tangibles a corto plazo, en la resolución de casos a partir de las nuevas reglas que establece el procedimiento penal acusatorio. La formulación de un ejercicio de planificación estratégica tiene la ventaja en el ámbito policial de “adiestrar” con una metodología, que coadyuva en la necesidad de establecer una política pública, en un ambiente poco o nada preparado para este ejercicio indispensable de las entidades policiales de nuestro país.

Nos referimos a la necesidad de descubrir, explicar y sostener una visión de largo plazo que guíe el accionar administrativo y sustantivo de la institución policial. Este ejercicio coadyuva a establecer prioridades que proporcionen orden y sentido al accionar operativo, a definir las pretensiones en el corto, mediano y largo plazo; en consecuencia, a disponer de los recursos huma-

nos y financieros que requieren las metas trazadas. A su vez, este ejercicio incorpora la medición de indicadores de desempeño e indicadores de resultado como complemento del proceso, proyectando en la cultura policial este elemento indispensable para pasar de la administración de los insumos a la administración de resultados.

La policía debe tener una política de cara a los ciudadanos, a los medios de comunicación, a las universidades y a los distintos sectores sociales. Esto es necesario también gestionarlo, establecer prioridades, tener claridad en cuanto a lo que está sucediendo en el entorno, a los aspectos que hacen variar la opinión de los usuarios, a las formas de generar membrecías o satisfacciones. Esto es también gestión policial, un ejercicio poco desarrollado a lo interno de las instituciones de la policía de investigación; ello le daría poder de interlocución a una entidad que ha sido tradicionalmente ausente y opaca en los sistemas de gestión de calidad, además de retroalimentación para posibilitar una organización policial dotada de mayor flexibilidad, pro actividad e innovación en el área de la investigación criminal, más adecuada a los desafíos de la criminalidad moderna.

Esto es, un enfoque de la gestión policial que sin olvidar su carácter instrumental u operativo, pueda coadyuvar con la falta de entrenamiento del policía de formular políticas públicas de orden administrativo, ya que la sola atención a distintos actores sociales mejora el conocimiento del entorno, a tener más claras tanto las debilidades y amenazas, como la fortaleza y oportunidades; a hacer más coherentes los planes estratégicos en las investigaciones criminales con las expectativas sociales y a instaurar políticas de mejoramiento continuo, más allá de las políticas de reforma y modernización, que por su naturaleza misma, más tarde o más temprano, habrán de finalizar.

En síntesis, de lo que se trata, como objetivo primordial, es de alcanzar a detectar las nuevas necesidades que impone el sistema acusatorio a las instituciones policiales en el ámbito organizacional y administrativo, para redireccionarlas a la preparación de sus

## MODELO DE GESTIÓN POLICIAL EN EL SISTEMA ACUSATORIO 129

miembros, que deberán asumir sus funciones de investigación criminal cabalmente en el nuevo sistema acusatorio mexicano. Es indispensable y prioritario precisar los cambios estructurales, organizativos y legales que servirían de base para la adaptación de la policía de investigaciones en el nuevo entorno garantista que ofrece el modelo acusatorio.

La descrita finalidad, el liderazgo político y social debería revisar en conjunto con los responsables de dirigir las policías en el país los siguientes aspectos institucionales:

1. Prácticas actuales en cuanto a la realización de las averiguaciones previas, incluyendo la forma de utilización y dirección funcional de la policía ministerial y los peritos forenses;
2. La efectividad de las labores y la calidad de los medios de prueba en una muestra con procesos terminados y la medición de la efectividad de los agentes de la policía ministerial o investigativa en las etapas de investigación, de instrucción y juicio;
3. Las estructuras organizacionales y los sistemas de control de gestión frente a las necesidades del nuevo sistema acusatorio;
4. Sistemas de gestión y planificación presupuestal que desarrolle al interior de cada institución policial, para hacer frente a los requerimientos del nuevo accionar en el sistema penal acusatorio.

Deben confrontarse estos factores con el perfil institucional derivado de la reforma, con el objeto de diseñar el contenido general de un plan de adecuación al sistema acusatorio y los puntos específicos de esa adaptación.

En cuanto a la metodología que puede emplearse, resulta importante que el proceso policial en la investigación del delito sea participativo. Se recomienda que para tales efectos la institución designe expertos a nivel de supervisión de los procesos y de la confianza del titular de dicha institución, para coordinar el traba-

jo de planeación estratégica con algunos consultores externos y académicos con experiencia en los temas policiales en el sistema acusatorio. Esto haría transparente la detección de las necesidades y sus procesos de satisfacción a través de las recomendaciones especializadas que llevarían a cabo con los enlaces institucionales, que se encargarían de facilitar y coordinar entrevistas, asegurar que la información documental esté accesible oportunamente, entre otras tareas de recolección de datos.

La metodología de trabajo incluiría entrevistas dirigidas a personas de alta jerarquía dentro de la institución policial, personal operativo y personas de otras instituciones públicas o privadas que tengan conocimiento objetivo de las operaciones policiales. Incluirá los siguientes perfiles: policía preventiva, policía ministerial, peritos y técnicos forenses, subprocuradores, agentes y subalternos, jueces y magistrados, defensores de oficio y litigantes, encargados institucionales de gestión, presupuesto y planificación, académicos e intelectuales, líderes de organizaciones de la sociedad civil, presidentes de las comisiones de derechos humanos de las entidades federativas y personal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Habría que realizar visitas de observación con el fin de revisar el actual sentido operativo de la policía y lograr el contraste elemental en lo que existe, frente al deber ser en el nuevo modelo acusatorio; lo anterior debido a que se requiere familiarización con las estructuras organizacionales actuales; este es el motivo por el cual las visitas de observación y registro de datos directamente son esenciales para observar y analizar las distintas formas de organización policial. A lo anterior se sumaría el estudio de documentos empleados por la policía, entre los que debe analizarse además las leyes orgánicas, reglamentos, circulares, instructivos, manual de operaciones, guías presupuestarias, planes institucionales y organigramas, manuales de procesos, políticas de capacitación y entrenamiento, entre otros. La finalidad es llevar a cabo reuniones de la naturaleza de los grupos de enfoque, que comprenden la realización de cierto número de discusiones

## MODELO DE GESTIÓN POLICIAL EN EL SISTEMA ACUSATORIO 131

grupales con el propósito de recabar información adicional e impresiones acerca de las necesidades y realidades operativas de la policía de investigaciones. El valor agregado, más allá de entrevistas, es la posibilidad de promover discusiones sobre diferentes puntos de vista acerca del propósito de la detección de necesidades en la policía de investigación.

El propósito no es cuestionar o valorar el sentido operacional actual, sino medir lo existente contra las necesidades que impone el sistema acusatorio, con el objetivo estratégico de sugerir cambios estructurales/organizativos y programas de actualización para la institución policial en materia de investigación penal. A manera de ilustración se trataría de generar un sistema de organización y administración policial a partir del análisis de los siguientes temas:

- De forma sintética, una descripción de la organización actual.
- Una descripción de prácticas actuales en cuanto la averiguación previa y el funcionamiento a nivel de control de procesos.
- Cambios estructurales/organizativos que requiere la policía para adaptarla al nuevo sistema acusatorio mexicano.
- Ajustes en las prácticas actuales para lograr la agilidad y eficiencia a nivel de etapa de investigación criminal, que sería una de los grandes avances realizables bajo el nuevo entorno procesal.
- Sugerencias en cuanto el cómo mejorar los grados de integración funcional entre los agentes del Ministerio Público y las policías —investigativas y de seguridad pública—, los peritos como cuerpos auxiliares y la efectividad de los laboratorios forenses en las diversas etapas del proceso penal acusatorio.
- Contenidos generales para programas de actualización.
- Contenidos prácticos para manuales de proceso y de procedimientos.



- Sugerencias en cuanto a protocolos de actuación y la agilización de comunicaciones entre los fiscales o agentes del Ministerio Público con la policía de investigaciones, y entre estos con los peritos de los servicios periciales y laboratorios de ciencias forenses.

El cumplimiento de cada uno de estos puntos lleva a construir, en el ámbito policial, gobernabilidad; de manera que aspirar a un progreso sostenible de nuestro país es encarar el reto de la implementación del modelo acusatorio en el sistema policial, a través de distintas reformas pendientes de instrumentarse. Una está relacionada con la gestión de calidad, que debe tener la institución policial como clave para el desarrollo exitoso del debido proceso penal. Una estrategia para implementar el citado modelo puede comenzar con la incorporación de los principios y reglas que integran un sistema de buen gobierno.

No resulta suficiente la promulgación legislativa que incorpore las reglas y principios del modelo de la gobernanza. Deben construirse también los actos e instituciones y el cambio cultural. El elemento menos complejo es el de la creación legislativa. Los otros dos son más complicados y requieren de la voluntad política dirigida a destinar los recursos necesarios para generar mecanismos eficientes y eficaces que permitan implementar con éxito los actos e instituciones que requiere la policía de investigaciones.

Los actos e instituciones comprenden la forma como se ejecuta la legislación y la manera como se comportan los policías de investigaciones encargados de cumplir con la ley. El siguiente gran paso, para una transformación real dirigida a la transformación de la policía bajo el concepto de “gobernanza” o de buen gobierno, se enfoca hacia el cambio cultural que involucra a los ciudadanos, su relación de respeto a la ley y a las instituciones policiales.

Por otro lado, deben incluirse en el nuevo modelo de gestión gubernamental para la policía, las instituciones dirigidas a la eva-

## MODELO DE GESTIÓN POLICIAL EN EL SISTEMA ACUSATORIO 133

luación de resultados y la creación de mecanismos con respaldo ciudadano contra la corrupción policial. Consideramos que en la agenda política nacional debe sostenerse como prioritaria la implementación del modelo administrativo de gestión pública en la policía de investigaciones, en el que son indispensables los principios de transparencia, rendición de cuentas y la integridad. Particularmente, debe privilegiarse la interacción entre las instituciones policiales y los ciudadanos.

En esa tesitura, un elemento importante para establecer un cambio en la cultura policial, que sustituya las malas prácticas y los abusos policíacos, en un buen gobierno, radica en el tratamiento institucional que se les brinde a estos fenómenos y la creación de procedimientos efectivos que disuadan o desalienten su repetición. Por ejemplo, una prueba de que se toma en serio la ética policial, es reducir el riesgo de futuras prácticas corruptas, a través de procedimientos de investigación diseñados cuidadosamente desde el control externo.

Agregaríamos que esos procedimientos pueden diseñarse e implementarse con expertos especializados y de amplia formación ética en los asuntos policiales, que sean insobornables, con la exclusiva finalidad de que hagan efectiva la sanción y la prevención. Evidentemente, siempre y cuando estos elementos aparezcan reglados en una legislación policial de manera coherente y articulada, con el propósito de que a partir de nuevas instituciones que configuren la policía de investigaciones se logre avanzar e implementar con éxito el modelo administrativo del buen gobierno, en el marco del sistema acusatorio. Es decir, que exista coherencia entre la ley y su aplicación a través de ciertos actos e instituciones diseñadas para el cumplimiento efectivo de aquella.

A nuestro juicio, es insoslayable que para la prevención y sanción en caso de presentarse el abuso policial en el contexto del sistema acusatorio, los principios de la transparencia y la rendición de cuentas constituyen mecanismos eficaces que deben incorporarse en una nueva legislación procesal y reglamentaria;

así como los actos e instituciones en cada una de las áreas de prioridad en la policía de investigaciones. Los órganos de control policial y un sistema de gestión de calidad son indudablemente una parte importante en la construcción de la nueva policía de investigaciones, que debe reforzarse a través de esa coherencia que entre ley, acto e institución debiera existir.

En un sistema de control de la gestión, la tarea de los agentes del Ministerio Público y la policía de investigaciones puede efectivamente supervisarse, además verificar que la persecución de los delitos se mueva en espacios de eficacia y rapidez. Aporta datos también para el fortalecimiento de un servicio profesional de carrera, así como la implantación de sistemas de evaluación de resultados, que conducirá a facilitar la facultad de investigación de los delitos, en el oportuno tratamiento que en el contexto del sistema acusatorio, le brinden las oficinas de la policía a todas las denuncias formuladas por los ciudadanos. Asimismo, la autonomía presupuestaria favorece la participación y monitoreo de la sociedad civil, en torno a la operatividad del subsistema de procuración de justicia. Esta medida contribuiría a la lucha en contra de la corrupción y la impunidad en delitos de daño grave causado a la sociedad y sus miembros.

## CAPÍTULO OCTAVO

### CÓDIGO DE ÉTICA EN LA RE-SIGNIFICACIÓN DE LA FUNCIÓN POLICIAL

Uno de los aspectos más importantes en el sistema penal acusatorio se dirige a fortalecer el Estado de derecho, reforzar los mecanismos que garantizan los derechos humanos, construir esquemas que permitan la transparencia y rendición de cuentas de las instituciones policiales que se han caracterizado por su opacidad en el sistema penal de corte inquisitivo, con el objeto de brindar un principio de certeza a la integridad policial, a partir de un código de conducta en la gestión pública.

Para abordar eficazmente la confección de un código de esta naturaleza, los problemas de integridad que enfrenta deben plantearse a partir de los estándares internacionales que han resultado eficaces en el esquema del buen gobierno, y conectarse a las recomendaciones en el ámbito internacional. Utilizar el mismo lenguaje en la función policial, con el propósito de ponerse de acuerdo sobre el significado de sus pautas de comportamiento en cada una de las etapas del procedimiento penal acusatorio y adversarial, desde el enfoque de los derechos humanos, constituye una de las aspiraciones ideales.

La misión de la policía de investigación, orientada por la reforma procesal en curso desde el 2008, debe realizarse no solo siguiendo criterios de calidad, transparencia, eficiencia, eficacia y rendición de cuentas, sino también asumiendo su dimensión ética como institución pública, que existe para promover el desarrollo humano, a través del impulso a las mejores prácticas en la actividad policial y la vigilancia cuidadosa del respeto a los derechos humanos.

Dicha dimensión ética de la función policial debe traducirse en un sistema normativo de deberes: el propuesto Código de Conducta de la Policía de Investigación dirigido a la consolidación de un Código de Ética Profesional. Este ordenamiento debe tener por finalidad explicitar e internalizar en todos sus integrantes, los ideales, principios y valores que deben orientar las actuaciones en la actividad policial, de modo tal que se construya como un punto de fusión y de encuentro reflexivo entre los intereses de sus integrantes y los de la institución policial dedicada exclusivamente a la investigación de los delitos y la salvaguarda de los derechos fundamentales.

Este sistema de valores debe ser la línea estructural que sirva de guía en el desempeño laboral de todo el personal. Se trata de un paso de madurez, de respeto y compromiso con la actividad de investigación de los delitos y con la sociedad. Sus contenidos deben ser el pilar fundamental que sustente la formación ética de los miembros de la policía de investigaciones en la función pública y, también la guía que conduzca la actividad cotidiana de la función policial en el contexto del sistema acusatorio.

Consideramos importante, en esta nueva producción de la justicia penal, incorporar reglas éticas, que reflejen las conductas deseadas en el apartado que contemple aquellos comportamientos que promuevan un ambiente de trabajo honesto y otro segmento que abarque la descripción de las conductas de respeto, eliminando del lenguaje algunas frases que describen conductas no deseadas y autoritarias. Es conveniente incorporar en un capítulo las conductas para prevenir conflictos de intereses. El mensaje institucional debe ser claro: erradicar cualquier acción dirigida a incitar o despertar la tentación en alguna práctica irregular o corrupta en la actividad cotidiana de la investigación del delito y en los integrantes de la policía mexicana de investigaciones. En síntesis, la base de la actividad sustantiva de la policía busca y tiende a facilitar mecanismos efectivos para el derecho de acceso a la justicia, a la búsqueda de la verdad y a la equidad, en el marco de la libertad y la responsabilidad. Aquí radica la

legitimidad social de la función policial en su ámbito de investigación de los delitos.

En nuestro concepto, la misión de las instituciones policiales en México debería orientarse por un plan de desarrollo institucional en el contexto del sistema penal acusatorio, que se lleve a cabo no solo siguiendo criterios de calidad, integridad, transparencia, eficiencia y eficacia, sino también asumiendo su dimensión ética como institución de servicio público, que existe para promover el desarrollo y bienestar de todos los mexicanos a través de una adecuada contribución profesional a la promoción de la seguridad y la justicia penal.

Esta misión ética de la función policial se traduce en un sistema normativo de deberes concentrados en un futuro código de conducta profesional. Este ordenamiento tendría como finalidad hacer explícitos e internalizar en todos sus integrantes, los ideales, principios y valores que deben orientar su actuación. De esa forma, por primera vez en la historia, la institución policial mexicana lograría establecer un código normativo que abarque esos ideales, principios y valores que han permanecido ausentes en su actividad cotidiana. Como lo ha mencionado el maestro Domínguez Vial,<sup>22</sup> ese sistema de valores es el halo de luz que ilumina el desempeño de todo el personal de la institución. En consecuencia, se trata de una estrategia de respeto y compromiso con la profesión policial y con la sociedad. Los contenidos son el pilar fundamental que sustenta la formación ética de los nuevos y futuros investigadores en materia criminal; también comprenden la guía que conducirá la actividad de colaboración diaria con el Ministerio Público, en su nueva corresponsabilidad para la investigación del delito.

¿Cuáles son los fundamentos esenciales para la elaboración de una legislación de ética profesional de la institución policial mexicana? Como en la mayoría de las instituciones policiales del mundo, marcadas por el avance democrático de sus comuni-

<sup>22</sup> Domínguez Vial, Andrés, *La policía de investigación criminal. Fundamentos, racionalidad y operación*, México, Talleres Gráficos del Gobierno del Estado de Chihuahua, 2006, p. 345.

dades, el basamento ético-jurídico se constriñe a la adopción de lineamientos que permitan lo siguiente:

- 1) El reconocimiento de que la función policial es un servicio público, establecido para dar eficacia al derecho y garantizar la seguridad comunitaria mediante la investigación técnica y científica de los hechos que son calificados como delitos por la ley y de aquellos que son investigados para establecer cualquier otro comportamiento individual o grupal que por su naturaleza se convierte en un factor de riesgo para la seguridad comunitaria.
- 2) La aplicación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y en consecuencia, la incorporación de un código de conducta para los miembros de la institución policial mexicana encargados de hacer cumplir la ley, haciendo énfasis en la aplicación ineludible de los tratados internacionales que nuestro país ha ratificado frente a la comunidad internacional.
- 3) La firme sustentación de la concepción humanista en su quehacer cotidiano, compatible con los principios básicos de una cultura de la legalidad imprescindible para cualquier sociedad civilizada.
- 4) La definición de un patrón de comportamiento basado en los valores sociales e intelectuales que facilitan el desarrollo humano, como objetivo inmerso en la conducta de todos sus miembros durante la prestación del servicio público a su cargo.
- 5) La expresión del crecimiento profesional y ético a través de los incentivos profesionales de orden material e intelectual. No se debe perder de vista la importancia que tiene la dignificación de la función policial frente a la comunidad a la que sirven, integrando a su vez el servicio profesional de la carrera policial en actos e instituciones, bajo una perspectiva integral, abandonando la regionalización

y fragmentación de las diversas legislaciones estatales o la federal que lo contemplan normativamente.

Incuestionablemente un código de ética profesional de la institución policial en México reflejará fielmente los valores y principios de una sólida carrera profesional de la policía de investigaciones sustentada en varios principios, entre ellos el de integridad. Los contenidos estarían orientados a promover el servicio público de seguridad comunitaria y procuración de justicia, que fortalezcan el bien común y el desarrollo de la sociedad mexicana.

Dada la naturaleza de este ordenamiento, que incorpore ideales, valores y principios, es posible señalar que la ética policial encuentra su punto de partida y fundamento en la conciencia colectiva respecto de la existencia insoslayable de una ética pública, enfocada a expresar como valor fundamental la probidad del policía de investigaciones con la colaboración ciudadana. La preeminencia de una ética social en todas las actividades policiales tendentes a lograr como fin último la adopción de valores que llevan implícito el lograr una convivencia social pacífica, promotora de una cultura de la paz ciudadana. No hay que olvidar los sistemas ético-normativos de carácter universal que están presentes en cualquier sociedad que decide vivir bajo un Estado de derecho social y democrático.

Para los miembros de la policía de investigación, por lo tanto, una labor policial ética, apegada al principio de legalidad, se basaría en el cumplimiento de tres principios básicos: el respeto y cumplimiento de la ley, el respeto a la dignidad de las personas, además de una necesaria e indispensable conducta de respeto y protección de los derechos humanos.

La misión de esta institución policial buscaría como valores en sí mismos, la verdad y la justicia, en el marco de la libertad y la responsabilidad de sus acciones públicas. En esto radica la legitimidad social de cualquier policía que emerge de un sistema jurídico como el mexicano, que evoluciona por el imperio del



Estado de derecho. Es por esta razón que desde la ética policial aplicada, la misión de sus miembros en la sociedad debe ser concebida como una función de servicio público orientada a buscar la paz y la tranquilidad de la comunidad.

En el entendido de que esta clase de instituciones existe bajo el principio de igualdad para servir a todos sin distinción alguna. La selectividad en la prestación del servicio, por lo contrario, haría patente la rechazada actitud de discriminación en un país que se desarrolla en el marco de un sistema jurídico liberal y democrático. Indudablemente, la misión en este sentido contribuye al desarrollo integral de la sociedad, en el marco de la democracia y el respeto al Estado de derecho. Para ello, los policías —en su calidad de funcionarios públicos— nunca deben utilizar sus cargos para lograr beneficios propios o particulares. Esta es la principal cualidad de una ética pública y, consecuentemente, de la ética policial.

Otra cuestión importante radica en su función social, que encuentra su fundamento real en la investigación técnica y científica de los delitos y en aportar información que elimine factores de riesgo que llegan a desencadenar futuras conductas individuales o colectivas que dañen los bienes de los ciudadanos o de la colectividad. Por lo tanto, es necesario que la labor policial ayude a fortalecer la confianza ciudadana con el objeto de mantener la cohesión social, que ha sido considerada como base de la democracia en la cultura latinoamericana a través de la participación ciudadana y de la convivencia social pacífica.

Hay que recordar que los miembros de la policía, cuando ejercen la función pública que les fue asignada constitucionalmente, adquieren una responsabilidad social que es inherente a su misión. Este será el motivo principal por el que su actividad deba desarrollarse a través de los valores que proporciona enunciativamente una ética social, como la veracidad, la honestidad, la solidaridad, la reciprocidad, entre otros.

Debemos enfatizar que en la policía de investigaciones nuestro policía no es un ser aislado, es parte activa de la sociedad; luego entonces, los ciudadanos y el gobierno deben comprender que

su actividad profesional tiene un marcado componente social, que influye directa o indirectamente en la eficiente o ineficiente prestación del servicio público. Corresponde al Estado mexicano establecer los instrumentos jurídicos, administrativos y sociales que conduzca al establecimiento de una institución policial que dignifique la función del policía frente a la comunidad, y que esta cuente con esquemas de evaluación externa que lleve al desarrollo integral de la institución en sus diversas tareas de seguridad comunitaria, procuración y administración de justicia.

Quienes se dedican a la función policial deben promover la humanización de la justicia en los actos de autoridad más elementales frente a la comunidad y en aquellos asociados a una investigación simple o compleja de la criminalidad. Este objetivo puede lograrse si el policía de investigaciones, en su actividad cotidiana, valora y respeta los derechos y la dignidad de cada persona. En este ejercicio social de la función del policía surgiría la confianza comunitaria hacia las actividades diarias de la institución policial.

Una consecuencia lógica de asumir esta conducta ético-policial promueve invariablemente la excelencia del servicio público en beneficio de los ciudadanos. La ética, al considerar la función policial como un servicio de carácter público, asume que dicha misión debe realizarse de manera eficiente y eficaz.

La sociedad espera y exige a sus policías el desarrollo de una gestión de calidad y transparente, debido a que el progreso social y su continuidad pasan en gran medida por el ofrecimiento de un oportuno servicio policial. Por tal motivo, una legítima gestión policial —caracterizada por la probidad, la honestidad, la responsabilidad, la veracidad y la eficacia— responde no solo a una exigencia reglamentaria o legal, también es parte de un imperativo ético.

Comencemos por construir y delinear *la misión de la policía de investigaciones en México*. A los integrantes de la policía de investigación les corresponde en todo momento la obligación derivada del artículo 21 constitucional, que los hace correspon-

sables de la investigación del delito junto al Ministerio Público, que conducirá y bajo quien estará el mando de la policía en exclusiva para el desarrollo de esa actividad. De tal forma que la misión de la policía es la investigación y persecución de los delitos; por lo tanto, observará los deberes que la legislación secundaria le impone en el desarrollo de esta facultad constitucional, cuyo cumplimiento se traduce en alcanzar la misión institucional de ese cuerpo policial, sirviendo a la comunidad con los resultados de la labor investigativa técnica y científica de los delitos o de hechos presuntamente delictivos. No debe apartarse de los objetivos particulares sobre los que su función profesional está enmarcada: el espíritu de servicio público, el bien comunitario y el compromiso con los ciudadanos para que ejerciten su derecho de acceso a la justicia y al conocimiento de la verdad.

*La máxima de investigar para detener, eje fundamental de la policía de investigación en el sistema acusatorio mexicano.* El trabajo de investigación criminal en este modelo de justicia se asume bajo la máxima “investigar para detener y no detener para investigar”, valorando ante todo la verdad, que consiste en la correspondencia de los juicios profesionales con la realidad objetiva de los hechos, en particular con el sitio del suceso.

El investigador policial deberá respaldar su trabajo profesional con el empleo de la ciencia y la tecnología como modelo para la transparente y objetiva búsqueda de la verdad que arrojen no solo los medios de prueba tradicionales, sino fundamentalmente las pruebas técnicas y científicas que logren obtener después de haber localizado evidencias físicas que fueron analizadas y procesadas en los laboratorios de criminalística. De manera que esta premisa de investigar para detener con suficientes elementos de prueba, producto del trabajo policial técnico-científico, otorga credibilidad, objetividad y solidez a la investigación policial, y sobre todo, produce confianza ciudadana en la institución.

En el sistema tradicional, denominado por algunos autores como sistema inquisitivo, la desventaja del trabajo policial, se encuentra en la limitación de sus funciones que deben ceñirse a

las órdenes emanadas por el Ministerio Público, en virtud de que la legislación no les atribuía la corresponsabilidad de la investigación del delito. Esto, durante décadas, ha provocado en el sistema penal mexicano acciones policiales omisas y negligentes; por lo tanto, se ha convertido en el germen que provoca impunidad y corrupción en la investigación penal.

*La dignidad humana es el centro de protección de la policía en cualquier caso de investigación.* En el desempeño de sus tareas, los funcionarios de la policía de investigaciones respetarán y protegerán la dignidad de las personas y los derechos humanos. En ningún caso el investigador policial podrá infligir, instigar o tolerar algún tipo de apremio físico o psicológico a las personas con el objeto de obtener informaciones o confesiones para esclarecer delitos. Estos, al igual que los tratos inhumanos, degradantes o la tortura, bajo ningún pretexto deben ser aceptados en la nueva institución policial mexicana. El principio de inocencia será el que conduzca el comportamiento cotidiano del policía; por lo tanto, en esta actividad no se culpabilizará a los imputados por la comisión de un delito, mientras no se acredite legalmente su responsabilidad. La confesión será una prueba exclusiva para producirse ante los jueces de garantía o el tribunal de juicio oral, de ahí que la policía de investigación no tiene facultades para obtener la confesión.

*La protección de la vida constituye un deber ineludible de la policía de investigación.* Será responsabilidad de los policías investigadores la salud física y psicológica de los detenidos bajo su custodia, asegurando su plena protección y tomando las medidas inmediatas para proporcionarles atención médica cuando se precise.

*El principio de proporcionalidad en la actuación policial.* En los procedimientos utilizados para hacer cumplir la ley, la policía de investigación podrá usar la fuerza solo cuando sea estrictamente necesaria y en la medida que lo requiera el desempeño de sus funciones. Harán uso de sus armas solo cuando exista un riesgo racionalmente grave para sus vidas, integridad física o la

de terceras personas. Toda acción policial de este tipo debe estar regida por el principio de proporcionalidad.

*El secreto profesional, un deber básico en la actividad investigadora del delito.* Todos los agentes policiales investigadores que por razón de su cargo tengan conocimiento de asuntos reservados en la investigación de los delitos, respetarán el secreto profesional que los obliga a proteger la información obtenida, que es patrimonio institucional, con el propósito de cautelar la investigación criminal y la honra de las personas, a menos que las necesidades de la justicia exijan revelarla.

*La honestidad profesional en la policía de investigación debe integrarse a los deberes individuales y colectivos de la institución policial.* Los funcionarios de la policía de investigaciones deberán tener siempre clara conciencia de su responsabilidad individual por los actos que ejecuten en el cumplimiento de su deber en la investigación de los delitos. De esta forma, la institución del Ministerio Público en el sistema penal acusatorio mexicano constituye un instrumento de protección de los ciudadanos y de la sociedad contra los riesgos de la corrupción. Los integrantes de las instituciones policiales intervinientes en este tipo de investigación en todo momento actuarán con probidad y honradez, rechazando vigorosamente y denunciando toda acción u omisión que pueda conducir a una conducta corrupta.

*La imparcialidad profesional del policía de investigación constituye una conducta de observancia ineludible.* Los miembros de la policía de investigación deben actuar en el ejercicio de su profesión con total objetividad e imparcialidad, sin discriminar entre las personas en razón de su condición social, cultural o económica, de sus creencias religiosas o ideas políticas, o por los cargos o rangos que pudieran tener en la sociedad.

*Los policías de investigación se conducirán con lealtad a la misión de la institución policial que representan.* En cualquier actividad tendente a la investigación de los delitos o de hechos presuntamente delictivos, los policías deben observar lealtad a la misión que sus instituciones han marcado en cumplimiento

a la corresponsabilidad que tienen en la investigación del delito. La lealtad constituye un valor que les permitirá cumplir con la sociedad en el servicio público, que están obligados constitucionalmente a brindar a los ciudadanos. Por tanto, debe exigirse a los superiores y estos a sus superiores y exigirla a sus subalternos. Los superiores están obligados a proyectarla en todas sus acciones y resoluciones.

*El honor policial como distintivo principal de la policía de investigaciones.* Los policías de esta institución cultivarán y promoverán el honor policial, que es una de las principales cualidades de orden ético que los impulsa a cumplir los deberes profesionales integralmente. Todos los miembros de la policía investigativa están obligados a cumplir las leyes secundarias, llámese códigos procesales, reglamentos o circulares relacionados con su actividad de investigación del delito; por lo tanto, están subordinados a las leyes a partir de cuyo contenido se comprometen con los valores sociales e institucionales que derivan de ellas, buscando en toda acción policial, los mecanismos adecuados para su promoción permanente.

## CAPÍTULO NOVENO

### EL PROCESO DE CERTIFICACIÓN DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIONES

Un tema de progreso en el nuevo modelo acusatorio, cuya implementación en curso está desde el 2008, deriva en los perfiles profesionales de sus operadores jurídicos. El perfil profesional de los policías mexicanos, independientemente de sus funciones en las áreas de seguridad pública, procuración de justicia o ejecución penal, exige que sus conocimientos especializados se sometan regularmente a un proceso de certificación profesional.

Este proceso podrá implementarlo la institución policial con colaboradores externos y de la sociedad. Para lograr la certificación el policía debe sustentar un examen de certificación profesional en la actividad policial, en materia preventiva o de investigaciones. Con esta evaluación se acreditará su capacidad profesional, sujetándose al cumplimiento de los requisitos que establezca un ordenamiento normativo.

Nuestra opinión, con el exclusivo propósito de contribuir, se dirige a proponer la definición de un modelo objetivo de valores para la conducta, tanto profesional como individual, de todo el personal de la institución policial dedicado en forma exclusiva a la investigación del delito y que deben considerarse en cualquier proceso de certificación policial.

Será importante que la evaluación sea encausada en un segmento, a explorar en el policía la constatación de valores intelectuales en el ejercicio de la función policial, en el cual se proyecten algunas actitudes de los miembros de la institución policial, que estimulen valores universales del pensamiento. Con la idea dirigida a enfatizar la eficacia y eficiencia profesional en la in-

vestigación del delito, citaremos ejemplos de algunas actitudes profesionales deseables, que pueden incorporarse a las futuras evaluaciones para los procesos de certificación del policía de investigaciones mexicano:

- A) Tolerancia intelectual del policía investigador: toda idea, hipótesis de trabajo o metodología tiene un cierto derecho a ser examinada, evitar rechazarla *a priori*.
- B) Incondicionalmente constructivos. Proponer y construir en las diversas atribuciones de la policía de investigaciones.
- C) Responsabilidad profesional en la discusión y análisis de ideas, programas, métodos y técnicas de la actividad investigativa del delito.
- D) Actitud propositiva. Proponer al menos una alternativa equivalente cuando se está en desacuerdo con los resultados obtenidos en algunos casos, con técnicas, métodos o procedimientos aplicados en la función policial.
- E) Persuasión racional, sin bajezas ni trampas, apoyada en la evidencia experimental y el razonamiento lógico como forma de respeto a las personas y a la función de investigar los delitos.
- F) Configurar nuestras creencias institucionales dentro de la policía, en base al pensamiento racional y la evidencia experimental.
- G) Adoptar una actitud diaria de urbanidad, civilidad y cortesía con los ciudadanos, como forma de comportamiento gubernamental, propio de los integrantes de la policía de investigaciones.
- H) Responsabilizarse de su propio pensamiento y entendimiento, evitando discusiones estériles. La crítica para modificar pautas de comportamiento en la policía investigadora, debe hacerse con firmeza, seriedad y responsabilidad intelectual, pero sin arrogancia.
- I) Eliminar la tentación autoritaria de apropiarse del poder de decidir en el trabajo multidisciplinario de la investigación del delito.



En este orden de ideas, para tener derecho a sustentar una evaluación de esta naturaleza, en el proceso de certificación, el policía tendría que presentar una solicitud ante la institución y acompañar la siguiente documentación: constancia de práctica profesional en actividades relacionadas directamente con la investigación de los delitos por un periodo de cuando menos dos años previos y su título profesional con los estudios relacionados que llevó a cabo en ese periodo.

Con el propósito de la certificación profesional, la institución policial integraría un consejo que se desempeñe como cuerpo consultivo del proceso de certificación. Este Consejo opinaría sobre los principios y directrices que guían el proceso en sí, el desarrollo del examen y la recertificación correspondientes. Las decisiones operativas serían competencia de la dirección policial de investigaciones. Los profesionales que se sumaran a la integración del consejo tendrían nombramiento honorífico y se modificará su designación por primera ocasión o ratificación cada año, antes de iniciar el proceso de certificación.

El Consejo policial, para la certificación, debe reunirse cuando menos dos veces al año, con el propósito de llevar a cabo reuniones tendentes a elaborar las convocatorias para los procesos de certificación, elaboración de actas y la preparación de otros documentos de trabajos relacionados con dicho proceso. Además, se crearía un Comité Técnico para la certificación profesional de la policía de investigación, el cual debe conformarse con representantes de la institución policial que administren dicho proceso. Se designaría dentro del comité a cuando menos cuatro integrantes para comisiones académicas, para cada una de las áreas de conocimientos que integran la evaluación de certificación policial. Cada comisión sería la encargada de mantener actualizado el temario y la bibliografía y de revisar los reactivos correspondientes del examen de certificación. Tanto el comité técnico como cada una de las comisiones académicas serían presididos por un representante.

En su oportunidad, la institución encargada de la profesionalización y capacitación de la policía estaría encargada de adminis-

trar y controlar el proceso, incluyendo la aplicación del examen. Otra de sus funciones sería:

- a) diseñar los métodos de preparación, revisión, validación y calificación del examen para la certificación en investigación y debido proceso penal,
- b) formular las políticas para la actualización periódica del examen citado,
- c) implantar un proceso de revisión de las manifestaciones de cumplimiento de educación profesional continua presentadas por los policías certificados en investigación y debido proceso penal,
- d) llevar un registro actualizado de los policías certificados en esta materia, que podrá ser consultado por cualquier parte interesada, previa solicitud y autorización por escrito ante el comité,
- e) promover y difundir el proceso de certificación, y
- f) por último, de preparar y actualizar la guía para la presentación del examen de certificación policial.

El examen de certificación en investigación y debido proceso penal de la función policial sería preparado y aprobado; conforme a los lineamientos emitidos por la institución policial se aplicará tantas veces como determine el comité. Para la aprobación el aspirante deberá alcanzar la puntuación mínima que determine el Consejo. En caso de no alcanzarlo, el aspirante lo podrá presentar nuevamente una vez transcurridos seis meses como mínimo.

Una vez aprobado el examen de certificación, el Comité entregaría un certificado, que le otorga el reconocimiento a su capacidad profesional en investigación y debido proceso penal. El certificado tendría una validez de tres años, transcurridos los cuales deberá ser refrendado por el Comité.

Cuando los policías deseen refrendarlo, se exigiría que de nuevo presenten una solicitud, acompañada de las constancias de

cumplimiento de la educación profesional continua acreditando un mínimo de horas anuales de capacitación o entrenamiento en materia de investigación especializada o en temas del debido proceso penal de los últimos tres años, expedidas por la institución policial o, en su caso, los comprobantes de su actualización profesional, proporcionados por alguna institución de educación superior que imparta estudios con reconocimiento de validez oficial.

El Comité se reservaría el derecho de verificar el correcto cumplimiento del aspirante y todas aquellas situaciones no previstas deben resolverse con normas específicas contempladas en un reglamento.



## CAPÍTULO DÉCIMO

### EL SISTEMA DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL Y CIUDADANO DE LA POLICÍA

La sociedad espera y exige a sus policías el desarrollo de una gestión de calidad y transparente, debido a que el progreso social y su continuidad pasan en gran medida por el ofrecimiento de un oportuno servicio policial. Por tal motivo, una legítima gestión policial —caracterizada por la probidad, la honestidad, la responsabilidad, la veracidad y la eficacia— responde no solo a una exigencia reglamentaria o legal, sino que también es parte de un imperativo ético.

Este sistema constituye un instrumento valioso que permite introducir elementos sustanciales para comenzar a impulsar una nueva cultura basada en indicadores de desempeño policial. Permite verificar la información; la evaluación institucional en un moderno sistema penal acusatorio y requiere que los policías: *a)* desarrollen su actividad con eficacia y eficiencia en la obtención de información de calidad; *b)* apliquen mecanismos operativos oportunos y eficaces que conduzcan a la verificación de la información captada por los sistemas de comunicación policial; *c)* como regla básica, el policía debe establecer un vínculo y hacer contacto con el sitio o personas que han producido la información, en relación con la comisión de un hecho presuntamente delictivo.

La forma adecuada conduce a la instalación de esquemas de evaluación institucional por indicadores de buenas prácticas a través de la aplicación de los denominados protocolos de actuación mínima en diversos supuestos de la investigación de un delito o en el debido proceso penal y, los que tienen como base la evaluación de resultados por la actividad cotidiana en cada caso

concreto mediante la elaboración de las denominadas actas policiales. Ambos instrumentos de trabajo comprenden una parte importante de las acciones de la policía de investigación, que conducirán a dar impulso a una nueva cultura policial, inspirada en un Estado social y democrático de derecho, que construye una adecuada práctica policial de rendición de cuentas. Este tema ha sido abordado magistralmente por John M. Ackerman cuando se refiere a la rendición de cuentas social, que resulta aplicable a una institución policial en el contexto del modelo acusatorio.

En este asunto, el citado autor afirma:

Los gobiernos por sí solos, pueden hacer mucho para mejorar la rendición de cuentas a través de acciones como el fortalecimiento de la vigilancia y la supervisión “desde arriba”, la profesionalización de los servidores públicos a través de reformas de servicio civil, el empoderamiento de vigilantes y contralores internos, el establecimiento de lineamientos básicos de desempeño y la creación de nuevas agencias supervisoras independientes. Sin embargo, la reforma orientada a la rendición de cuentas es mucho más efectiva cuando los actores sociales llevan la batuta en el proceso.<sup>23</sup>

La exigencia legal para que el policía de investigaciones justifique y explique cómo obtuvo las evidencias —máxima expresión de la rendición de cuentas— se traduce en un aspecto de competencia técnica y ética, en la capacidad del policía que las reunió, su posterior identificación y el registro minucioso de las circunstancias de la colección y custodia de las evidencias encontradas.

Por lo tanto, una alternativa viable para que disminuyan los problemas de corrupción e ineficiencia, exige una reforma estructural y funcional de la institución policial: la autonomía técnica en sus funciones que no solamente debe garantizarse en la ley, sino también en la práctica del derecho. La ejecución de ór-

<sup>23</sup> Ackerman, John M., *Estructura institucional para la rendición de cuentas: lecciones internacionales y reformas futuras*, México, Auditoría Superior de la Federación, núm. 9, 2006, (serie: Cultura de la Rendición de Cuentas], p. 18.

denes políticas a los policías transmite el mensaje de que su permanencia en las instituciones depende de su lealtad al poder y no de su capacidad profesional de orden técnico y ético.

La incorporación de parámetros técnicos de decisión en esta área es fundamental. Urge la autonomía e independencia de las instituciones policiales en el país y del Ministerio Público. De esta forma lo han impulsado connotados juristas mexicanos:

Transformar las procuradurías de justicia —las dependencias ministeriales— en verdaderos órganos constitucionales autónomos, cuyos ejes serían: adecuado nombramiento de los procuradores; la creación de los Consejos de ministerios públicos y los de las policías de investigación. Las garantías a esos agentes de una verdadera carrera; la autonomía presupuestal; la autonomía técnica de los fiscales y el juez de control especializado en la averiguación previa. Esta propuesta sería útil, en la lucha contra la corrupción, la impunidad, la inseguridad pública, el ejercicio de la acción penal por razones políticas o “de Estado”, y contra injusticias, especialmente para los que tienen menos recursos para defenderse.<sup>24</sup>

Urgente necesidad tiene el sistema jurídico mexicano en la instrumentación de un Ministerio Público y una policía de investigaciones profesional, en la que la transformación de la justicia refleje los avances democráticos de nuestra época. Como lo menciona el citado jurista, “las procuradurías de justicia deben transformarse en verdaderos órganos constitucionales autónomos”.

La citada propuesta académica solventaría plenamente los obstáculos sistémicos para la facultad de investigación que por lo general enfrenta la policía de investigaciones. Parte de esos obstáculos tienen su origen en la inconsistencia que presenta la carrera policial, cuya capacitación no está liga a la dignificación de la función ni al fortalecimiento del servicio civil. Por otro lado,

<sup>24</sup> Carpizo, Jorge, “¿Se necesita una nueva Constitución en México? Algunas reflexiones y seis propuestas”, *Cuestiones Constitucionales, Revista Mexicana de Derecho Constitucional*, México, núm. 24, enero-junio de 2011.

la institución no cuenta, como otras instituciones de justicia, con autonomía presupuestal suficiente, como efectivamente tiene el Poder Judicial de la Federación y algunos poderes judiciales de las entidades federativas.

Elevar la figura del Ministerio Público al rango de órgano constitucional autónomo llevaría también a la policía de investigaciones a incorporar un régimen verdadero de transparencia y rendición de cuentas. Evitaría el ejercicio de la acción penal por razones políticas o “de Estado” y prevendría injusticias, en particular, aquellas dirigidas a los que tienen menos recursos para defenderse, de las eventuales o recurrentes arbitrariedades del poder público. La asignación de una partida presupuestada anual y obligatoria, determinada en una disposición constitucional, permitiría ahondar en la investigación de delitos de importancia capital. Por otro lado, la autonomía presupuestal abre la posibilidad de que dicha institución policial tenga un sistema de control de gestión, que permita advertir la forma como el subsistema funciona en su globalidad y la manera en que cada uno de los integrantes ejerce sus funciones. En particular, delinea la obligación para que toda la información en torno a los resultados de las investigaciones criminales esté disponible al escrutinio público.

En un sistema de control de la gestión, la tarea de los agentes del Ministerio Público y la policía de investigaciones puede efectivamente supervisarse, además se puede verificar que la persecución de los delitos se mueva en espacios de eficacia y rapidez. Aporta datos también para el fortalecimiento de un servicio profesional de carrera, así como la implantación de sistemas de evaluación de resultados, que conducirá a facilitar la facultad de investigación de los delitos, en el oportuno tratamiento que le brinden las oficinas de la policía, a todas las denuncias tramitadas por ese órgano de persecución penal.



## ANEXOS

### ACTAS DE POLICÍA EN EL SISTEMA ACUSATORIO MEXICANO

#### ACTA POLICIAL I

#### ACTA DE RECONOCIMIENTO DE PERSONAS

##### I. TESTIMONIO

En la \_\_\_\_\_ del municipio de \_\_\_\_\_, estado de Jalisco, a las \_\_\_\_\_ horas, del día \_\_\_\_\_ del año 2013. En las oficinas de la policía, sala de identificación de detenidos, comparece \_\_\_\_\_ que se identifica con credencial \_\_\_\_\_, número \_\_\_\_\_, ante la presencia del oficial de la policía \_\_\_\_\_, expresa que voluntariamente acude a colaborar con las labores policiales para establecer la identidad del probable autor o participe en el delito de \_\_\_\_\_, en el que aparece como víctima \_\_\_\_\_ (-ofendido-) \_\_\_\_\_.

Después de exhibirle un grupo de \_\_\_\_\_ personas, de sexo, edad y características similares, que portan un número del \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_, el/la compareciente expresa que la persona que porta el número \_\_\_\_\_ la reconoce como aquella que observó que realizaba la siguiente acción u omisión: \_\_\_\_\_, a las \_\_\_\_\_ horas del día \_\_\_\_\_ del mes \_\_\_\_\_ del año 2013.

Nombre y firma  
del testigo

Nombre y firma del agente  
de la policía

## II. OBSERVACIONES GENERALES

### III. ANTECEDENTES Y ELEMENTOS DE IDENTIDAD DE LA PERSONA DETENIDA

La persona que porta el número \_\_\_\_ que ha sido señalada por el compareciente, se informa que responde al nombre de \_\_\_\_\_ y tiene registros en los sistemas de inteligencia de esta oficina policial de antecedentes que consisten en \_\_\_\_\_.

Lesiones ( )

Violencia doméstica ( )

Amenazas ( )

Escandalizar en la vía pública ( )

Daños ( )

La identidad de la persona se compone de las siguientes características:

Físicas:

Tipo de vestimenta:

Señas particulares:

A esta acta policial se adjunta fotografía de la diligencia y fotografía individualizada de la persona que ha sido reconocida por el testigo.

Funcionario a cargo del procedimiento de recolección de información y fotografías:

1.                      2.                      3.

Funcionarios policiales que participan en la diligencia de reconocimiento de persona.

1. \_\_\_\_\_ 2. \_\_\_\_\_ 3. \_\_\_\_\_

Firma

Nombre

Acta original entregada por el oficial de policía \_\_\_\_\_,  
placa institucional número \_\_\_\_\_, al agente del Mi-  
nisterio Público de nombre \_\_\_\_\_ en  
apoyo a las investigaciones del delito de \_\_\_\_\_, en el  
que aparece como víctima \_\_\_\_\_.

RECIBE

Nombre y firma del agente del MP: \_\_\_\_\_

Hora: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

La copia del acta policial, firmada de recibido se anexa a la carpeta de investigación policial del agente que llevó a cabo la actividad investigativa de apoyo para establecer la identidad del probable autor o partícipe del hecho.

ACTA POLICIAL 2  
ACTA DE ENTREVISTA DE TESTIGO

La información que le proporcionen al policía deberá anotarla en el acta para hacerla llegar, en su caso, al Ministerio Público. Este a su vez podrá integrarla a la carpeta de investigación para procesar la evidencia racional que contiene.

ACTA DE ENTREVISTA  
TESTIGOS O VÍCTIMAS DEL DELITO

Fecha: \_\_\_\_\_  
Lugar: \_\_\_\_\_  
Hora: \_\_\_\_\_

Con fundamento en el artículo ( ) del Código de Procedimientos Penales, los suscritos \_\_\_\_\_, agentes de la policía ( ) en relación con los hechos que pudieran ser constitutivos del delito de \_\_\_\_\_ cometido en perjuicio de \_\_\_\_\_, procede a entrevistar a la(s) siguiente(s) persona(s):

Nombre del testigo: \_\_\_\_\_  
Dirección: \_\_\_\_\_  
Teléfono: \_\_\_\_\_ Identificación: \_\_\_\_\_

Relato de la entrevista: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Nombre del testigo: \_\_\_\_\_  
Dirección: \_\_\_\_\_  
Teléfono: \_\_\_\_\_ Identificación: \_\_\_\_\_

Relato de la entrevista: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Observaciones y comentarios de los agentes: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Policía	Policía	Persona entrevistada
Nombre y firma	Nombre y firma	Nombre y firma

Recibí original del acta policial: (Nombre del agente del Ministerio Público).

Fecha y hora de recepción: \_\_\_\_\_

### ACTA POLICIAL 3 ACTA DE ENTREVISTA DE TESTIGOS

#### DESCRIPCION DE ELEMENTOS DE IDENTIDAD DEL SOSPECHOSO

Facultad de la policía: fundamento en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que coloca a los agentes de una institución policial como corresponsables en la investigación del delito.

Objetivos de esta acta de entrevista:

- a) Practicar diligencias orientadas a la individualización física de los autores o partícipes del hecho.
- b) Recabar datos para la identificación del imputado y proporcionarlos al Ministerio Público.
- c) Aplicación de algunas técnicas de identificación criminal dirigidas a obtener la identidad del probable imputado.

#### ACTA PARA DETERMINAR IDENTIDAD DEL AUTOR O PARTICÍPE DE UN DELITO

Fecha: \_\_\_\_\_

Lugar: \_\_\_\_\_

Hora: \_\_\_\_\_

Con fundamento en el artículo ( ) del Código de Procedimientos Penales, el suscrito agente de la policía con credencial número \_\_\_\_\_, en relación con los hechos que pudiesen ser constitutivos del delito de \_\_\_\_\_ ocurridos el día \_\_\_\_ a las \_\_\_\_\_ horas, hago de su conocimiento los datos recabados para la identificación del probable imputado:

#### DATOS DE IDENTIDAD:

Nombre: \_\_\_\_\_

Apodo: \_\_\_\_\_

Edad aproximada: \_\_\_\_\_

Sexo: \_\_\_\_\_

Domicilio o lugar de localización: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Ocupación: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

#### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

Complexión: \_\_\_\_\_, Estatura: \_\_\_\_\_, Color de piel:

\_\_\_\_\_, Color y tipo de cabello: \_\_\_\_\_, Ojos: \_\_\_\_\_,

Marcas o tatuajes: \_\_\_\_\_, Barba: \_\_\_\_\_, Bigote: \_\_\_\_\_.

#### OTRAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Tipo de vestimenta: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

¿Usa lentes?: \_\_\_\_\_

¿Usa cachucha o sombrero?: \_\_\_\_\_

Otros: \_\_\_\_\_

Los datos para lograr la identidad del probable autor o partícipe del delito fueron aportados por las siguientes personas:

Víctima: \_\_\_\_\_ (Nombre y domicilio) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Testigos: \_\_\_\_\_ (Nombre y domicilio) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Coautor o copartícipe: \_\_\_\_ (Nombre y domicilio) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Otros medios: \_\_\_\_ (describirlos) \_\_\_\_\_

Solicitud de aplicación de alguna técnica de identificación a los peritos oficiales: \_\_\_\_ (indicarla)

Nombre y firma del policía: \_\_\_\_\_

Nombre y firma del policía: \_\_\_\_\_

Recibe acta de datos de identificación: \_\_\_\_\_ (Agente del Ministerio Público \_\_\_\_\_)

Fecha y hora de recepción del acta: \_\_\_\_\_



## ACTA POLICIAL 4 DERECHOS DEL IMPUTADO

- a) La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 20, apartado B.
- b) Los tratados internacionales.

### ACTA DE LECTURA DE DERECHOS

En \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ días del mes de \_\_\_\_\_ del año \_\_\_\_\_ siendo las \_\_\_\_\_ horas, el policía de nombre \_\_\_\_\_ con número de credencial \_\_\_\_\_ que llevó a cabo la detención, procede a informar a la persona de nombre \_\_\_\_\_ el contenido del artículo ( ) del Código de Procedimientos Penales, que contiene entre otros los siguientes derechos a favor de toda persona detenida, en calidad de probable responsable de un delito:

- I) Le informa de manera clara y comprensible la causa o motivo de su privación de libertad;
- II) No declarar, y lo que diga podrá ser usado en su contra;
- III) Tener una comunicación inmediata para informar de su captura a quien desee;
- IV) La asistencia de un defensor que designe, o bien por un defensor público;
- V) La asistencia de un traductor o intérprete, en caso de no comprender o hablar el idioma castellano;
- VI) Ser presentado inmediatamente ante el Ministerio Público o juez de garantía para ser informado de los hechos que se le imputan;
- VII) No ser sometido a técnicas o métodos que induzcan o alteren su voluntad o atenten contra su dignidad;
- VIII) No ser presentado ante los medios de comunicación, ni ser objeto de información;

IX) Solicitar asistencia social para menores de edad o personas con discapacidad que estén a su cuidado.

En este caso, se le exhibió al detenido la orden emitida en su contra por (autoridad que emitió la orden) \_\_\_\_\_

En delito fragante: \_\_\_\_\_ Fecha y hora \_\_\_\_\_

Caso de urgencia: \_\_\_\_\_ Fecha y hora \_\_\_\_\_

DATOS DE LA(S) PERSONA(S) DETENIDA(S):

Nombre: \_\_\_\_\_

Identificación: \_\_\_\_\_

Domicilio: \_\_\_\_\_

A. ME FUERON LEÍDOS MIS DERECHOS

Nombre y firma del imputado: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_.

B. SE NEGÓ A FIRMAR ( )

1. \_\_\_\_\_ 2. \_\_\_\_\_

Nombre y firma del policía que realiza la detención.

## ACTA POLICIAL 5

### ACTA DE ENTREVISTA AL IMPUTADO

Obligación de la policía: fundamento en el artículo ( ) del Código de Procedimientos Penales.

Es de gran importancia la entrevista al imputado en el esclarecimiento de hechos constitutivos de delito. Cuando está dispuesto a ofrecer información en relación con el delito cometido o también respecto de otros hechos presuntamente delictivos de los que tuvo conocimiento, la policía debe registrar el contenido de esta información, a través de un acta policial y de ser posible videograbarla o audiograbarla. Los datos, evidencias o vestigios que aporte en la entrevista son de suma importancia para el desarrollo de una investigación, que debe encaminarse a recolectar otros elementos de prueba que permitan la verificación de la información aportada por el detenido.

Si el imputado proporciona datos o elementos de prueba que resulten relevantes para los hechos que en ese instante son investigados, deben asentarse de inmediato en el acta respectiva. En cambio, si el imputado quiere hacer el reconocimiento de un hecho por haber sido autor o partícipe, es decir, si desea llevar a cabo una declaración, de inmediato deberá notificarse al agente del Ministerio Público y al defensor público o privado, para que se lleve a cabo en las instalaciones apropiadas de la autoridad investigadora.

REQUISITO IMPORTANTE:

(Anexar Lectura de Derechos cuando se realice la entrevista, y anotar la información esencial que proporcione el imputado).

### ACTA DE ENTREVISTA AL IMPUTADO

Fecha: \_\_\_\_\_

Lugar: \_\_\_\_\_

Hora: \_\_\_\_\_

Con fundamento en el artículo ( ) del Código de Procedimientos Penales, los suscritos \_\_\_\_\_, agentes de la policía ( ) en relación con los hechos que pudieran ser constitutivos del delito de \_\_\_\_\_ cometido en perjuicio de \_\_\_\_\_, procede a entrevistar a la(s) siguiente(s) persona(s):

Nombre del detenido: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

Teléfono: \_\_\_\_\_ Identificación: \_\_\_\_\_

Relato o datos aportados en la entrevista \_\_\_\_\_

( ) En relación con el delito ( ) Con respecto a otros delitos  
investigado de los cuales tuvo conocimiento.

Descripción: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

#### OBSERVACIONES Y COMENTARIOS DE LOS AGENTES:

( ) El detenido explica que es autor o partícipe del delito investigado o de otros delitos. Desea rendir declaración con asistencia de defensor público o privado ante el agente del Ministerio Público. Anotar los datos que aporta al respecto el detenido: \_\_\_\_\_

Traslado a las instalaciones del Ministerio Público.

Fecha y hora: \_\_\_\_\_

Policía  
Nombre y firma

Policía  
Nombre y firma

Persona entrevistada  
Nombre y firma

EL DETENIDO NO DESEA FIRMAR (    )

Recibí original del acta policial: (nombre del agente del Ministerio Público).

Fecha y hora de recepción: \_\_\_\_\_

## ACTA POLICIAL 6

### ACTA DE PRESERVACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA ESCENA DEL CRIMEN

La escena del crimen constituye un lugar muy importante respecto a la investigación de los delitos. La labor de la policía en la escena del crimen es fundamental porque es necesario identificar el lugar, delimitar el perímetro y preservar toda la evidencia física localizada junto con objetos o instrumentos del delito.

#### *¿Cuándo procede preservar la escena del crimen?*

En todos los delitos donde existan evidencias físicas o biológicas necesarias para la investigación de los hechos (robos, homicidios, secuestros, violación, delitos contra la salud, peculado, etcétera). En los casos donde se localicen restos óseos u osamentas, en muertes donde exista duda respecto a la forma en que ocurrieron.

#### *Preservación de la escena del crimen*

¿Cuántos niveles o perímetros de seguridad deben resguardarse por la policía?

1. El primer nivel de seguridad donde está la evidencia principal y las evidencias asociadas.
2. El segundo nivel de seguridad que abarca un perímetro de protección suficiente para la evidencia principal.
3. El tercer nivel de seguridad donde tendrán acceso la policía y el M. P.
4. El cuarto nivel de seguridad donde pueden permanecer los medios de comunicación.

*¿Quiénes deben preservar la escena del crimen?*

La policía que llegue primero al lugar de los hechos, quien tendrá la obligación de entregarle al Ministerio Público o a los servicios periciales de esta institución, un acta en la que reciben la escena del crimen y todas las evidencias asociadas.

ACTA DE CONSERVACIÓN DE LA EVIDENCIA Y PRESERVACIÓN  
DEL LUGAR

En la ciudad de \_\_\_\_\_ a los \_\_\_\_\_ días del mes de \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ del año \_\_\_\_\_, siendo las \_\_\_\_\_ horas, en cumplimiento al aviso dado por:

( ) Policía \_\_\_\_\_

( ) Persona identificada (nombre y domicilio) \_\_\_\_\_

— \_\_\_\_\_

( ) Otros \_\_\_\_\_

El o los suscrito(s) agente(s) de la policía (anotar el nombre completo y número de placa o credencial) \_\_\_\_\_  
constituido(s) en el lugar \_\_\_\_\_  
procede(n) a dar cumplimiento a lo que establece el artículo ( )  
del Código de Procedimientos Penales del estado de \_\_\_\_\_,  
respecto a la preservación y conservación de la evidencia que  
pueda ser útil en la investigación de los hechos ocurridos a las  
\_\_\_\_\_ del día \_\_\_\_\_ que pueden ser constitutivos de delito.

El sitio del suceso o del hallazgo se ubica en \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, entre las calles \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_. A partir de la evidencia principal, se realiza el acordonamiento de la zona con los siguientes niveles de seguridad:

( ) Primer nivel de seguridad: \_\_\_\_\_ metros.

( ) Segundo nivel de seguridad: \_\_\_\_\_ metros.

( ) Tercer nivel de seguridad: \_\_\_\_\_ metros.

( ) Cuarto nivel de seguridad: \_\_\_\_\_ metros.

Por lo tanto, se procede al levantamiento y embalaje de las siguientes evidencias asociativas que por las circunstancias que prevalecen, existe riesgo fundado de que pueden alterarse, perderse o destruirse:

Evidencias físicas: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

*En cuanto al sitio del evento se procede a su:*

( ) Clausura (si se trata de lugar cerrado).

Ubicación del lugar \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

( ) Aislamiento (si se trata de lugar abierto)

Ubicación del lugar \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Lo anterior para efecto de que se preserve el lugar, en virtud de que resulta necesaria la comparecencia de personal especializado para el levantamiento y embalaje de evidencias.

Acto seguido se efectúa la entrega del lugar de los hechos o del hallazgo, objeto de la investigación criminalística, a la siguiente autoridad:

( ) Policía ministerial

Nombre del policía que recibe: \_\_\_\_\_

Número de placa o credencial: \_\_\_\_\_

Fecha y hora de la recepción del lugar: \_\_\_\_\_



( ) Perito de los servicios periciales

Nombre del policía que recibe: \_\_\_\_\_

Número de placa o credencial: \_\_\_\_\_

Fecha y hora de la recepción del lugar: \_\_\_\_\_

( ) Agente del Ministerio Público

Nombre del policía que recibe: \_\_\_\_\_

Número de placa o credencial: \_\_\_\_\_

Fecha y hora de la recepción del lugar: \_\_\_\_\_

## FUENTES

### I. BIBLIOGRAFÍA

- ACKERMAN, John M., *Estructura institucional para la rendición de cuentas: lecciones internacionales y reformas futuras*, México, Auditoría Superior de la Federación, 2006 [serie: Cultura de la Rendición de Cuentas, 9].
- ALEXY, Robert, *El concepto y la validez del derecho*, trad. de Jorge M. Seña, Buenos Aires, Gedisa, 2008 [serie: Cla\*De\*Ma, Filosofía del Derecho].
- \_\_\_\_\_, *Derecho y razón práctica*, México, Fontamara, 1993.
- ALCALÁ ZAMORA Y CASTILLO, Niceto, *Estudio de teoría general e historia del proceso (1945-1972)*, t. II, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1992.
- BARATTA, Alessandro, *Criminología crítica y crítica del derecho penal*, 4a. ed., México, Siglo XXI, 1993.
- BAYTELMAN A., Andrés y DUCE, J. Mauricio, *Litigación penal. Juicio oral y prueba*, México, Fondo de Cultura Económica, México, 2005 [Política y Derecho].
- BECCARIA, César Bonesano, *Tratado de los delitos y de las penas*, 18a. ed., México, Porrúa, 2010.
- BENTHAM, Jeremías, *Tratado de las pruebas judiciales*, Buenos Aires, Valletta Ediciones, 2002.
- BERGALI, Roberto, *Hacia una cultura de la jurisdicción. Ideología de jueces y fiscales*, Buenos Aires, Ad-Hoc, 1999.
- BINDER, Alberto M., *Introducción al derecho procesal penal*, 2a. ed., Buenos Aires, Ad-Hoc, 2004.
- BOBBIO, Norberto, *Derecho y lógica*, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Filosóficas, 2009.

- BORJA MAPELLI, Caffarena y TERRADILLOS BASOCO, Juan, *Las consecuencias jurídicas del delito*, 3a. ed., Civitas, 1996.
- BRICHETTI, Giovanni, *La evidencia en el derecho procesal penal*, Buenos Aires, Ediciones Jurídicas Europa-América, 1973.
- BUNGE, Mario, *Diccionario de filosofía*, 2a. ed., México, Siglo XXI, 2002.
- CALVO, José, *Derecho y narración. Materiales para una teoría y crítica narrativista del derecho*, Barcelona, Ariel, 1996.
- CALSAMIGLIA, Albert, *Racionalidad y eficiencia del derecho*, México, Fontamara, 2003 [Biblioteca de Ética, Filosofía del Derecho y Política].
- CARBONELL, Miguel, *Los juicios orales en México*, 3a. ed., México, Porrúa, Renace y Universidad Nacional Autónoma de México, 2011.
- \_\_\_\_\_ y OCHOA REZA, Enrique, *¿Qué son y para qué sirven los juicios orales?*, 7a. ed., México, Porrúa, Renace y Universidad Nacional Autónoma de México, 2011.
- CEJUDO, Guillermo M., *La construcción de un nuevo régimen de rendición de cuentas en las entidades federativas*, México, Auditoría Superior de la Federación, 2009 [serie: Cultura de la Rendición de Cuentas 12].
- COMANDUCCI, Paolo, *Razonamiento jurídico. Elementos para un modelo*, 2a. ed., México, Fontamara, 2009 [Biblioteca de Ética, Filosofía del Derecho y Política].
- DELLEPIANE, Antonio, *Nueva teoría de la prueba*, Santa Fe de Bogotá, Temis, 1997.
- DÍAZ-ARANDA, Enrique, *Proceso penal acusatorio y teoría del delito (Legislación, jurisprudencia y casos prácticos)*, México, Straf, 2008.
- \_\_\_\_\_, *Teoría del delito en el juicio oral*, México, Straf, 2012.
- DÍAZ DE LEÓN, Marco Antonio, *Teoría de las pruebas penales*, 3a. ed., México, Porrúa, 1991.
- DOMÍNGUEZ VIAL, Andrés, *La policía de investigación criminal. Fundamentos, racionalidad y operación*, Chile, Procuraduría General de Justicia del Estado, 2005.

- DWORKIN, Ronald, *El imperio de la justicia*, trad. de Claudia Ferrari, España, Gedisa, 2008.
- \_\_\_\_\_, *Ética privada e igualitarismo político*, España, Paidós, 1993.
- DUCE, Mauricio *et al.* (eds.), *Reformas procesales penales en América Latina*, Santiago de Chile, 2005 [Centro de Estudios de la Justicia de las Américas].
- FERRAJOLI, Luigi, *Derecho y razón. Teoría del garantismo penal*, 3a. ed., Valladolid, Trotta, 1998.
- \_\_\_\_\_, *Los fundamentos de los derechos fundamentales*, Madrid, Trotta, 2001.
- \_\_\_\_\_, *Derechos y garantías. La ley del más débil*, 3a. ed., Madrid, Trotta, 2002.
- FIX-FIERRO, Héctor, *Justicia y eficiencia. Estudio jurídico sobre la racionalidad económica en la función judicial*, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2006.
- \_\_\_\_\_, *Tribunales, justicia y eficiencia. Estudio jurídico sobre la racionalidad económica en la función judicial*, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2006.
- FOUCAULT, Michel, *La verdad y las formas jurídicas*, 2a. ed., Barcelona, Gedisa, 2003.
- \_\_\_\_\_, *Los anormales*, trad. de Horacio Pons, Argentina, Fondo de Cultura Económica, 2010.
- FURNO, Carlo, *Teoría de la prueba legal*, México, Obregón y Heredia, 1983.
- GADAMER, Hans-Georg, *El giro hermenéutico*, trad. de Arturo Parada, 3a. ed., Madrid, Cátedra, 2007 [colección: Teorema, serie: Mayor].
- GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo, *La lucha contra las inmunidades del poder*, 3a. ed., España, Civitas, 1983.
- GASCÓN ABELLÁN, Marina, *Los hechos en el derecho. Bases argumentales de la prueba*, Madrid, Marcial Pons, Monografías Jurídicas, 1999.

- GONZÁLEZ IBARRA, Juan de Dios, *Metodología jurídica epistémica*, México, Fontamara, 2003.
- GÓMEZ COLOMER, Juan Luis, *El sistema de enjuiciamiento criminal propio de un Estado de derecho*, México, Universitat Jaume, Instituto Nacional de Ciencias Penales, 2008.
- GÓMEZ-PALACIO, Ignacio *et al.*, *Inseguridad en México, ¿Presente/Pasado! y ¿Futuro?*, México, Instituto Mexicano para la Justicia, Causa Ciudadana, A.P.N., 2002.
- HABERMAS, Jürgen, *Verdad y justificación*, España, Trotta, 2007.
- HIGHTON I., Elena y ÁLVAREZ, Gladys S., *Mediación para resolver conflictos*, 2a. ed., Buenos Aires, 2004.
- IBÁÑEZ PERFECTO, Andrés, *Los “hechos” en la sentencia penal*, México, Fontamara, 2007 [Biblioteca de Ética, Filosofía del Derecho y Política].
- JIMÉNEZ ASCENCIO, Rafael, *Imparcialidad judicial y derecho al juez imparcial*, Navarra, Arazadi, 2002.
- LARA ESPINOZA, Saúl, *De las garantías constitucionales en materia penal*, México, Porrúa, 1998.
- LARRAÑAGA, Pablo, *El concepto de responsabilidad*, México, Fontamara, 2000.
- LEVENE, Ricardo, *El debido proceso penal y otros temas*, Costa Rica, Naciones Unidas, Ilanud-Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, 1981.
- LUHMANN, Niklas, *Confianza*, España, Anthropos, Universidad Iberoamericana, 2005.
- MALEM SEÑA, Jorge F., *La corrupción. Aspectos éticos, económicos, políticos y jurídicos*, España, Gedisa, 2002 [serie: Cla-De-Ma].
- MÁRQUEZ GÓMEZ, Daniel y SÁNCHEZ CASTAÑEDA, Alfredo, *Las falsas divergencias de los sistemas inquisitivo y acusatorio. El idealismo alrededor de los juicios orales en México*, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2012.
- MASSINI CORREAS, Carlos I., *Objetividad jurídica e interpretación del derecho*, México, Porrúa-Universidad Panamericana, 2008.

- MIR PUIG, Santiago, *Función de la pena y teoría del delito en el Estado social y democrático de derecho*, 2a. ed., Barcelona, Bosch, 1982.
- MONTIEL SOSA, Juventino, *Criminalística I*, 2a. ed., México, Limusa, 2011.
- MUÑOZ CONDE, Francisco, *Introducción al derecho penal*, 2a. ed., Argentina, BdeF Ltda., Su Gráfica Basabilvaso, 2007.
- NEUMAN, Elías, *La mediación penal y la justicia restaurativa*, México, Porrúa, 2005.
- NIETO, Alejandro, *El malestar de los jueces y el modelo judicial*, España, Trotta, 2010.
- NINO, Carlos Santiago, *Consideraciones sobre la dogmática jurídica*, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1989.
- OTERO PARGA, Milagros, *Cuestiones de argumentación jurídica*, 2a. ed., México, Porrúa, 2008.
- OVALLE FAVELA, José, *Garantías constitucionales del proceso*, México, McGraw-Hill, 1995.
- PÉREZ ESCOBAR, Jacobo, *Metodología y técnica de la investigación jurídica*, 3a. ed., Bogotá, Temis, 1999.
- PÉREZ SARMIENTO, Eric Lorenzo, *Fundamentos del sistema acusatorio de enjuiciamiento penal*, Bogotá, Temis, 2005.
- RENTERÍA, Adrián, *Discrecionalidad judicial y responsabilidad*, México, Fontamara, 2001.
- RIBERO TORAL, Gerardo, *Verdad y argumentación jurídica*, 3a. ed., México, Porrúa-Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato, 2009.
- ROJAS AMANDI, Víctor Manuel, *Argumentación jurídica*, México, Oxford, 2010.
- SALAZAR UGARTE, Pedro, *La democracia constitucional. Una radiografía teórica*, México, Fondo de Cultura Económica-UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2008.
- SANDOVAL, Irma Erendira (coord.), *Corrupción y transparencia. Debatiendo las fronteras entre Estado, mercado y sociedad*, México, Siglo XXI, 2009.

- SANTIAGO JUÁREZ, Mario (dir.), *Manual de acceso a la justicia y debido proceso para mujeres e indígenas en México*, México, Plaza y Valdés Editores, 2012.
- SARTORI, Giovanni, *Ingeniería constitucional comparada*, trad. de Roberto Reyes Mazzoni, México, Fondo de Cultura Económica, 2010.
- SHOPENHAUER, Arthur, *El arte de tener razón*, trad. de Jesús Albores Rey, México, Filosofía Alianza, 2009.
- TARUFFO, Michelle et al., *Algunas consideraciones sobre la prueba judicial*, Madrid-México, Fontamara-Fundación Coloquio Jurídico Europeo, 2011.
- \_\_\_\_\_, *La prueba de los hechos*, trad. de Jordi Ferrer Beltrán, Madrid, Trotta, 2002.
- TENORIO TAGLE, Fernando, *Cultura, sistema penal y criminalidad*, México, Fondo de Cultura Económica, 2002 [Selección de Obras de Política y Derecho, Ciudades Seguras I].
- VÁZQUEZ, Rodolfo (comp.), *Interpretación jurídica y decisión judicial*, 3a. ed., México, Fontamara, 2002.
- WITKER, Jorge, *Metodología de la enseñanza del derecho*, México, Porrúa, 2008.
- WROBLEWSKI, Jerzy, *Sentido y hecho en el derecho*, México, Fontamara, 2008.
- ZAFFARONI, Eugenio Raúl (coord.), *El proceso penal. Sistema penal y derechos humanos*, 2a. ed., México, 2000.
- \_\_\_\_\_, *El enemigo en el derecho penal*, México, Ediciones Coyoacán, FLASUD, 2007.

## II. HEMEROGRAFÍA

- “Una perspectiva integral sobre la administración de justicia”, *Revista Sistemas Judiciales*, Buenos Aires, Ediciones del Centro de Estudios de la Justicia de las Américas (CEJA), 2005.
- BARATTA, Alessandro, “El pensamiento crítico y la cuestión criminal”, *Revista Anthropos. Huellas del Conocimiento*, Iña-

ki Rivera Beiras y Camilo Bernañ (coords.), España, Nariño, núm. 204, 2004.

*Alter, Revista Internacional de Teoría, Filosofía y Sociología del Derecho*, México, Ediciones Coyoacán, FLASUD, 2006.

*Revista de Ciencias Penales, 70 Aniversario 1938-2008*, México, Ubijus, Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, núm. 1, 2008.

“El Acceso a la justicia como garantía de los derechos económicos, sociales y culturales”, Estudios de los Estándares fijados por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, Washington, Comisión Interamericana de Derechos Humanos-Organización de los Estados Americanos, 2007.

### III. LEGISLACIÓN

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, *Agenda penal, compendio de leyes y reglamentos y otras disposiciones conexas sobre la materia*, México, ISEF, 2011.

Código Federal de Procedimientos Penales, *Agenda penal, compendio de leyes y reglamentos y otras disposiciones conexas sobre la materia*, México, ISEF, 2011.

Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, Decreto núm. 611/06 II P.O., aprobado el 15 de junio de 2006 por la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado de Chihuahua. Vigente a partir del 1o. de enero de 2007, Chihuahua.

Ley de Justicia Penal Alternativa del Estado de Chihuahua, *Periódico Oficial del Estado*, núm. 98, 9 de diciembre de 2006, aprobada por el Congreso del Estado de Chihuahua en el decreto número 693706 I P.O.

Ley de la Policía Federal, *Diario Oficial de la Federación*, 9 de junio de 2009, Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.